

**UNIVERSIDAD DE MADRID**  
**FACULTAD DE DERECHO**



**TESIS DOCTORAL**

**La inversión de capitales extranjeros en España**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR  
PRESENTADA POR

**Guillermo Frühbeck Frühbeck**

**Madrid, 2015**



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5323731050

541

TE  
377

TE  
369

LAS INVERSIONES DE CAPITALS EXTRANJEROS EN ESPAÑA.

TESIS DOCTORAL

PRESENTADA POR

DON GUILLERMO FRUHBECK

Marqués del Riscal, 11

Madrid

REDACTADA BAJO LA DIRECCION

DEL CATEDRATICO

DON ANTONIO DE LUNA

## I

### ANTECEDENTES HISTORICOS.

El problema de las inversiones de capital extranjero en una nación se encuentra íntimamente ligado a la condición que el extranjero posea en el orden jurídico de la misma.

La antigüedad clásica consideró al extranjero como un verdadero extraño en el ordenamiento jurídico y excluído como tal de cualquier participación en los derechos públicos y privados. Prueba de ello es que en los idiomas clásicos la palabra "extranjero" venía a tener el mismo significado que la de "enemigo" (hostia - extranjero - enemigo).

Según dice Arias Ramos, en el Derecho Romano ese rigor primitivo frente al extranjero fué dulcificado por algunas instituciones, tales como la clientela y la hospitalidad, llegando finalmente, sobre todo en la esfera mercantil, a convertirse en "ius gentium", derecho aplicable por igual en Roma a todas las personas, a diferencia del Derecho Quiritarario, únicamente aplicable a los ciudadanos romanos.

Durante la Edad Media, y debido a la influencia del cristianismo, y por lo que se refiere al ámbito europeo, la condición del extranjero varió considerablemente, si bien la hostilidad encubierta hacia el mismo continuó vigente en algunas instituciones como el derecho de aubana, que privaba al extranjero de la capacidad de testar, y en algunas legislaciones la incapacidad para adquirir bienes inmuebles.

En las legislaciones modernas suelen emplearse tres sistemas respecto a la condición jurídica del extranjero, citados por Ribonet:

- 1º) El de reciprocidad diplomática.
- 2º) El de reciprocidad legislativa.
- 3º) El de igualdad.

El primero condiciona los derechos del extranjero a lo que se haya pactado en Tratados Internacionales con su país de origen.

El sistema de la reciprocidad legislativa hace depender la capacidad y condición jurídica del extranjero del trato que conceda el país de origen del mismo en su propia legislación a los nacionales del Estado.

Y, finalmente, el sistema de igualdad concede, en principio

al extranjero los mismos derechos que a los nacionales propios, con independencia de Tratados Diplomáticos y de la legislación interna del país del extranjero.

Este último sistema es el que tanto en el ordenamiento jurídico como en el moral se considera el más justo, si bien por desgracia aún no ha sido adoptado por gran número de legislaciones de diversos países. Parte de la base de que los derechos civiles corresponden al hombre por su condición de tal y que, por lo tanto, deben otorgarse con independencia de la nacionalidad del individuo.

Por lo que se refiere a nuestro Derecho español, los antecedentes históricos del mismo siempre han sido abiertamente favorables al extranjero. Según Rodríguez Ramón, tanto el Fuero Real como las Partidas de Alfonso X el Sabio - hacen llegar a la conclusión de que durante la Edad Media los extranjeros gozaban en España de un trato infinitamente superior al de los demás países de la Europa cristiana.

Posiblemente ello ha sido debido a que nuestro país fué - el centro de unión de las corrientes de pueblos y razas más diversas en aquella época, dándose el caso de que en ciudades como Toledo o Córdoba conviviesen pacíficamente, ejerciendo su comercio o industria, cristianos, musulmanes o - judíos, rigiéndose por sus propias normas de origen casi - siempre religioso por lo que respecta a sus instituciones familiares y a su capacidad legal y, en cambio, por lo que

se refería a las relaciones mercantiles entre ellos.

Según Rodríguez Ramón, el derecho de aubana fué apli cable en España.

## II

### LA ACTUAL CONDICION DEL INDIVIDUO EN EL DERECHO INTERNACIONAL MODERNO.

Una de las condiciones esenciales básicas para la mejor comprensión de este trabajo es el examen de la situación del individuo en la actualidad frente al Derecho Internacional, hallándose el problema de la categoría - que se concede al mismo directamente ligado con la estructura del Derecho Internacional.

Según Partsch, en su monografía "Individuum im Völkerrecht", la solución que se dé al problema de la situación jurídica del individuo frente al Derecho Internacional depende asimismo del concepto que se tenga de este Derecho, Si el Derecho Internacional se considera únicamente como un conjunto de convenios individuales celebrados entre los Estados, es lógico que el individuo como tal, sea persona física o persona jurídica de naturaleza privada, no tiene cabida en este ámbito del Derecho Internacional, puesto que bajo esta concepción los únicos sujetos posibles de dicho Derecho son los Esta--

dos que contratan con soberanía propia y únicamente son susceptibles de derechos y obligaciones de carácter internacional.

Unicamente, continua diciendo Partsch, en el caso de - que el Derecho Internacional sea concebido como un ordenamiento jurídico objetivo, puede plantearse el problema del lugar que corresponde al individuo en dicho ordenamiento. No obstante, tampoco así queda resuelto el - problema, puesto que según ciertos autores, puede existir un ordenamiento jurídico de tipo objetivo, pero que se considere a los individuos como sujetos de derecho, sino únicamente a los Estados soberanos y a algunas Corporaciones públicas de carácter internacional.

Asimismo, la situación jurídica que se conceda al individuo en el Derecho Internacional depende en gran parte del concepto que se tenga acerca de las relaciones entre el Derecho interno nacional y el Derecho Internacional. Si se intenta separar totalmente el ámbito de la - Comunidad jurídica interna nacional del de la Comunidad Internacional, es lógico que el individuo no tenga la - posibilidad de ocupar lugar alguno dentro de dicha Comunidad.

Por otra parte, aún en el supuesto de considerar estrechamente vinculados y formando una comunidad jurídica - única el Derecho interno nacional y el Derecho Internacional, tal concepción no trae como consecuencia inme-



diata la condición del individuo como sujeto del Derecho Internacional. Es cierto que el individuo quedaría sometido a ciertas obligaciones de Derecho Internacional, pero queda la pregunta en el aire de si le corresponden derechos de este tipo y si posee la legitimación necesaria para hacerlos valer ante Organismos internacionales.

Asimismo son de importancia en este caso las regulaciones materiales que contenga el Derecho Internacional, - pues las mismas no tienen por qué estar coordinadas con la posición formal de individuo en este Derecho. Los Estados pueden convenir entre ellos una amplia protección del individuo, por una parte, y, por la otra, negarle el ejercicio de estos derechos en nombre propio en el terreno internacional.

Resulta lógico que los individuos tiendan a conseguir - una posición jurídica formal que les permita hacer valer estos derechos por sí solos, como pueden hacerlo en el Derecho interno. Ahora bien, esta postura de sujeto de Derecho Internacional, a que tiende el individuo, tiene asimismo un reverso muy peligroso, consistente en que de la misma manera que ejercita derechos, se le puede exigir, en tal caso, una responsabilidad personal por ciertos actos, como por ejemplo indemnizaciones por daños - causados en caso de guerra.

Por lo que respecta a esta posición formal del individuo como sujeto de Derecho Internacional, existen en la so-

tualidad diversas doctrinas y tendencias. La evolución histórica de las mismas consiste sucintamente en lo siguiente:

La teoría naturalista del Derecho Internacional que tuvo predicamento hasta aproximadamente la mitad del Siglo Diecinueve y que aún hoy cuenta con adeptos, consideraba en principio al individuo como portador de derechos y de obligaciones internacionales.

Posteriormente, y a mediados del Siglo Diecinueve, y más aún a principios del Veinte, al sistematizarse jurídicamente los problemas de estructura del Derecho Internacional, se llegó a la conclusión de que las normas de Derecho Internacional han sido creadas únicamente por los Estados, rigiendo, por lo tanto, únicamente para los mismos. Por este motivo, sólo los Estados pueden ser titulares de derechos y obligaciones de carácter internacional, no existiendo en el sistema de Derecho Internacional lugar alguno para el individuo.

Partiendo de esa doctrina, las normas del Derecho Internacional autorizaban únicamente a los Estados para comparecer ante órganos de la comunidad jurídica internacional y hacer valer ante los mismos sus derechos y obligaciones. En cuanto el Derecho Internacional, que trataba también los derechos y obligaciones de personas individuales, no por esto les concedía una legitimación jurídica para defender los mismos, puesto que esta legiti-

ción la tenían los Estados, quienes podían hacer uso de ella o no, según las circunstancias. Efectivamente, esta concepción del Derecho Internacional tenía una base firme en el hecho de que las normas de Derecho Internacional existentes en la época del auge de esta doctrina se referían en gran parte a la conducta de los Estados.

No obstante, ya durante la vigencia de esta doctrina, - se presentaron casos prácticos que no encuadraban en esta concepción jurídica, especialmente las instancias judiciales interestatales, como por ejemplo la Jurisdicción Internacional y el Arbitraje Internacional, ante los cuales personas individuales tenían acceso y podían comparecer. Ejemplo de estas instancias eran los Tribunales Mixtos y los Tribunales Arbitrales creados por el Tratado de Versalles.

No obstante, la doctrina que comentamos negó a dichos - Organismos el carácter de Tribunales Internacionales, - considerándoles más bien como Tribunales Interestatales, es decir como órganos judiciales dependientes a la vez - de varios Estados.

Esta doctrina que hemos expuesto es conocida normalmente como la doctrina del Derecho Internacional clásico - basado en la soberanía de cada Estado sobre sus propios súbditos y al mismo tiempo en las facultades de dicha - soberanía para contratar libremente con otros Estados.

No obstante, como ya hemos expuesto anteriormente, esta teoría nunca fué aceptada unánimemente. Ya a principios de siglo, Rehm manifestó la opinión en Alemania de que el individuo tenía ciertas obligaciones de Derecho Internacional. Asimismo sufrió ataques por la Escuela sociológica-jurídica francesa de Duguit, Soelle y Politis, que niegan en general al Estado como sujeto de derecho y únicamente quieren concebir al individuo como tal sujeto de Derecho Internacional; y, finalmente, la teoría ecléctica de los autores de Lauterpacht y Dahm, que consideran excepcionalmente al individuo como sujeto de Derecho Internacional al lado de los Estados, aquellos otros como Verdross y Quadri que consideran al individuo como sujeto de obligaciones, pero no de derechos, y finalmente las que le consideran como objeto de Derecho Internacional.

Actualmente, siguiendo la tesis de Partsch, las teorías sobre la posición del individuo frente al Derecho Internacional pueden clasificarse en tres grupos:

- 1º) La jurídico-dogmática que constituye la escuela sociológica francesa.
- 2º) La ideológico-humanitaria, que ha obtenido gran predicamento después de la segunda guerra mundial, y que considera una comunidad jurídica internacional de los individuos como la panacea para evitar los actos arbitrarios de los diversos Estados. La misma

parte de la base de reforzar la posición jurídica - del individuo, considerando a la misma concordante con la protección del individuo, pero se le escapa, sin embargo, que al privar al individuo de la protección de la soberanía del Estado, el mismo, sobre - todo en el caso de una divergencia entre una orden - de su Estado y una norma de Derecho Internacional, - se ve obligado a responder personalmente frente a - este último.

- 3ª) La doctrina realista que, analizando la auténtica - evolución del Derecho Internacional moderno, intenta formular nuevamente la relación existente entre el individuo y el Estado. Dicha doctrina puede considerarse como ecléctica y goza en la actualidad de gran predicamento, habiendo recogido todos los elementos aprovechables de las dos doctrinas anteriores, basándose más bien en una formulación justa de los hechos y evitando caer en los extremos ideológicos y teóricos de las teorías anteriormente expuestas. Intenta, en especial, tener en cuenta el hecho que en el momento actual de la organización internacional la verdadera carga de la conservación del - orden y de la paz corresponde a los Estados.

Por otro lado, estudiando el problema que acabamos de - seponer, Rousseau distingue asimismo dos doctrinas sobre la cuestión de si el individuo es o no sujeto de Derecho Internacional. Dichas dos doctrinas clasificadas

por Rousseau son las siguientes:

- 1º) La doctrina positivista, que viene a ser la que ante hemos designado como doctrina clásica, la cual nie que el individuo pueda ser sujeto de Derecho Internacional, partiendo de que este Derecho únicamente regula las relaciones entre los Estados y, por lo tanto, únicamente éstos pueden ser titulares de derechos y obligaciones de Derecho Internacional.
- 2º) La llamada por Rousseau doctrina realista, la cual, atribuyendo al Estado al menos el carácter de sujeto principal del Derecho Internacional, considera a los individuos asimismo como sujetos de categoría secundaria. Para tales autores, el Estado no constituye más que el procedimiento técnico para la gestión de los intereses colectivos, y se basan para justificar su teoría en que el Derecho, sea interno o sea internacional, únicamente puede dirigirse a individuos dotados de inteligencia y de voluntad. Por lo tanto, según estos autores, la sociedad internacional es una sociedad humana compuesta única y exclusivamente de individuos.

Frente a estas dos teorías, Rousseau adopta una postura ecléctica, considerando que si bien ambas concepciones contienen una parte de verdad, las mismas ofrecen una interpretación demasiado unilateral de lo que constituye la realidad internacional. No puede negarse, según Ro

seu, que el individuo sea el destinatario real de toda norma de derecho y, por lo tanto, un verdadero sujeto - también del Derecho Internacional., pero tampoco es - menos cierto que tales individuos como particulares - ves son titulares efectivos de competencias internacio- nales, hallándose a este respecto colocados en situaci- de inferioridad frente a las colectividades estatales - e interestatales. Por lo tanto y salvo las excepciones - que le afectan al principio, los individuos no pueden - hacer valer directamente por sí solos las normas de De- recho Internacional, sino únicamente pueden aplicarlas - por procedimientos internos, es decir de su propio De- recho Estatal.

Y esta es la situación jurídica que por el momento, se- gún dice Rousseau, rige el funcionamiento de la socie- dad internacional.

En la práctica jurídica internacional de los últimos - tiempos, el individuo ha realizado ciertas conquistas - en el sentido de ser considerado como sujeto del Dere- cho Internacional. Principalmente se trata de los prin- cipios para instituir una jurisdicción penal internacio- nal y, en segundo lugar, de la posibilidad del indivi- duo de comparecer ante instancias jurídicas de prote- ción internacionales.

En el sentido de esta evolución se encuentran en p- lugar los indicios de una jurisdicción penal internaio

nal, especialmente en los casos de violación del Derecho de la guerra y de la prohibición de una guerra de agresión.

La realidad es que, pese a todas las tentativas realizadas hasta la fecha, no se ha conseguido asentar las bases para un Convenio de carácter internacional relativo a una jurisdicción penal. Ni siquiera los trabajos previos para una codificación de dichos principios penales sido terminados. Como único punto positivo existe el Convenio sobre el genocidio de 9 de Diciembre de 1948, el cual continua encuadrado en el ámbito del Derecho tradicional, puesto que la competencia para juzgar los casos, así como para castigarlos, se encomienda a los Tribunales nacionales, y únicamente en el caso de que existiese un Tribunal Internacional, sería la competencia de éste.

La prohibición del genocidio goza, pues, de una protección similar a las ya existentes en el Derecho tradicional Internacional, como son las prohibiciones de la piratería, de la trata de blancas, del contrabando de guerra y otros similares. Con todos estos casos, igual que en el del genocidio, la disposición jurídica material es de Derecho Internacional, pero el procedimiento y la ejecución de la pena se encomienda a los Tribunales nacionales.

Ya en el Derecho tradicional existió asimismo la posibilidad en diversos casos de que las personas individuales



tuvieran la posibilidad de una comparecencia ante ciertas instituciones de protección internacional. Un antecedente fué el Convenio relativo a la creación de un Tribunal Internacional de Presas, Tribunal que no llegó a constituirse, pues el Convenio no fué ratificado por los Estados signatarios.

Otros antecedentes son el Tribunal Centroamericano que ejerció su actividad entre 1908 a 1918, los Tribunales Arbitrales Mixtos creados como consecuencia del Tratado de Versalles y del Tratado Germano Polaco relativo a la Alta Silesia de 5 de Diciembre de 1922, la Comisión Mexicana y Americana de reclamaciones y los Tribunales Arbitrales Mixtos europeos.

Siempre fué discutido el carácter internacional de estas instancias, y lo mismo sucede con la Comisión Arbitral de los Tratados de Bonn de fecha 26 de Abril de 1952, ante los cuales pueden comparecer personas individuales, siempre y cuando los Estados a que pertenezcan se hayan adherido a los Estatutos de la Comisión.

No obstante todos estos aspectos negativos, en los últimos tiempos ha ganado terreno la institución de un derecho de petición a las Instancias Internacionales. Especialmente en los cuatro Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de guerra de 12 de Agosto de 1949 se ha concedido a las personas protegidas el derecho de dirigirse a su Estado protector por vía de

reclamación. Asimismo existe actualmente el derecho de petición a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa, especialmente por el hecho de que dicha Comisión tiene hoy en día la potestad de presentar esta reclamación al Tribunal de Derechos Humanos Europeo. - Pero éstos son también los únicos indicios pactados, - en los cuales se permite al individuo comparecer por sí solo y en propia representación de sus derechos ante - Instancias Internacionales de protección.

### III

#### LA SITUACION JURIDICA DEL EXTRANJERO FRENTE A OTRO ESTADO.

En el capítulo anterior expusimos que generalmente, y - pese a las tendencias modernas, el individuo en la actualidad si bien es titular de obligaciones y derechos basados en normas internacionales, no está más que en - limitados casos en condiciones de ejercer las mismas - por sí solo. En cambio, el Derecho Internacional obliga a los diversos Estados entre sí a que traten de una determinada manera a sus respectivos súbditos, constituyendo estas normas jurídicas lo que la doctrina ha venido a llamarse el Derecho de Extranjería. En realidad, - bajo esta expresión se trata de los deberes que un Estado tiene frente a los extranjeros que son súbditos de - otro Estado. El principio general vigente en Derecho Internacional es que el extranjero debe de gozar de los - mismos derechos que gozan los súbditos del propio Estado, lo que ha venido a llamarse la equiparación del extranjero a los nacionales propios. En la práctica, no - obstante, los derechos de los extranjeros han venido -

siendo limitados por los diversos Estados, de acuerdo con las circunstancias, abriéndose poco a poco paso el principio de la equiparación en los diversos Tratados. - A través de éstos, como dice Verdross, se ha llegado a fijar un mínimo jurídico internacional y es este mínimo de derechos y obligaciones el que los Estados están obligados a conceder a los extranjeros.

En el sentido de los pueblos civilizados y los que pertenecen a la cultura occidental, este mínimo antes expuesto puede, siguiendo la versión de Verdross, quedar reducido a cinco grupos:

- 1º) Todo extranjero ha de ser reconocido como sujeto de derecho.
- 2º) Los derechos privados de los extranjeros han de respetarse en principio.
- 3º) Han de concederse a los extranjeros los derechos esenciales relativos a la libertad.
- 4º) Han de quedar abiertos al extranjero los procedimientos judiciales.
- 5º) Los extranjeros han de ser protegidos contra delitos que amenacen su vida, libertad, propiedad y honor.

De estos cinco principios derivamos inmediatamente al problema jurídico de la capacidad que deben tener los -

extranjeros.

Del principio primero antes expuesto se deriva que, reconociendo a todo extranjero como sujeto de derecho, el mismo ha de ser lógicamente considerado como titular de derechos y obligaciones, aunque esta norma no obliga a que se le permita adquirir todos los derechos privados, sino que bastará con que pueda ejercer aquéllos que son esenciales e imprescindibles, dada su condición de ser humano. Entre éstos cita Verdross la facultad de adquirir los objetos de consumo diario, la capacidad contractual y matrimonial y la capacidad para testar y para heredar. Por otro lado, un Estado puede prohibir, aunque ello no esté ni mucho menos de acuerdo con las modernas tendencias del Derecho Internacional, la adquisición de determinados objetos o derechos, tales como industrias, bienes inmuebles o participaciones en determinadas empresas.

Asimismo existe una frontera determinada por el Orden Público del Estado nacional, más allá de la cual no puede permitirse el ejercicio de los derechos privados del extranjero. Así, por ejemplo, en una nación europea, en la cual no existe la poligamia, un extranjero, para qui la poligamia fuese practicable con arreglo a su legislación de origen, no podría practicar la misma por razones obvias de Orden Público.

Conforme al principio antes citado del respeto de los - derechos privados adquiridos, queda prohibida la confiscación de bienes privados extranjeros, siendo no obstante lícita la expropiación de propiedades privadas - extranjeras en interés público, puesto que en tal caso el extranjero estaría en la misma situación que un nacional.

#### El derecho de libertad del extranjero.

El extranjero queda sometido a la supremacía del Estado que ha escogido para su residencia, pero tiene la obligación de respetar la fidelidad que dicho extranjero debe frente a su Estado patrio. De allí que el extranjero no puede ser obligado a la prestación de servicios militares o de índole similar, ni se le puede obligar a - efectuar actos que sean dirigidos contra su Estado propio. Asimismo en virtud de este derecho de libertad no se puede impedir a los extranjeros el ejercicio de una determinada religión, pero sí puede obligarse a los mismos por razones de Orden Público a que realicen dichas prácticas religiosas en privado.

#### Los extranjeros ante la vía judicial.

Es lógico que en virtud de los derechos de tipo fundamentalmente privado que se reconocen a los extranjeros, - los mismos serían irrisorios si el extranjero no tuviese la capacidad necesaria para hacer valer estos dere-

chos asimismo en la vía judicial. En las legislaciones antiguas y asimismo en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil se hacía depender la posibilidad de la comparecencia de un extranjero ante los Tribunales de la llamada "cautio judicatum solvi", o sea la caución de arraigo - en juicio, caución que, como hemos dicho anteriormente, existió también en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, tenía por motivo el buscar una garantía para los nacionales súbditos del propio Estado en el caso de que fuesen demandados por un extranjero que no poseyese bienes o garantía conocida en dicho Estado. De esta manera, se quería obligar al mismo a una demostración de solvencia con la que pudiese responder no sólo de las costas, sino de los posibles daños y perjuicios causados al nacional por una demanda o denuncia temeraria. Dicha caución, no obstante, fué suprimida por el art. 18 del Convenio de El Haya de 17 de Julio de 1905, conforme al cual los extranjeros podrán demandar en juicio y presentar reclamaciones en la vía civil sin que por ello pueda exigírseles una caución o fianza de cualquier clase que sea que no se imponga a los nacionales.

Lo mismo debe de tenerse en cuenta para la presentación de denuncias o querellas frente a la jurisdicción criminal, y nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal exige a los querellantes la prestación de una fianza en el caso de que los mismos sean extranjeros, a no ser que se aplique en virtud de Convenios o por práctica jurídica

el principio de reciprocidad con el Estado del cual el otro extranjero es súbdito.

No obstante, creemos que este punto se halla muy debilmente regulado en los Tratados, y este precepto de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal origina no pocas veces bastantes dificultades para nuestros Juzgados en los casos de querellas criminales interpuestas por súbditos extranjeros. Baste sólo para ello el decir que la reciprocidad para la exención de la prestación de estas fianzas entre Alemania y España se basa en el Convenio de 30 de Marzo de 1868, celebrado entre el Reino de España y la Confederación Germánica del Norte, presidida por Prusia, Convenio que no se encuentra escrito en ningún texto moderno y que para proceder a la lectura del mismo, no obstante su vigencia, hay que acudir a nuestra Biblioteca Nacional.

#### Los extranjeros en materia económica.

La mayor parte de los Tratados de comercio y establecimiento contienen normas acerca de la situación del comerciante extranjero, y no debemos de olvidar que ha sido principalmente el comercio el que ha sentado las bases prácticas del Derecho de Extranjería. Modernamente encontramos en los Tratados recientes hasta un Derecho de Extranjería Laboral que ya ha plasmado en varios Tratados Internacionales con naciones suramericanas y últimament



en los Convenios celebrados entre Alemania y España el día 29 de Octubre de 1959, ratificado el 13 de Octubre de 1960, sobre Seguridad Social.

Antecedentes españoles.

Corresponde a nuestro Derecho el orgullo de haber formulado ya con fecha 17 de Noviembre de 1852 el Real Decreto de Extranjería que establece la equiparación práctica entre los extranjeros y los nacionales, Decreto que, pese a haber transcurrido más de cien años desde su promulgación, sigue en vigor y podría servir de ejemplo a gran parte de las legislaciones modernas en esta materia.

El Real Decreto de Extranjería consta de cinco capítulos que tratan respectivamente de las siguientes materias :

- 1º) De los extranjeros y su clasificación en España.
- 2º) De las disposiciones que han de observarse para el ingreso y residencia de los extranjeros en España.
- 3º) De la condición civil de los extranjeros domiciliados y transeuntes, sus derechos y obligaciones.
- 4º) De los buques extranjeros.
- 5º) Disposiciones generales.

Analizaremos sucintamente este Real Decreto de Extranjería, el cual se halla aún oficialmente en vigor en -

España, si bien algunas de sus disposiciones han caído en desuso o han sido derogadas por disposiciones posteriores.

Así sucede por ejemplo con su art. 1, clasificando qué personas eran extranjeros, que prácticamente ha quedado derogado por el art. 17 del Código Civil al establecer qué personas eran españoles, por lo que, a contrario sensu, puede deducirse que todos los que no sean españoles han de tener la condición jurídica de extranjeros.

Gran importancia reviste a los efectos de la equiparación del extranjero al nacional el art. 2 del citado Real Decreto, según el cual los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza o ganado vecindad con arreglo a las Leyes, son tenidos por españoles.

Hoy en día este precepto es idéntico con los concordantes de nuestro Código Civil, si bien el extranjero, una vez ganada la vecindad, tiene que proceder a incoar el correspondiente expediente de nacionalización para adquirir la nacionalidad española.

Conforme al art. 4 se entiende por extranjero domiciliado aquél que se haya establecido en España con casa abierta o residencia fija o prolongada por tres años, y bienes propios o industria y modo de vivir conocido en territorio de la Monarquía con permiso de la Autoridad superior de la Provincia, considerándose transeuntes, conforme al art. 5, aquellos extranjeros que no reúnan

las condiciones anteriores, es decir que no tengan resi-  
dencia fija en el Reino.

No tratamos el capítulo segundo del Real Decreto de Ex-  
tranjería por haber sido prácticamente derogado por las  
disposiciones dictadas con posterioridad sobre el ingres  
o y la residencia de los extranjeros en España.

En cambio merece extraordinario interés, por equiparar  
prácticamente los extranjeros a los españoles, el capítu-  
lo tercero que trata de los derechos y obligaciones -  
de los mismos.

Conforme a los arts. 17 a 35 del citado Decreto, los de-  
rechos de los extranjeros en España son los siguientes:

- 1ª) Derecho de entrada y salida libre de los puertos y  
poblaciones de España y de transitar con igual li-  
bertad en su territorio de la misma manera que los  
súbditos españoles.
- 2ª) La adquisición y posesión de bienes inmuebles, el -  
ejercicio y la participación en toda clase de empre-  
sas que no estén reservadas por las Leyes y disposi-  
ciones vigentes a los súbditos españoles.
- 3ª) El ejercicio del comercio al por mayor y al por me-  
nor en las mismas condiciones que los españoles.
- 4ª) El derecho al disfrute de todos los aprovechamien-  
tos comunes del pueblo en donde el extranjero tenga  
su domicilio.

- 5ª) La exención del servicio militar.
- 6ª) El derecho a acudir a los Tribunales españoles para que se les administre justicia con arreglo a las Le yes.

Sus obligaciones son las siguientes:

- 1ª) El pago de los impuestos y contribuciones de todas clases que correspondan a los bienes inmuebles de su propiedad y al comercio o industria que ejercieren.
- 2ª) El pago de las contribuciones extraordinarias.

De lo anteriormente expuesto se deduce la equiparación total de los extranjeros a los españoles ya en el año de 1852. Repetimos que dicho Real Decreto podría servir de modelo a muchos posteriores y a la legislación de muchos Estados en esta materia.

Aún quisiéramos citar como antecedente importante del - trato que España ha concedido siempre a los extranjeros la Ley de 4 de Diciembre de 1855 sobre el Derecho de - Asilo. Conforme a dicha Ley y a su art. 1, el territorio español es un asilo inviolable para todos los ex- tranjeros y sus propiedades, estableciendo con caracter general que en ningún Convenio ni Tratado Diplomático - podrá estipularse la extradición de los extranjeros per- seguidos y procesados por hechos o delitos políticos. -

El art. 3 va aún más allá y establece una norma verdaderamente ejemplar, según la cual no podrán confiscarse - las propiedades de los extranjeros ni aun en el caso de hallarse España en guerra con la Nación a que éstos correspondan, gozando dichos extranjeros de todos los derechos civiles que conceden los Tratados a los extranjeros que vienen competentemente autorizados por sus Gobiernos respectivos.

Finalmente, el art. 5 establece una medida de protección para el caso de que los extranjeros refugiados en España, abusando del asilo, conspirasen contra ella o trabajasen para destruir o modificar sus instituciones o para alterar de cualquier modo la tranquilidad pública. En tal caso, podrá el Gobierno decretar su salida de la Nación, dando cuenta a las Cortes de los motivos que para ello tuviere.

Hemos expuesto en forma sucinta los antecedentes españoles del Derecho llamado de Extranjería que constituye para la época en que fueron dictados un verdadero alarde del sentido de justicia internacional que ha inspirado siempre nuestras instituciones. En estos Decretos, - igual que en las disposiciones que examinaremos en el capítulo siguiente, en especial el art. 27 del Código Civil y el art. 15 del Código de Comercio, sigue siempre vigente el principio de derecho de igualdad de trato del extranjero frente al nacional, excepción hecha 9

- 28 -

de los derechos políticos, que son privativos de estos últimos.

IV

EL ARTICULO 27 DEL CODIGO CIVIL Y EL ARTICULO 15 DEL  
CODIGO DE COMERCIO.

Con este criterio cada vez más liberal, el art. 2 de la Constitución de 30 de Junio de 1876 publicó la asimilación de los extranjeros a los nacionales por lo que respecta a los derechos privados. Este artículo inspiró - posteriormente el art. 27 de nuestro Código Civil y el art. 15 del Código de Comercio.

Ambos artículos continúan en vigor, pese a las restricciones que han sufrido en los últimos años, restricciones que en muchos casos ya han sido levantadas, por lo cual los mismos pueden considerarse como los fundamentos legales más antiguos y sólidos, sobre los que se basa - el establecimiento del extranjero en España y, por lo - tanto, también su capacidad para efectuar inversiones - en nuestro país. Estos artículos dicen lo siguiente:

Art. 27: "Los extranjeros gozan en España de los mismos derechos civiles que los españoles, salvo lo dispuesto - en las Leyes especiales y en los Tratados."

La referencia que este art. 27 del Código Civil, en su actual versión efectuada por Ley de 17 de Junio de 1954, hace a las Leyes especiales, se refiere a toda la legislación referente a inversiones extranjeras en España y a la aún existente limitación de ciertas actividades por parte de extranjeros, pero estableciendo el principio general de que éstos gozan en España de los mismos derechos que los españoles.

En el ámbito mercantil, el art. 15 de nuestro Código de Comercio dice textualmente que "los extranjeros y las compañías constituidas en el extranjero podrán ejercer el comercio en España con sujeción a las Leyes de su país en lo que se refiere a su capacidad para contratar y a las disposiciones de este Código en todo cuanto concierne a la creación de sus establecimientos dentro del territorio español, a sus operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los Tribunales de la Nación."

Lo prescrito en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo que en casos particulares pueda establecerse por los Tratados y Convenios con las demás potencias."

Un mero examen nos hace llegar a la conclusión de lo liberal y favorable al extranjero que es el precepto contenido en el art: 15 del Código de Comercio, pero es que, además, este artículo no sólo permite al extranjero establecerse en España en las mismas condicio



nes que los españoles, sino que, al mismo tiempo, es respetuoso con la legislación patria del extranjero por lo que se refiere a su capacidad para contratar.

Sabido es que en materia de conflictos de leyes, nuestro ordenamiento jurídico sigue la llamada "Teoría de los Estatutos", por lo cual debemos de relacionar el art. 15 del Código de Comercio con los arts. 9 y 10 de nuestro Código Civil, conforme a los cuales las Leyes relativas a los derechosy deberes de familia o al Estado, condición y capacidad legal de las personas obligan a los españoles, aunque residan en país extranjero. Este art. 9 ha sido interpretado por la Jurisprudencia en el sentido de que asimismo el estado, condición y capacidad legal de las personas siguen acompañando a los extranjeros, aunque éstos trasladen su domicilio a territorio español. En este sentido se ha pronunciado, entre otras, la resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 16 de Enero de 1927, conforme a la cual los derechos y deberes de familia y el estado, condición y capacidad legal de las personas se rigen conforme al art. 9 del Código Civil por el llamado "estatuto personal", doctrina aplicable por una necesidad de interpretación natural y por Jurisprudencia repetida y práctica constante a los extranjeros en España.

En el mismo sentido se producen las sentencias de nuestro Tribunal Supremo de 27 de Octubre de 1900 y 12 de -

Mayo de 1944.

Por otra parte, conforme al art. 10 de nuestro Código Civil, los bienes muebles están sujetos a la Ley de - la nación del propietario y los inmuebles a las Leyes de país en que están sitos.

Los dos preceptos citados nos dan la pauta para interpretar en su verdadero alcance el art. 15 de nuestro Código de Comercio. Este establece el principio de que los extranjeros y las compañías constituidas en el extranjero podrán ejercer el comercio en España con sujeción a las Leyes de su país en lo que se refiere a su capacidad para contratar, es decir que la capacidad jurídica del extranjero para contratar en España debe regularse y calificarse conforme a su Derecho patrio, de acuerdo con el antes citado art. 9 del Código Civil, por ser esta capacidad una parte integrante del estatuto personal del - extranjero.

Por el contrario, en todo lo que concierne a la creación de los establecimientos mercantiles del extranjero, dentro del territorio español, y a sus operaciones mercantiles, el mismo queda sometido a las disposiciones del Código de Comercio, así como a la Jurisprudencia de los - Tribunales de la Nación, por lo que se refiere a estas - mismas operaciones mercantiles dentro de España. El citado precepto establece, pues, mediante un acto de soberanía, la competencia de los Tribunales españoles para conocer de las operaciones mercantiles realizadas por los

extranjeros dentro del territorio español.

El último párrafo del citado artículo hace la salvedad de la posibilidad de un trato especial en los casos en que así se convenga con otras potencias.

Como hemos visto, el sistema del Derecho español, por lo que se refiere al establecimiento de extranjeros en España y a su condición jurídica, no puede ser más liberal, decidiéndose por el tercero de los tres sistemas que citábamos en la página 2 de este trabajo, es decir por el de igualdad absoluta del extranjero con el nacional, por lo que al ejercicio de los derechos civiles se refiere.

Este es el principio, pese a diversas restricciones surgidas a raíz de la primera guerra europea en casi todas las legislaciones occidentales, que continua imperando en la actualidad y que vuelve a abrirse paso al ir desapareciendo las circunstancias tanto de índole política como económica o social que aconsejaron las restricciones a que haremos referencia.

V

RESTRICCIONES A LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN EL  
DERECHO ESPAÑOL.

Las restricciones que limitaron los principios de amplia igualdad establecidos en el art. 27 del Código Civil y en el art. 15 del Código de Comercio, son de índole muy diversa y casi siempre estatuidas en Leyes especiales. Comenzaron con ciertas restricciones a las compañías extranjeras de Seguros por Ley de 14 de Mayo de 1908. Continuaron, ya en época de la República, limitando la capacidad de los extranjeros para adquirir determinados inmuebles en España o en las islas del territorio nacional, así como para adquirir derechos sobre los buques mercantes españoles. Continuaron las restricciones en la Legislación Bancaria y en la de Minas, culminando, finalmente, en la Ley de 24 de Noviembre de 1939 de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional.

Esta Ley es de tal importancia en la evolución económica-industrial de España en los últimos veinte años que merece un comentario aparte y destacado. Por esto,-

trataremos en este capítulo en especial de las restricciones impuestas a las inversiones extranjeras por la citada Ley de 24 de Noviembre de 1939, y posteriormente de las - restricciones a las inversiones extranjeras impuestas por Leyes especiales, ya que por ser éstas de menor cuantía, no afectan tan profundamente al sistema como la citada Ley de Ordenación y Defensa de la Industria, aún en vigor, pese a haber sido derogados sus arts. 5, 6 y 7.

La Ley de Ordenación y Defensa de la Industria de 24 de Noviembre de 1939 consideraba la industria como parte integrante del patrimonio nacional, hecho que cristalizaba en su art. 1 y que decía que la industria como instrumento de la producción se considera parte integrante del patrimonio nacional y subordinada al interés supremo de la nación. - Era lógico que, hallándose la industria subordinada legalmente al interés supremo de la nación, se tomasen en la - citada Ley con posterioridad medidas para evitar que la - influencia extranjera en la citada industria pudiese ser - considerable.

El art. 2 de dicha Ley explica qué actividades económicas deben considerarse como industria. Por constituir la misma un precepto restrictivo, era lógico que el citado artículo debía interpretarse casuísticamente, no debiendo considerarse industria cualesquiera otras actividades económicas no incluidas en el mismo.

El citado art. 2 entendía por industria toda actividad económica desarrollada con alguna de las finalidades siguientes:

- A) Generación, transporte, transformación, distribución y aplicación de la energía mecánica, química, eléctrica o térmica.
- B) Obtención de productos mediante operaciones manufacturadas o fabriles que tengan por base procedimientos mecánicos, químicos, eléctricos o mixtos.
- C) Prestación de servicios de utilización pública, basados en alguna de las industrias comprendidas en los apartados anteriores.

El art. 3 clasificaba la industria española en tres grupos distintos:

- A) Industrias para la defensa nacional: Eran industrias de este tipo las que en tiempo de paz fabricaban normalmente material de guerra o elementos de aplicación inmediata a la misma.
- B) Industrias auxiliares para la defensa nacional: Como tales se consideraban aquellas industrias que, fabricando en tiempos de paz materiales que no son de aplicación inmediata a la guerra, produzcan primeras materias o elementos indispensables para la fabricación de material de guerra, así como las que puedan fácilmente transformarse para producir elementos ne-

cesarios a la defensa de la Nación.

C) Industrias básicas para la economía nacional: Se incluyen en este grupo:

- a) Las destinadas total o parcialmente a servicios públicos.
- b) Las que producían artículos necesarios para la subsistencia, el vestido y lasanidad de la Nación.
- c) Las de transporte y fabricación del material que - utilicen.
- d) Las que, atendidas las necesidades nacionales, puedan exportar productos manufacturados total o parcialmente.
- e) Las que sean calificadas por el Estado como tales, por servir a la autarquía económica, o afecten de manera sensible al comercio exterior en cualquier modalidad o forma.

D) Industrias diversas: Se incluirán en este grupo las - no comprendidas en los anteriores.

Como hemos visto, los tres artículos que encabezan la Ley de 24 de Noviembre de 1939, aparte de subordinar la industria a los altos intereses de la Nación como patrimonio - integrante de la misma, definen qué es lo que debe entenderse por industria, y la clasifican en diversos grupos, - según su mayor o menor importancia para el Estado a efectos de la citada Ley.

Examinaremos ahora las disposiciones restrictivas de la participación extranjera en las citadas industrias y que se encuentran contenidas en los arts. 5, 6 y 7 de la mencionada Ley.

La Ley, naturalmente, conforme con el artículo 3 del Código Civil, no podía tener efectos retroactivos. Ello era lógico, pues habérselos concedido, hubiese significado una hecatombe en las industrias establecidas en España de largo tiempo atrás con capital extranjero. Por ello, los arts. 5, 6 y 7 únicamente podían referirse a las nuevas industrias que se creasen en el futuro o a las ampliaciones de capital de las ya existentes, dejando intocadas las situaciones y derechos creados con anterioridad a la Ley de 24 de Noviembre de 1939, es decir conforme al art. 15 del Código de Comercio.

El art. 5, refiriéndose a las nuevas industrias, establecía las siguientes proporciones de capital extranjero, así como las modalidades que a continuación se exponen de la aportación de éste:

- a) El capital social activo de las nuevas industrias, de-  
cía el art. 5, será propiedad de españoles en sus tres  
cuartas partes, como mínimo. La cuarta parte restante,  
como proporción máxima, podrá admitirse como inversión  
de capital extranjero, debiendo aportarse en divisas  
cotizadas en España o en utillaje que no se obtengan -



en la producción nacional, valorado a los precios en el mercado internacional.

Este párrafo a) del art. 5 establecía, pues, una doble restricción a las inversiones extranjeras. En primer lugar, limitaba la misma a la cuarta parte, es decir a un 25% del mismo. Ello significaba que el extranjero prácticamente no podía tomar decisión ni tener intervención - alguna sobre la marcha de los asuntos sociales, ya que cualquiera que fuese la forma jurídica que se diese al pacto social, siempre sería desbordado con facilidad, - incluso en los problemas más sencillos, por la mayoría - española de tres cuartas partes.

b) La segunda restricción era la necesidad de aportar - esta inversión extranjera en divisas cotizadas en España o en utillaje que no se obtuviese en la producción nacional. Y aquí los legisladores omitieron varias de las diversas modalidades en que puede plantearse la inversión extranjera, de mucha más importancia que en divisas o - en utillaje y maquinaria que no fuese posible obtener en España.

En primer lugar, y como no sea desde un punto de vista puramente oportunista de política monetaria, la inversión extranjera en divisas carecía de importancia, puesto que consiste en simples líneas en una inversión de dinero, y si algo podía encontrarse normalmente en territorio nacional para la inversión, era dinero metálico. Otra cosa es que, efectuándose la aportación en metálico, se

exija al extranjero, siempre y cuando resida fuera de España, que aporte su inversión en moneda extranjera, con el fin de no entrar en conflicto con la Ley de Delitos Monetarios de 24 de Noviembre de 1938.

No obstante, el artículo en su redacción citada, cerraba la posibilidad de participar en la industria nacional justamente al extranjero que, en cierto modo, debía de ser el más favorecido para ello, es decir, el extranjero residente en España. Este, que obtenía todos sus ingresos en nuestra Nación, era lógico que no pudiese poseer divisas, por el hecho de su residencia, sin cometer un delito monetario, y al no poseer divisas, tampoco se encontraba en condiciones de aportar éstas o maquinaria o utillaje extranjeros a la nueva industria en formación. De manera que la Ley, en su redacción, - imposibilitó prácticamente la participación en la industria española al extranjero residente en España, - quien, en cierto modo, debió de haber sido el más favorecido por ser el más adaptado, por su residencia, a la mentalidad del país y a los intereses de la Nación que le brindaba hospitalidad, pues por su residencia, - sus intereses económicos coincidían con los de los nacionales mismos.

Pero, por otro lado, el legislador olvidó varias modalidades de la inversión extranjera de tanta importancia, por lo menos, como las dos antes enumeradas. Son las si-

guientes:

- a) Por lo que se refiere a las inversiones en metálico, existen las llamadas pesetas convertibles o pesetas transferibles que desde el punto de vista de la economía nacional, tienen el mismo valor que las divisas. Constituyen moneda española, pero sobre la cual el titular tiene un derecho a su conversión en moneda extranjera, por ejemplo el saldo resultante en pesetas de una importancia de mercancías extranjeras y que no se ha transferido al país del vendedor. Dichas pesetas son prácticamente equivalentes a moneda extranjera, pues, al no salir de España, evitan al Gobierno efectuar un pago en divisas en el extranjero. No obstante, y por motivos posiblemente de comodidad contable, durante todo el tiempo de vigencia de la Ley de 1939, no se permitió la aportación de estas pesetas directamente a la industria española, sino que previamente tuvieron que ser transferidas en divisas al extranjero, y luego retransferidas de nuevo a España, con el fin de cumplir el apartado A) del art. 5 de la tantas veces citada Ley de Ordenación y Defensa de la Industria.
- b) Pero asimismo existen otra clase de inversiones inmateriales, como son las patentes de fabricación, las marcas de fábrica, los procedimientos industriales y especialmente el llamado "know how" (el saber cómo hacer las cosas), que hasta hace poco tiempo no fué

debidamente valorado en España, quizás por no haberse formado aún un espíritu auténticamente industrial. -

Las patentes de fabricación de determinados productos tienen un valor muchas veces incalculable y bastante superior al de la maquinaria u otros bienes, y lo mismo podemos decir de las marcas de fábrica conocidas y acreditadas, pues ellas, por sí solas, son la garantía para que el producto se venda y encuentre inmediatamente su puesto en el mercado. Por lo que se refiere al "know how", el mismo forma un valor inmaterial constituido por la experiencia de una empresa en la fabricación y elaboración de determinados productos o mercancías a lo largo de muchos años. No basta solamente la patente para poder fabricar un determinado objeto, hay que saber, además, cómo debe fabricarse, en qué condiciones resulta más barato, y cuáles son las posibles dificultades que puedan surgir durante el proceso de fabricación y el modo de evitarlas. Y esto no puede aprenderse en un día, sino que es el fruto de muchos años de experiencia y de cuantiosos gastos de ensayos y experimentación en laboratorios, que en muchas empresas extranjeras consumen una parte del presupuesto anual mucho mayor que la destinada a la fabricación en serie. Es lógico, pues, que este "know how" tenga un fuerte contenido económico que debe ser valorado en el momento de su inversión o puesta disposición de una -

empresa extranjera.

Por otra parte, el mismo párrafo A) del art. 5) de la Ley de 24 de Noviembre de 1939, establecía que el Estado podría garantizar al capital en acciones suscrito - por extranjeros en divisas cotizadas en España o en - utillaje, la extracción en las mismas divisas de un - porcentaje del beneficio anual, acordado de manera ge- neral, así como también las correspondientes a la amor- tización e intereses, que se hayan establecido para - ovligaciones de extranjeros. No obstante este párrafo, la situación de hecho hasta la derogación en la Ley en 1959, fué la de que sólo en rarísimas ocasiones y con motivo de abundancia transitoria de divisas se permi- tiese transferir algunos dividendos extranjeros fuera de España.

El párrafo B) del citado art. 5, establecía que en las industrias del grupo A) del art. 3, es decir aquéllas - destinadas a la defensa nacional, el capital sería ínte- gramente español: Ello es lógico, sobre todo teniendo - en cuenta la fecha en que la citada Ley fué promulgada, pues la defensa nacional afecta al interés público, y - no es prudente ni normal que en las fábricas de material de guerra exista una inversión extranjera de cualquier clase que sea.

En el párrafo C) del citado art. 5 se establecía que en la decisión de los asuntos sociales de las nuevas indus- trias, cualquiera que fuese la forma jurídica que adopta

sen, las tres cuartas partes de los votos, al menos, -  
habrían de corresponder a españoles. De esta manera, -  
volvía a relegarse la participación extranjera a un mí-  
nimo, puesto que la parte extranjera prácticamente po-  
día limitarse a dar un consejo en el seno de la indus-  
tria, pero de ninguna manera a intervenir en los asun-  
tos sociales, ya que siempre su voto se encontraba en  
la proporción de una cuarta parte frente a tres cuar-  
tas partes.

Conforme al apartado D) del art. 5, todos los cargos -  
rectores de las empresas industriales debían encontrar  
se en manos de españoles. Decía concretamente que los-  
Directores, así técnicos como administrativos, Gerentes  
y, en general, Administradores o Apoderados legales ha-  
brán de ser españoles. Sin embargo, continuaba el mis-  
mo párrafo, en las sociedades anónimas podrán ser es-  
tranjeros, en proporción al capital suscrito, hasta -  
una cuarta parte de los Consejeros, pero la Presiden-  
cia del Consejo y los cargos directivos, en todo mo-  
mento han de recaer en quienes tengan nacionalidad es-  
pañola.

La concesión a la cuarta parte de los Consejeros se des-  
prendía del sistema político de representación propor-  
cional, si así podemos llamarlo, imperante en las socie-  
dades anónimas, pese a no haberse promulgado aún en -  
aquella fecha la Ley de 17 de Julio de 1951. Ahora bien,  
autorizando una cuarta parte del capital social de in-  
versión extranjera, era lógico que esta cuarta parte se

reflejase en el Consejo de Administración en forma de - una cuarta parte de los Consejeros, si bien la Presidencia y los cargos directivos habrían de recaer forzosamente en personas de nacionalidad española.

El precepto de la Ley que comentamos era, de todas las maneras, muy restrictivo, sobre todo si se tiene en - cuenta que también el Director Técnico tenía que ser español, siendo en la mayoría de los casos el motivo de - la inversión extranjera el establecer una nueva técnica en España, por lo que siempre hubiese estado justificado que la Dirección Técnica de la empresa estuviese en manos del extranjero inversor. Ello sucedía de hecho en - muchos casos, encubriéndose la Dirección Técnica de la empresa bajo un Consejero extranjero que, aun figurando únicamente como tal Consejero, en realidad llevaba la - Dirección Técnica de la industria.

El párrafo siguiente del apartado D) suaviza algo la disposición restrictiva que acabamos de comentar, al establecer que durante el período de iniciación de la industria podría ser autorizada la admisión interina de - una cuarta parte del personal técnico y administrativo - especializado, no directivo, por un plazo máximo de tres años. Transcurrido dicho plazo, la proporción indicada - debería descender a la décima parte del personal afecto a cada una de las respectivas categorías y plantillas.

Finalmente, el citado art. 5, como era lógico, remite a la legislación laboral vigente para el trabajo de extranjeros en España, como requisito previo para su admisión en la industria.

El art. 6 de la citada Ley de 24 de Noviembre de 1939 sienta, en primer lugar, la prohibición de transferir la propiedad de establecimientos o instalaciones industriales comprendidas en el grupo A) del art. 3, es decir - aquéllas que se dedican a la defensa nacional, a personas naturales o jurídicas extranjeras. Ello no es más - que una repetición del precepto que antes citamos del - apartado B) del art. 5. En las demás industrias que no estén jurídicamente organizadas como sociedades por - acciones (indudablemente, la Ley se refiere a las coman- ditarias por acciones, cuya constitución en aquella - época era posible, y a las sociedades anónimas) podrán adquirir los extranjeros hasta la cuarta parte de pro- piedad en las mismas.

A continuación, el art. 6 trata de las ampliaciones de capital en las que llama sociedades por acciones y que, como dijimos antes, únicamente podían ser las socieda- des anónimas y las sociedades comanditarias por accio- nes existentes en aquella época. Este problema de las - ampliaciones del capital revistió gran importancia, con- tradiciendo, en cierto modo, el espíritu que animaba a las sociedades anónimas en nuestro Código de Comercio y



mucho más el espíritu de la posteriormente promulgada Ley de Sociedades Anónimas de 17 de Julio de 1951. Además, este problema de las ampliaciones de capital afectaba a las industrias constituidas en forma de sociedades con anterioridad a la Ley de 24 de Noviembre de 1939, puesto que en la ampliación el accionista extranjero no podía suscribir las acciones que le correspondían, tanto conforme a la Ley de Sociedades Anónimas, como a los propios Estatutos de la sociedad, por vedársele el citado art. 6 de la Ley de 24 de Noviembre de 1939.

El párrafo que tenía el fin de nacionalizar en el transcurso del tiempo las antiguas industrias con capital extranjero superior al 25%, decía textualmente lo siguiente: "En las industrias no comprendidas en el párrafo primero de este artículo, que jurídicamente estén organizadas como sociedades por acciones, cualquier emisión de títulos de soberanía que se realice en lo sucesivo se dividirá en dos partes: Una igual a los tres cuartos de la emisión, que no podrá ser transferible a extranjeros, y otra igual al cuarto de la emisión, que estará exenta de la expresada limitación. La transmisión de títulos o participaciones en industrias a extranjeros, dentro de las condiciones de esta Ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el nº 18 del art. 1 de la Ley Penal de Delitos Monetarios".

Vemos, pues, que este párrafo del art. 6 no hace más - que seguir la pauta general de la Ley, con el fin de - que un día la participación extranjera en todas las in - dustrias nacionales quede limitada al 25% del capital social y la influencia extranjera en los Consejos de - Administración y cargos rectores quede asimismo prácti - camente supeditada a la mayoría española.

El precepto que comentamos introdujo también el llama - do vulgarmente "estampillado de títulos", conforme al - cual las acciones no transferibles a extranjeros de - las emisiones debían llevar estampillado, en sitio si - sible, la nota de "intransferible a extranjeros". Esto - por sí originaba otro efecto secundario, y es que en - Bolsa y en el mercado, los títulos que carecían de la - indicación "intransferible a extranjeros", por poseer - lógicamente más derecho que los otros, obtenían una - plus-valía en el momento de la cotización.

Finalmente, el último párrafo del art. 6 establecía - que la transmisión de títulos o participaciones en in - dustrias a extranjeros con infracción de lo dispuesto - en la presente Ley constituiría vicio de nulidad de la - operación, si bien a nuestro entender, esta nulidad - sería bastante discutible en la esfera civil, y ello - por la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, que - ha venido a interpretar el precepto taxativo del art.4 - de nuestro Código Civil, según el cual son nulos los - actos ejecutados en contra de lo dispuesto en la Ley, -

a no ser que la misma Ley ordene su validez. La Jurisprudencia que restringió fuertemente este precepto tan peligroso, declaró en sentencia de 24 de Octubre de 1932 que la nulidad a que se refiere este precepto es la expresamente declarada en los siguientes títulos del Código Civil y que, por lo tanto, no se refiere en absoluto a la nulidad declarada en Leyes adjetivas.

Por otro lado, la constante doctrina y la Jurisprudencia acerca de los arts. 4 y 1300 del Código Civil, en especial la sentencia de 19 de Octubre de 1944, tienen declarado que tal nulidad no puede producirse por la omisión de las formalidades administrativas cada vez más frecuentes en los ordenamientos jurídicos modernos. Es decir que, a nuestro entender, la participación de los extranjeros en una sociedad española con infracción de la Ley de 24 de Noviembre de 1939 hubiese constituido una actuación nula a efectos administrativos, pero los pactos civiles o mercantiles existentes entre las partes serían perfectamente válidos por reunir los requisitos del art. 1261 del Código Civil, es decir consentimiento, objeto del contrato y causa.

A continuación, el art. 7 de la tantas veces citada Ley de 24 de Noviembre de 1939, autorizaba al Gobierno para dispensar en algunos casos de la aplicación de sus preceptos. Dice que en casos excepcionales el Estado

previa deliberación del Consejo de Ministros, podrá variar las restricciones establecidas en los arts. 5 y 9 en la extensión indispensable que permita la realización de proyectos industriales de extraordinario interés nacional. En virtud de este artículo, teóricamente y previa la autorización del Consejo de Ministros, podía, pues, autorizarse una participación extranjera superior al 25% señalado en los arts. 5 y 6 de la Ley, así como el permitir el desempeño de cargos directivos por parte de extranjeros. Sin embargo, escaso fué la aplicación que en los años anteriores a 1959 tuvo el mencionado art. 7. Casi todas las instancias elevadas al Consejo de Ministros eran desestimadas o reducidas a unos límites que hacían prácticamente nula su aplicación, todo ello sin contar con la pérdida de tiempo ocasionada por una tramitación burocrática movida por principios lentos completamente distintos de los que son utilizados en las actividades industriales.

Cuando un grupo económico español intentaba establecer en España una nueva industria, para la cual necesitaba la ayuda o el apoyo de una empresa extranjera, el primer paso a efectuar era el de solicitar en la Dirección General de Industria la autorización de nueva industria. Este expediente tenía, en el caso de que todo fuese bien, un tiempo de duración de aproximadamente seis meses. Una vez ya en poder de la autorización de nueva industria,

había que solicitar, siempre que se tratase de una - participación superior al 25%, por un lado, el dictámen favorable de la Sección relativa a las inversiones extranjeras del Ministerio de Industria y, con - posterioridad, el dictamende la Junta de Operaciones Financieras con el Exterior del Ministerio de Comercio, todo lo cual llevaba consigo un plazo de duración de, por lo menos, otros seis meses. Para ello - era necesario rellenar unos cuestionarios facilitados por la citada Junta de Operaciones Financieras con el Exterior, cuya sola contestación podía llevar varios meses de trabajo. Terminada esta parte del expediente y una vez que se habían obtenido los dictámenes favorables, a que antes hemos hecho mención, se elevaba - el mismo al Consejo de Ministros para su resolución definitiva, la cual solía, casi siempre, limitar la - participación extranjera aún más que lo propuesto en los dictámenes de los Organismos arriba citados, todo ello sin tener en cuenta que con la tramitación ante el Consejo de Ministros se perdía otro año de tiempo. Es decir que el hecho del establecimiento de una nueva industria en España con participación de capital - extranjero, podía tardar dos años hasta que se obtuviesen las pertinentes autorizaciones, todo ello en - lucha con un procedimiento burocrático que ahogaba - cualquier intento de iniciativa particular. Todo ello acababa cansando al inversor extranjero que se desligaba del asunto, sin tener en cuenta el retraso oca-

sionado en la creación de industrias destinadas a satisfacer necesidades perentorias del mercado interior y que incluso pudiesen haber sido algún día fuentes de divisas por medio de la exportación.

Hemos analizado en lo anteriormente expuesto la Ley de - Ordenación y Defensa de la Industria de 24 de Noviembre de 1939. Como vemos por la exposición hecha en su art.2, la misma se refería únicamente a las empresas industriales, quedando libre, por lo tanto,, para el extranjero - el dedicarse a la actividad comercial, es decir sin proceso fabricatorio de clase alguna, en las mismas condiciones que los españoles y de acuerdo con lo dispuesto - en el art. 15 de nuestro Código de Comercio. Por lo tanto, el extranjero, durante la época de vigencia de la - Ley de Ordenación y Defensa de la Industria, podía participar libremente y sin restricción cuantitativa alguna - en sociedades comerciales españolas, siempre que en los Estatutos de las mismas se hiciese constar que en ningún caso la sociedad pudiese dedicarse a cualquier actividad industrial. No obstante, como expondremos más adelante, lo anteriormente expuesto únicamente era válido para - aquellos extranjeros que residían en España, pero no - para los no residentes, en virtud de la actividad desarrollada por la Junta de Operaciones Financieras con el Exterior. Y esta situación trajo también consigo la inmediata consecuencia de poder burlar la Ley de 24 de Noviembre de 1939 a través de la interposición de personas jurídi-

cas de nacionalidad española.

En efecto, el extranjero que quería participar y tener bajo su control una empresa industrial en España, constituía, en primer lugar, una sociedad mercantil puramente comercial, en la cual podía participar ilimitadamente por no hallarse sujeta a las restricciones de la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria de 24 de - Noviembre de 1939. Esta sociedad comercial constituida en España y con arreglo al art. 28 del Código Civil, - según el cual las corporaciones, fundaciones y asociaciones reconocidas por la Ley y domiciliadas en España gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de personas jurídicas, con arreglo a las disposiciones del Código. De esta manera nacía a la vida una sociedad holding que gozaba de la nacionalidad española con independencia de que la totalidad o gran parte de su capital fuese extranjero. Como persona jurídica de nacionalidad española, la sociedad - holding no quedaba afectada por las disposiciones restrictivas de la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria de 24 de Noviembre de 1939, por lo que podía - participar libremente en la sociedad industrial que se constituía a continuación.

El proceso que acabamos de exponer es lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de "fraude a la Ley" y en el que nos detendremos poco tiempo, por no constituir objeto de esta tesis. La situación era, no obstante, que mediante una serie de actos jurídicos perfectos

mente válidos y lícitos, cada uno en sí, se conseguía un efecto que era exactamente el que la Ley de 24 de Noviembre de 1939 había querido evitar, es decir la participación de extranjeros en la industria española superior al 25% del capital social y el control de dichas empresas industriales por parte de los extranjeros.

Lo anteriormente expuesto destaca claramente el peligro que ofrecen las sociedades holding, y por ello las disposiciones que se han adoptado en gran número de naciones para, sin restringirlas, al menos poder controlar sus actividades. La cuestión se complica cuando los socios constituyentes de la sociedad holding no son tampoco personas físicas, sino jurídicas, lo que hace prácticamente imposible, pese a la publicidad de los Registros Mercantiles, determinar qué personas manejan o controlan en última instancia los intereses de la sociedad industrial.

Como hemos expuesto anteriormente, esta posibilidad, que fué empleada hasta 1947, no pudo continuar usándose a partir de esta fecha más que por aquellos extranjeros que tenían su residencia en España, no siendo aplicable a los extranjeros con residencia en el exterior. Para ello consideramos preciso hacer aunque sea una breve reseña de la diferencia existente entre ambas clases de extranjeros por causa del motivo de



su residencia habitual.

El origen de esta diferencia la encontramos en nuestra legislación de divisas y, en primer lugar, en el Decreto número 313 del Instituto Español de Moneda Extranjera de fecha 7 de Julio de 1937, según el cual, a partir de la fecha de su publicación, quedaba prohibido disponer libremente de los saldos en pesetas existentes en cuentas a favor de titulares que residan en el extranjero. Dicho Decreto, que aún continua en vigor, decía a continuación que para movilizar dichos fondos debería solicitarse previamente y en cada caso la autorización del Instituto Español de Moneda Extranjera, consignando en la solicitud el destino que había de darse a los fondos de referencia.

La legislación en materia de divisas considera, pues, la nacionalidad como una diferencia de segundo grado, siendo para ella, con el fin de mantener estable la balanza de pagos, el criterio diferenciador elemental el de la residencia, es decir un residente en España puede disponer libremente de pesetas y efectuar toda clase de transacciones y movimientos de las mismas, - con independencia de su nacionalidad, no pudiendo, - en cambio, disponer de divisas y teniendo la obligación de ceder al Instituto Español de Moneda Extranjera, en el plazo señalado por la Ley, las que adquiriere por cualquier concepto.

Por el contrario, el residente en el extranjero únicamente puede disponer de divisas, y de pesetas tan sólo en el caso de que las mismas sean producto de la conversión de estas divisas por medio de su entrega al Organismo competente del Estado, en este caso el Instituto Español de Moneda Extranjera.

Por otra parte, el citado residente en el extranjero no puede aceptar pesetas de ningún residente en España ni siquiera a título de préstamo, debiendo ingresarse todos los pagos en pesetas que le correspondiesen por cualquier concepto, y que no pudiesen ser transferidos al extranjero, en una cuenta sometida a las limitaciones del antes citado Decreto 313 del Instituto Español de Moneda Extranjera.

La Ley de 24 de Noviembre de 1938 sobre Delitos Monetarios amplía el Decreto-Ley de 14 de Mayo de 1937, estableciendo en su art. 1 entre los delitos monetarios los siguientes:

" .....

14.- La apertura de créditos en pesetas a residentes en el extranjero, o a residentes en España por cuenta o garantía de residentes en el extranjero, sin mediar la autorización del Instituto Español de Moneda Extranjera.

15.- La cesión a favor de residentes en el extranjero de créditos en pesetas sin mediar la autorización del citado Instituto.

16.- Los ingresos y abonos en pesetas en cuentas de residentes en el extranjero y la movilización del saldo de dichas cuentas sin autorización del expresado Instituto.

17.- Los pagos en pesetas por cuenta de residentes en el extranjero sin mediar autorización del citado Instituto."

18.- Y este párrafo del art. 1 de la Ley de Delitos Monetarios constituye un punto de capital importancia para este trabajo, considerando delito monetario "la venta de inmuebles sitos en España, títulos mobiliarios españoles o la participación en sociedades españolas anónimas, otorgada a favor de residentes en el extranjero mediante precio en pesetas y sin autorización del Instituto Español de Moneda Extranjera."

Como vemos, esta última disposición únicamente prohíbe estos actos de establecimiento de residentes en el extranjero en el caso de que sea mediante precio en pesetas, de lo que se deduce, a contrario sensu, que los actos a que se refiere el n.º 18 del art. 1 de la Ley de Delitos Monetarios serán válidos siempre y cuando se efectúen en divisas. Por esto, hasta el año de 1947, cuando los extranjeros residentes en el extranjero intentaban participar en una sociedad comercial española, para lo cual no tenían limitación

alguna, les bastaba con solicitar autorización al Instituto Español de Moneda Extranjera, el cual la concedía, siempre y cuando la aportación de capital se efectuase en forma de divisas.

Con fecha 28 de Marzo de 1947 y por Orden conjunta de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Industria y Comercio se creó la Junta Coordinadora de Servicios de la Subsecretaría de Economía Exterior, conocida corrientemente por el nombre de JECOEX, y cuyas facultades fueron reguladas por Orden Ministerial de 9 de Julio de 1953.

El art. 3 de la citada Orden dispone que la Junta Coordinadora de Economía Exterior examinará, a efectos de resolución o propuesta, según los casos, todos los asuntos que, no estando en la esfera de Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales, supongan un compromiso económico con el exterior. Interpretando ampliamente este precepto de la Orden Ministerial, el Ministerio de Comercio resolvió que la constitución de sociedades comerciales extranjeras o, en general, cualquiera inversión extranjera en España, suponía un compromiso económico con el exterior, por lo cual debía ser la operación sometida previamente a su aprobación.

Con arreglo a estas directrices, la Junta Coordinadora de Economía Exterior y de Comercio, que posteriormente, en 1957, cambió su nombre por el de Junta de

Operaciones Financieras con el Exterior (JOPEX), dene  
gó sistemáticamente hasta el año 1959 todas las peti-  
ciones de inversiones extranjeras en sociedades comer-  
ciales ante el justificado temor de que la sociedad -  
comercial con participación extranjera constituyese -  
una holding para participar indirectamente en empre-  
sas industriales españolas. No obstante, como las fa-  
cultades de esta Junta de Operaciones Financieras con  
el Exterior habían sido creadas por una simple Orden  
Ministerial, y en ninguna Ley se había establecido -  
una prohibición expresa limitando la participación -  
extranjera en las sociedades comerciales, tanto el No-  
tariado como los Registros Mercantiles siguieron acep-  
tando como válidas las participaciones extranjeras -  
en sociedades comerciales, sin necesidad de la autori-  
zación de la Junta de Operaciones Financieras con el  
Exterior. La dificultad para la constitución de las  
mismas por los no residentes en España, estribaba en  
la conversión de las divisas en pesetas, pues el Ins-  
tituto Español de Moneda Extranjera no autorizaba -  
esta conversión en tanto que no se presentaba la oportu-  
na autorización de la Junta de Operaciones Financie-  
ras con el Exterior. Por este motivo se recurrió al  
subterfugio de enviar las divisas sin mencionar en la  
transferencia que las mismas iban destinadas a la -  
constitución de una sociedad, sino simplemente para -  
gastos de estudios en el mercado español o para adqui-  
sición de mobiliario, con lo cual el Instituto autori-

zaba la conversión de la moneda que luego se empleaba en la constitución de la sociedad, ya que ni los Notarios ni los Registradores Mercantiles creían existir disposición alguna que pudiese coartar la libertad - del extranjero para participar en empresas comercia--les españolas.

La única desventaja que tenían las sociedades así - constituidas se producía en el momento en que deseaban retransferir dividendos al extranjero, pues en - tal caso el Ministerio de Comercio denegaba sistemáticamente la solicitud, por haber sido constituida la Sociedad sin su consentimiento. Claro está que este punto no era problema, pues del mismo mal sufrían incluso las sociedades constituidas con la aprobación del Ministerio de Comercio, debido a la carencia crónica de divisas por parte del Instituto Español de - Moneda Extranjera.

Podemos, de esta manera, resumir la legislación vigente hasta el 27 de Julio de 1959 de la siguiente - manera:

- 1º) Los extranjeros residentes en España podían participar libremente en empresas comerciales. En empresas industriales podían participar tan sólo hasta un 25% del capital de las mismas, pudiendo aumentarse este porcentaje previa petición del - Consejo de Ministros en caso de proyectos industriales de extraordinario interés nacional.

- 2º) A los extranjeros no residentes en España no les estaba permitido prácticamente, en virtud de la interposición de la Junta de Operaciones Financieras con el Exterior, la participación en empresas o sociedades comerciales españolas. En empresas industriales les estaba permitida como máximo una participación de un 25%, que podía ser aumentado previa petición del Consejo de Ministros en el caso de proyectos industriales de extraordinario interés nacional. En ambos casos, la aportación extranjera debía realizarse en divisas libres cotizadas en España o en utillaje que no se encontrase en la producción nacional, valorado a los precios del mercado internacional.
- 3º) Los cargos rectores debían estar forzosamente en manos de súbditos españoles, y en los Consejos de Administración únicamente se permitía una cuarta parte de Consejeros extranjeros.

Pese a todo cuanto se diga, la realidad es que la citada Ley de 24 de Noviembre de 1939 más que proteger la industria española, que hubiese sido su misión, lo que hizo fué retrasarla en su desenvolvimiento, poniendo trabas a gran número de proyectos industriales, que únicamente hubieran podido ser realizados con la ayuda extranjera. Se prefirió, no obstante, dadas las circunstancias del momento, evitar cualquier ingerencia extranjera en la industria nacional, y poniendo grandes dificultades a la poca que se permitía, lo cual originó un

retraso en nuestra industria frente a la restante europea del que aún nos estamos resintiendo.

En una época como la actual, en la que todo tiende a suprimir las barreras entre los Estados y a unir los intereses de los mismos, valga como ejemplo las recientes zonas del Mercado Común Europeo y la zona del Libre Comercio, la Ley de 24 de Noviembre de 1939 resultaba anticuada y anacrónica, por lo cual fué derogada por lo que respecta a sus disposiciones restrictivas del capital extranjero por el Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959.

Con independencia de la citada Ley de 24 de Noviembre de 1939 se promulgaron, como dijimos anteriormente, distintas Leyes en España restrictivas de las actividades de los extranjeros, por lo que se refiere a diversas ramas o sectores de la industria y del comercio.

Por hallarse gran parte de las mismas aún en vigor, las estudiaremos separadamente, después de tratar de la legislación general actualmente vigente y relativa a inversiones extranjeras.



VI

LEGISLACION ACTUAL: EL DECRETO-LEY DE 27 DE JULIO DE 1959 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL MISMO

1º) Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959.

La entrada en España como miembro de pleno derecho en la O.E.C.E. trajo consigo la adaptación de nuestra legislación y de nuestro comercio a las nuevas tendencias económicas imperantes en Europa. Así, inmediatamente se liberalizaron un cierto número de mercancías para su importación en España, sin más requisito que una declaración de importación y, al mismo tiempo, -comenzó a promulgarse la nueva legislación que permitiese la entrada de capitales extranjeros en España y que, al mismo tiempo, hiciese apetecible esta inversión.

El texto fundamental de este nuevo ordenamiento, que si no es liberalizador en su totalidad y en el ámbito que sería deseable, al menos suprime muchas de las antiguas barreras existentes frente al capital extranjero en la legislación anterior, es el Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959. La misma exposición de motivos -

de este Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959, pieza fundamental, alrededor de la cual gira todo el engranaje de las inversiones extranjeras, nos dice que, habiéndose iniciado la liberalización del comercio exterior y garantizado el abastecimiento de materias primas para la producción, resulta evidente la importancia de reforzar nuestras perspectivas de capitalización. Es, pues, sumamente aconsejable aumentar la cuota de ahorro con la aportación de capital extranjero, a fin de que pueda mantenerse un ritmo de crecimiento económico lo más elevado posible.

Seis son las innovaciones fundamentales del citado Decreto:

- 1ª) La equiparación, en principio, del extranjero al español, sentando el principio tan antiguo en nuestro derecho de igualdad de trato con los nacionales residentes en España.
- 2ª) La equiparación del español residente en el extranjero al extranjero, siguiendo un criterio de nueva política monetaria.
- 3ª) La clasificación de las inversiones extranjeras en "de preferente interés económico y social" y en inversiones que no reúnan dicha condición.
- 4ª) Fijar la participación normal del extranjero en las empresas españolas, sin necesidad de ningún otro -

requisito, en un 50%

52) Posibilidad para el extranjero de retransferir a su país de origen en divisa extranjera los beneficios percibidos por el capital, libremente en unos casos y en otros dentro de ciertos límites.

62) El Decreto-Ley no distingue entre sociedades industriales y comerciales.

Examinamos a continuación los diversos puntos del citado Decreto-Ley:

12) Inversores a los que se refiere el Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959: Dice el art. 1 que los españoles con residencia habitual en el extranjero, los extranjeros y las personas jurídicas extranjeras de naturaleza privada podrán transferir a España sus capitales en moneda extranjera admitida a cotización en el mercado español de divisas para invertir libremente su contravalor en la modernización, ampliación o creación de empresas españolas en igualdad de condiciones que los nacionales residentes en España y de acuerdo con lo establecido en el Decreto-Ley.

22) Exclusiones del Decreto-Ley: En virtud de los arts. 2 y 3 del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959, quedan excluidas del mismo aquellas empresas, cuya actividad esté directamente relacionada con la defensa nacional y la formación pública, así como las de prestación de servicios públicos, salvo aquellas de estas últimas que el Gobierno -

acuerde incluir por razones de interés general. Este precepto es lógico. Como ya expusimos con anterioridad en este trabajo, la defensa nacional, por afectar fundamentalmente a la existencia misma del Estado, debe estar plenamente en manos de nacionales, no pudiendo tolerarse ingerencia extranjera en las mismas. Lo mismo puede decirse con las empresas dedicadas a la información pública, pues debe partirse de la premisa de que dicha información sea siempre inspirada por ideas puramente nacionales, sin ingerencia extranjera que podría representar un espíritu distinto a los verdaderos intereses de la Nación, llamando a la opinión pública a engaño.

Asimismo quedan excluidas del Decreto-Ley, en virtud de su art. 3, las empresas mineras extractivas, las cinematográficas, las dedicadas a la investigación y explotación de hidrocarburos, las de banca, las de seguros y las navieras, que únicamente se regirán por el Decreto-Ley a que hacemos referencia en lo no previsto por la legislación especial, a las que continuarán sometidas.

3ª) Calificación o clasificación de las inversiones: El art. 4 clasifica las inversiones de capital extranjero en empresas españolas en dos grupos:

- a) Inversiones de preferente interés económico y social.
- b) Inversiones que no reúnan la antedicha condición.

Continúa diciendo el art. 4 del citado Decreto-Ley que para esta calificación se tendrán en cuenta fundamentalmente los criterios de prioridad y selección del Programa Nacional de Ordenación de las Inversiones, y muy especialmente dentro de dichos criterios la circunstancia adicional de que la inversión de capital extranjero vaya dirigida a la modernización o ampliación de instalaciones ya existentes. En realidad, son muy vagos e inconcretos los fundamentos que cita el Decreto-Ley para obtener la citada calificación, que se atiene únicamente al criterio del Programa Nacional de Ordenación de las Inversiones y al hecho de que el capital extranjero vaya dirigido a la modernización o ampliación de instalaciones ya existentes, por lo que fundamentalmente esta calificación dependerá de la discrecionalidad administrativa.

Las disposiciones posteriores complementarias del Decreto-Ley a que nos referimos no aclaran mucho la cuestión, puesto que únicamente en el art. 3, número 2º, del Decreto de 24 de Diciembre de 1959 se exige a aquellos inversores que deseen ser clasificados en el grupo A, de preferente interés económico y social, que presenten con la memoria descriptiva de las actividades de la empresa, un estudio económico justificativo de las mismas en relación con el mercado interior y exterior, y una

descripción técnica del equipo capital que se aporte como participación extranjera con su valoración.

Por lo tanto, la concesión de esta calificación en el grupo A de empresa preferente de interés económico y social depende finalmente del prudente arbitrio de la Administración en otorgar la misma, si bien, ateniéndose a los criterios de prioridad y selección del Programa Nacional de Ordenación de las Inversiones. De acuerdo con el programa referente al año de 1960, por lo que se refiere al sector "Industria", se concede, en principio, máxima prioridad a las llamadas industrias básicas, es decir a aquéllas que sirvan de base y fundamento para el desarrollo de toda la restante gama de las actividades industriales.

Dice el citado Programa Nacional de las Inversiones del año 1960 que, en general, el objetivo fundamental que determina el desarrollo industrial, consiste en el mantenimiento de las condiciones que favorecen al desenvolvimiento de los sectores básicos, ya que éstos son premisa necesaria para la evolución de todo lo demás. No obstante, continua el Programa, se dedica especial atención a determinados sectores, en los que la renovación de sus equipos en la racionalización de su proceso productivo pueden ser más eficaces con vistas al incremento de nuestro comercio exterior. Entre las industrias básicas considera el Programa Nacional de Ordenación de las Inver-

siones las mineras extractivas, en especial el sector de extracción del carbón, como las más fundamentales. Pero ya vimos que dichas industrias no se han modificado con relación a las inversiones extranjeras, pues conforme al art. 3 antes citado del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959, continuaron quedando sometidas a su legislación especial. No obstante, la inversión extranjera también es posible en estas empresas dentro de las posibilidades que brinda la legislación especial - en este concreto caso de minas, a que haremos referencia más adelante.

En este sector de la extracción del carbón las inversiones deben ir dirigidas fundamentalmente, según el Programa, al logro de una adecuada productividad limitada actualmente, entre otras razones, por una insuficiente mecanización de las labores de extracción y de transporte. Este hecho es reconocido por unanimidad en esta rama de la minería, hasta el punto de que las previsiones realizadas por los industriales integrados en este sector se dirigen en su mayor parte a cubrir las necesidades de bienes de equipo capital necesarios para conseguir un incremento en la mecanización de los procesos productivos.

El Programa dedica también importancia a la producción de energía eléctrica, de la que se espera mantenga el ritmo de crecimiento que corresponde al incremento de

la demanda.

En el sector siderúrgico confía en que el presente año se pongan en pleno rendimiento importantes instalaciones de laminación.

Asimismo se refiere el Programa a la industria del cemento, a la de abonos nitrogenados, al sector textil, al sector de conservas, a las construcciones navales y a la investigación de hidrocarburos. No obstante, las industrias por su orden de preferencia, conforme al Programa, son las siguientes:

- 1ª) Extracción de carbón.
- 2ª) Extracción de minerales metálicos.
- 3ª) Abonos nitrogenados.
- 4ª) Acido sulfúrico y superfosfatos.
- 5ª) Siderurgia
- 6ª) Metalurgia.
- 7ª) Electricidad.
- 8ª) Gas.
- 9ª) Cemento.
- 10ª) Aprovechamiento de residuos agrícolas.
- 11ª) Celulosa.
- 12ª) Refinería de petróleo, lubricantes.
- 13ª) Investigación de petróleo.
- 14ª) Extracción de minerales no metálicos (sales potásicas).
- 15ª) Azúcares y alcoholes.



- 16ª) Conservas.
- 17ª) Industrias del tabaco.
- 18ª) Industrias textiles.
- 19ª) Fábricas del calzado.
- 20ª) Fabricación de papel y derivados.
- 21ª) Productos del caucho.
- 22ª) Transformados metálicos.
- 23ª) Construcción de maquinaria, excepto eléctrica.
- 24ª) Construcción de maquinaria, aparatos y accesorios -  
eléctricos.
- 25ª) Material ferroviario.
- 26ª) Industrias del motor.
- 27ª) Construcción naval (astilleros).
- 28ª) Resto de la industria química.
- 29ª) Artes gráficas y prensa.
- 30ª) Industrias no especializadas.

A este criterio de prioridad y selección deberá atenderse, pues, la Administración al calificar si una inversión extranjera merece ser conceptuada de preferente - interés económico y social, y dentro de este criterio - la circunstancia adicional de que la inversión de capital extranjero vaya dirigida a la modernización o ampliación de instalaciones ya existentes.

5ª) Beneficios y condiciones de las diversas clases de inversiones:

- a) Las inversiones calificadas de preferente interés -

económico y social, es decir las calificadas en el grupo A, disfrutarán del derecho de transferencia al exterior en divisa extranjera y sin limitación cuantitativa alguna de los beneficios efectivamente percibidos por el capital extranjero.

Asimismo, estas inversiones disfrutarán de la transferencia al exterior en divisa extranjera de los capitales invertidos. Esta transferencia podrá iniciarse una vez transcurridos dos años desde la entrada en marcha normal de la empresa y realizarse en el curso de los dos años siguientes.

- b) Las inversiones no calificadas de preferente interés económico y social gozarán del derecho de transferencia de beneficios al exterior, pero con la limitación máxima de un 6% del capital que hayan invertido en la empresa española.

Estas inversiones no calificadas gozan también de la transferencia al exterior en divisa extranjera de los capitales invertidos y podrán iniciarla transcurridos dos años desde la entrada en marcha normal de la empresa y realizarla en el curso de los cuatro años siguientes (arts. 6 y 7 del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959).

Por otra parte, el art. 8 del citado Decreto-Ley autoriza al Gobierno para mejorar las condiciones consignadas

anteriormente, si la situación de la Balanza de Pagos y circunstancias del comercio exterior lo permiten.

6ª) Cuantía de la participación extranjera: Del art.1 que comentamos anteriormente se desprende que el capital extranjero puede ser invertido en España en igualdad de condiciones que el capital nacional, o sea que nuestra legislación revierte nuevamente el principio de igualdad de los arts. 27 del Código Civil y 15 del Código de Comercio. No obstante, el art. 5 establece para las inversiones extranjeras superiores al 50% - del capital de la empresa la previa autorización del Consejo de Ministros. Esto, a nuestro entender, no - significa una limitación, como se ha venido a decir - en ciertos sectores, considerando que simplemente se había ampliado la participación extranjera del 25% al 50% en las empresas españolas. Lo que significa es - que, partiendo del principio de libre inversión, en - el caso de que ésta conceda el control total de una - empresa, como sucede con una participación superior - al 50%, el Consejo de Ministros deberá autorizarla - previamente. Además, la práctica del último año ha demostrado que el Consejo de Ministros ha resuelto en - sentido favorable la totalidad de las peticiones de - participación extranjera superiores al 50% que le han sido presentadas para resolución a través de la Presidencia del Gobierno.

7ª) Crédito: El art. 9 del Decreto-Ley de 27 de Julio

de 1959 establece que las empresas con participación de capital extranjero podrán recurrir al crédito nacional y extranjero en las condiciones que reglamentariamente se señalen, y que han sido reguladas en el Decreto de 24 de Diciembre de 1959, al que haremos referencia más adelante.

De especial interés en el Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959 es el art. 13, la cláusula derogatoria de los arts. 5 y 6 de la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional de 24 de Noviembre de 1939, así como el art. 3 de la Ley de 26 de Diciembre de 1958 referente a sociedades de inversión mobiliaria, por lo que se refiere a las prohibiciones relativas a extranjeros.

De esta manera, con independencia de la participación extranjera en las empresas españolas, desaparecen las restricciones relativas a la decisión de los asuntos sociales y a la ocupación de los cargos directivos, los cuales, en la actualidad, pueden ser libremente ocupados por súbditos extranjeros, si bien para ello habrá que tener en cuenta las normas de la Ley de Sociedades Anónimas, conforme a las cuales los Consejos de Administración son nombrados en proporción a las participaciones en el capital social.

Por otra parte, derogado también el párrafo último del art. 6 de la Ley de 24 de Noviembre de 1939, y no

existiendo en el Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959 - precepto alguno que señale vicio de nulidad a la inversión extranjera en contra de lo dispuesto en la legislación vigente, es lógico que dicha inversión será civilmente válida, aunque le falte algunas de las autorizaciones administrativas, a que se refiere la legislación actualmente vigente.

El Decreto-Ley que acabamos de comentar significa, - pues, un cambio de rumbo total de la política económica de nuestro Gobierno con respecto a las inversiones de capital extranjero, volviendo, si bien con la prudencia necesaria, a los principios que inspiraron - nuestro Código de Comercio y que hoy han vuelto a descubrirse nuevamente como los únicos válidos para mantener estrechas y buenas relaciones entre las naciones.

Expondremos, a continuación, el contenido de los Decretos complementarios para el desarrollo de los preceptos del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959.

2º) Decreto de 30 de Septiembre de 1959.

El primero de ellos publicado es el Decreto de 30 de Septiembre de 1959 que señala el procedimiento a seguir por el inversor extranjero para obtener la calificación de preferente interés económico y social, así como las Autoridades competentes para otorgar la citada calificación. Se trata, pues, de un precepto adje-

tivo de procedimiento para llevar a efecto el fundamental de 27 de Julio de 1959.

En dicho Decreto, según se desprende su art. 1, aún no se había perfilado concretamente la forma en la que se puede producir la inversión extranjera, pues esta labor quedó reservada para el Decreto de 24 de Diciembre de 1959. El texto legal que ahora nos ocupa parte aún sólo de la base de una inversión en divisas en igualdad de - condiciones con los nacionales residentes en España. -

Las normas de procedimiento que señala el Decreto para el caso de que la participación extranjera no haya de - exceder del 50% del capital de la empresa española, son las siguientes:

- 1º) Si el inversor se acogiera a la calificación consignada en el apartado b) del art. 4 del Decreto-Ley - de 27 de Julio de 1959, es decir cuando no desease la calificación de su inversión como de preferente interés económico y social, bastará que, una vez - obtenidas las pertinentes autorizaciones administrativas, que por razón de las actividades que trata - de realizar exija la vigente legislación con carácter general para todas las empresas (autorización - de nueva industria, autorización de ampliación de - la ya existente, etc), comunique al Instituto Español de Moneda Extranjera los particulares de la -

inversión necesarios para poder ejercer en su día los derechos reconocidos en los arts. 6 y 7 del mencionado Decreto-Ley sobre transferencia al exterior en divisa extranjera de los beneficios efectivamente percibidos y de los capitales invertidos.

Es decir que, en el caso de que un extranjero desee - participar con divisas libres en una empresa española hasta el 50% del capital social de la misma, le bastará con ordenar a su Banco en el extranjero que transfiera a España las divisas necesarias para su participación. Estas divisas son convertidas en pesetas por el Instituto Español de Moneda Extranjera sin más trámites e invertidas en la empresa española. A continuación, se puede, sin necesidad de ningún otro requisito firmar la escritura notarial de constitución de sociedad e inscribir la misma en el Registro Mercantil. El procedimiento, pues, es de lo más sencillo, no diferenciándose en un ápice de los requisitos exigidos para - una sociedad o empresa puramente española.

A continuación, esto sí, el inversor deberá comunicar al Instituto Español de Moneda Extranjera los datos - necesarios acerca de la inversión, con el fin de poder gozar, en su día, de los beneficios de transferencia - al exterior de un 6% en concepto de dividendos y también de los capitales invertidos en la empresa española,

conforme permiten los arts. 6 y 7 del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959.

2º) En el caso de que el inversor extranjero desee disfrutar de los derechos que se derivan de la calificación señalada en el apartado A) del art. 4 del ya tantas veces repetido Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959, es decir la calificación de preferente interés económico y social, el mismo o la empresa española en que haya de realizar la inversión solicitarán la correspondiente calificación a través de la Oficina de Coordinación y Programación Económica de la Presidencia del Gobierno.

El citado Decreto crea una comisión permanente - de la Junta Rectora de la citada Oficina de Coordinación y Programación Económica de la Presidencia del Gobierno para informar y tramitar los expedientes de calificación. Dicha comisión estará presidida por el Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, quien podrá delegar en el Secretario General Técnico. Serán Vocales de la Comisión los Secretarios Generales Técnicos - de los Ministerios de Hacienda, de Trabajo y de Comercio y de los demás Ministerios interesados en cada caso concreto. Esta comisión tramitará el expediente de calificación y la elevará con -



su informe y el de los Ministerios competentes a resolución de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Interesante es que el Decreto, a que nos referimos, - de 30 de Septiembre de 1959 ordena que los citados - expedientes de calificación deberán ser tramitados y resueltos dentro del plazo mínimo de un mes a partir de la presentación de la solicitud y documentación necesaria para acreditar el preferente interés económico y social de la empresa española, a que se refiere la inversión extranjera.

El plazo señalado de un mes da a entender que nuestra Administración ha comprendido que los proyectos industriales deben tramitarse con la celeridad que requieren las transacciones modernas, pues la industria y el comercio no pueden encajarse en los moldes administrativos corrientes, ya que, en definitiva, cada día de retraso significa una pérdida de dinero que en buena política económica debe evitarse en lo posible. Si - comparamos las antiguas tramitaciones industriales en la época de vigencia de la Ley de 24 de Noviembre de 1939 que duraban incluso años, no cabe más remedio que felicitarse de la nueva tendencia del legislador.

La resolución que recaiga de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos será notificada a los interesados por la Presidencia del Gobierno.

3º) Para el caso de que la participación extranjera - haya de exceder del 50%, el art. 5 del Decreto - Ley de 27 de Julio de 1959 requería la previa auto- rización del Consejo de Ministros. El Decreto de 30 de Septiembre de 1959, que nos ocupa ahora, pre- vé que la dicha autorización del Consejo de Minis- tros, así como la calificación de preferente inte- rés económico y social, en su caso, se solicitará de la Presidencia del Gobierno, la que con el In- forme de la Comisión Permanente de la Oficina de - Coordinación y Programación Económica de la Presi- dencia del Gobierno y el de los Ministerios intere- sados elevará la solicitud al Consejo de Ministros, notificandox en su día, al peticionario la resolu- ción recaída.

No podemos terminar el estudio de este Decreto de 30 de Septiembre de 1959, sin hacer mención a su art. 4 conforme al cual la Oficina de Información de la Pre- sidencia del Gobierno facilitará toda la información que le sea solicitada verbalmente o por escrito en re- lación con las inversiones de capital extranjero y - acerca de los Ministerios, a quienes compete otorgar las autorizaciones administrativas a que se alude en el citado Decreto.

Ello es de capital importancia, puesto que se crea - una oficina Informadora, cuyas respuestas a las con- sultas que le son formuladas deben considerarse vincu- lantes para la Administración, eliminando de esta ma-

nera todo el semillero de dudas que planteaba la legislación anterior, sin que hubiese organismos competente para resolverlas.

3º) Decreto de 24 de Diciembre de 1959.

Con fecha 24 de Diciembre de 1959 se promulga por el Gobierno un nuevo Decreto, también complementario del de 27 de Julio de 1959, sobre inversión de capital extranjero en empresas españolas. La exposición de motivos - del citado Decreto da a entender que su finalidad es - simplemente desarrollar el art. 9 del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959, conforme al cual se autorizaba a las empresas con participaciones de capital extranjero para recurrir al crédito nacional y extranjero en las condiciones que reglamentariamente se señalaron y a establecer un procedimiento único para aquellos casos en que habían de intervenir varios departamentos ministeriales, en virtud del sistema de economía administrativa establecido en el art. 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 1958.

No obstante, el citado Decreto de 24 de Diciembre de 1959 tiene asimismo gran importancia por el hecho de haber definido casuísticamente las formas o modalidades que puede revestir la inversión extranjera, cuya omisión ya habíamos señalado antes con respecto al Decreto Ley de 27 de Julio de 1959, pues los mismos se referían únicamente a capitales en divisas.

La inversión del capital extranjero para la modernización, ampliación o creación de empresas españolas - podrá revestir, conforme al texto legal que comentamos, las modalidades siguientes:

- a) Transferencia a España de divisas extranjeras admitidas a negociación en el mercado español para aportar directamente su contravalor en pesetas a la empresa española.

Como ya apuntábamos anteriormente, esta es la modalidad más sencilla de la inversión extranjera. Es de importancia señalar que las divisas deben ser admitidas a negociación en el mercado español, y son aquéllas, cuyos cambios máximos y mínimos son publicados semanalmente por el Instituto Español de Moneda Extranjera y que, en la actualidad, son los siguientes: francos suizos, francos belgas, francos franceses, dólares USA, dólares Canadá, marcos alemanes, florines holandeses, libras esterlinas, libras italianas, chelines austriacos, coronas danesas, coronas noruegas y coronas suecas.

En una interpretación estricta de la Ley, éstas son las únicas divisas en las que se puede efectuar la inversión del capital extranjero bajo esta modalidad. La forma de la aportación ya fué expuesta antes. Las divisas transferidas desde el exterior a un Banco español son cedidas al Instituto Español de Moneda Extranjera o vendidas en la Bolsa de -

Madrid por los Bancos autorizados para ello, recibiendo el titular su contravalor en pesetas que es aportado a la empresa española.

- b) Aportación directa a la empresa española de equipo capital de origen extranjero, cuya valoración será la - que se fije a efectos de derechos arancelarios.

Dos ventajas tiene la actual formulación de esta modalidad de la inversión frente al Derecho anteriormente vigente. Encontramos acertadísima la expresión "equipo capital" en vez de "utillaje" que utilizaba el art. 6 de la Ley de 24 de Noviembre de 1939, ya que bajo "utillaje" en sentido estricto únicamente podía entenderse maquinaria, instrumental y herramientas, mientras que bajo "equipo capital" cabe una instalación industrial completa, incluso partes de la misma que no tengan concretamente la consideración de máquinas. Por otra parte, la valoración de esta maquinaria, conforme a la que se fije a efectos arancelarios, es evidentemente también un acierto frente al anterior sistema de la Ley de 24 de Noviembre de 1939, que se refería a una valoración conforme a los precios del mercado internacional. Para justificar bajo la vigencia de la Ley antigua el valor de la maquinaria, había que aportar normalmente a la Sección correspondiente del Ministerio de Industria facturas proforma de varias casas sumi-

nistradoras y, a ser posible, de diversos países, - procedimiento no exento de molestias que hoy ha quedado suprimido, pues la valoración arancelaria es - vinculante a estos efectos.

Es interesante también citar aquí el art. 32 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, conforme al cual los administradores de una Sociedad Anónima están - obligados a revisar la valoración de la aportaciones no dinerarias de los socios dentro del plazo de cuatro meses a contar desde su constitución.

- e) Aportación directa a la empresa española de pesetas procedentes de beneficios o capitales que en virtud de lo dispuesto en los arts. 6 y 7 del Decreto-Ley - de 27 de Julio de 1959 tengan la condición de transferibles al exterior en divisas extranjeras.

Esta modalidad de la inversión está bien clara. Se trata de volver a invertir los beneficios obtenidos en la inversión anterior y que sean transferibles al extranjero. Tales beneficios, a pesar de constar en pesetas, son prácticamente equiparables a divisas - (pesetas transferibles las llama la Ley, pues pueden convertirse en divisas en cualquier momento). De ahí su asimilación con las divisas extranjeras a los - efectos de su inversión en empresas españolas.

- d) Aportación directa a la empresa española de pesetas que, de acuerdo con la legislación monetaria, tengan la consideración de convertibles.

Hemos visto que el Decreto que nos ocupa hace una distinción entre pesetas transferibles, que son las procedentes de beneficios o capitales a que se refieren los arts. 6 y 7 del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959, y pesetas convertibles, que son todas las restantes que puedan convertirse en divisas, de acuerdo con la legislación monetaria vigente. Estas son, por ejemplo, saldos en pesetas procedentes de una importación en mercancías que pueden ser transferidas al exterior o, en general, cualesquiera otras pesetas que gocen de este beneficio.

En realidad, a nuestro entender, no existe diferencia de fondo alguna entre las pesetas transferibles y las convertibles, y no entendemos cuál - ha sido el propósito del legislador al efectuar - esta distinción, pues en ambos casos se trata de moneda nacional que en un momento determinado puede transformarse en moneda extranjera.

De todos los modos, encontramos loable y acertado el propósito del legislador de aceptar estas pesetas por su equiparación a las divisas como modalidad de la inversión extranjera. Bajo el reinado - de la Ley anterior, tal aportación no hubiese sido

nunca posible, hallándose inspirado el motivo, - sin lugar a dudas, en una rutina contable-administrativa. Ya expusimos que bajo la vigencia de la legislación anterior al Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959, dichas pesetas tenían que ser primeramente transferidas al extranjero para su conversión en divisas y, una vez obtenidas las mismas, éstas volvían a transferirse a España para su inversión en la empresa correspondiente.

- e) Aportación directa a la empresa española, previa autorización y valoración por el Ministerio competente de asistencia técnica, patentes y licencias de fabricación.

Esta modalidad es interesantísima, pues para la industria nacional resultan la mayoría de las veces de mucho más importancia que la maquinaria o las divisas los procedimientos de fabricación - extranjera, ya sea en forma de asistencia técnica o de patentes y licencias de fabricación. Lo - difícil en estos casos es la valoración, pues - como todos los objetos patrimoniales inmateria- les, únicamente pueden tener el valor que esti- men las partes, siendo difícil la comprobación - del mismo por el Ministerio competente. Bajo la asistencia técnica entre la cesión del llamado "know how" (el saber como hacer las cosas), cuyo



concepto es aún más vago que el de una patente o licencia de importación. Constituye ese conjunto de conocimientos y de experiencias de una empresa que no son patentables y que se han adquirido a lo largo de un trabajo de muchos años en un determinado ramo de la producción. Sin el conocimiento de este "know" how" muchas veces la escritura misma de las patentes resulta completamente inservible. La valoración de este "know how" es aún más difícil que la de una patente, si bien pueden servir de base los gastos que la empresa que aporta tiene continuamente por el mantenimiento de laboratorios, de ensayo, investigación y experimentación y por los gastos que dedica en su presupuesto cada año a estos fines. Generalmente, nuestro Ministerio de Industria suele ser prudente en la valoración de las patentes y del "know how", aceptando las propuestas de las partes, siempre que - las mismas no sean francamente exorbitadas. En - realidad, y salvo el peligro de una simulación - que pueda encubrir otros intereses, es lógico que la sociedad española que acepta la inversión en forma de "know how", sepa mejor que nadie hasta qué punto le compensa el precio que por el mismo se pide para obtener en el futuro un beneficio. - No debemos olvidar nunca que toda actividad indus

trial se efectúa con un propósito primordial, que es el de ganar dinero, siendo cualesquiera otros - motivos e intereses que puedan intervenir en la operación de carácter puramente secundario. Por - esto, la sociedad o empresa española que acepte - la asistencia técnica, una patente o licencias de fabricación extranjeras, sabrá mejor que nadie - hasta qué punto le conviene valorar las mismas, - con el fin de no hacer irrisorio el futuro bene- ficio que espera de la operación.

Y ya que estamos tratando el tema de la forma en que puede efectuarse la inversión, aprovecharemos esta - ocasión para tratar de aclarar uno de los puntos más dudosos que la misma suscita. Sabido es que la antí- gua legislación, concretamente la Ley de 24 de Noviem- bre de 1939, restringía únicamente la participación - extranjera en las sociedades industriales, es decir - en aquéllas que ejercían alguna de las industrias enu- meradas en su art. 1. Por lo tanto, quedaban libres - de estas restricciones, según expusimos anteriormente, y podían participar en ellas los extranjeros sin limi- tación alguna, las sociedades de tipo puramente comer- cial o cualesquiera otras que no ejerciesen la indus- tria.

En la nueva legislación actualmente vigente, el legis-

lador no ha hecho distingo absoluto entre sociedades industriales y comerciales, y parece ser que esta - oscuridad de la Ley es intencionada. En efecto, tanto en el Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959 como en las demás disposiciones que estamos analizando, únicamente se habla de empresas españolas sin especificar si se refiere a las empresas industriales o a todas las empresas en general. La duda se ha agravado más con motivo de la publicación de la Orden de 10 de Febrero de 1960, creando el Registro Especial de Valores y participaciones Industriales en Poder de Extranjeros, lo que viene a oscurecer aún más la cuestión, pues si en los Decretos anteriores se hablaba simplemente de empresas, ahora se emplea la palabra "valores industriales", de la que se desprende que únicamente pueden estar referidos a acciones de empresas industriales, - Por otra parte, en diversos artículos de la Orden de 10 de Febrero de 1960 se emplean indistintamente las palabras "empresas españolas", "sociedades españolas", "valores, participaciones industriales", todo lo cual no viene más que a aumentar la confusión reinante en esta materia de si las sociedades de tipo puramente - comercial deben quedar libres de la citada legislación y pueden ser adquiridas en su totalidad por extranjeros.

Una consulta formulada a la Presidencia del Gobierno en este sentido respondió después de largos titubeos que las disposiciones legales relativas a inversiones extranjeras, y en especial el límite normal de participación de un 50% del capital social, se refería indistintamente tanto a las sociedades industriales como a las comerciales.

De todos los modos, la pregunta continua en el aire y debe ser resuelta con métodos jurídicos más que con el oportunismo práctico de cada momento. A nuestro entender creemos que todo el mal reside en un defecto de redacción de los Decretos de 27 de Julio de 1959 y disposiciones complementarias, quienes utilizan la palabra "empresa no en el sentido de toda actividad, sino limitada exclusivamente a las actividades industriales. A nuestro entender, y en virtud de lo dispuesto en el art. 15 del Código de Comercio, creemos que en la actualidad el extranjero puede participar con entera libertad en una sociedad comercial, pese a la opinión emitida por la Oficina de Información de la Presidencia del Gobierno, y ello en virtud de los siguientes argumentos:

- 1ª) Porque los actuales Decretos reguladores de las inversiones extranjeras se llaman "Decretos liberalizadores" de las mismas, con el fin de fomentar estas inversiones en España, y no puede concebirse

que un Decreto liberalizador limite aún más, si bien sólo en un determinado sentido, las posibilidades inversoras del extranjero de lo que estaba en la legislación anterior.

2ª) Porque el comercio es esencialmente libre en nuestra legislación y su ejercicio no requiere de autorización administrativa alguna, por lo cual cualquier extranjero que individualmente desee ejercer el comercio en España, no tiene para ello más que, una vez obtenida su autorización de trabajo en España, darse de alta en la licencia fiscal (antigua Contribución Industrial) para ejercer él mismo libremente y no hay duda de que una actividad que se permite al extranjero individualmente, es lógico que pueda ejercerla también forma colectiva, es decir en forma de una sociedad.

3ª) Confirma nuestra opinión el hecho de que la Orden de 10 de Febrero de 1960, hoy derogada, al crear el Registro Especial, abandona en parte la anterior terminología y vuelve a hablar de participaciones y valores industriales, lo cual nos refuerza en la idea de que cuando nuestra legislación actual emplea la palabra "empresa", se refiere únicamente a las empresas industriales.

Por lo motivos antes expuestos, no comprendemos la consulta evacuada por la Oficina de Información de la -

Presidencia del Gobierno que, aparte de no aportar ni gún argumento jurídico en favor de su tesis, demuestra ignorar completamente la legislación anterior al Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959. Posiblemente el móvil - que inspiró la interpretación dada por la citada Oficina Informativa a este problema fué el ya crónico temor a las sociedades holding, a través de las cuales pueden controlarse toda clase de sociedades industriales.

No obstante lo anteriormente expuesto, los Notarios han aceptado por principio de máxima prudencia esta doctrina emanada de la Presidencia del Gobierno, y se niegan en principio,, con el fin de salvar su propia responsabilidad, a autorizar las escrituras de constitución de las sociedades comerciales en las que los extranjeros - tengan una participación superior al 50%. Confiamos, - no obstante, en que en un futuro próximo toda la legislación que ahora se halla desparamada en diversos Decretos, sea recogida en una Ley única relativa a las inversiones extranjeras y que en la misma se aclare definitivamente el problema respecto a la participación de los extranjeros en las sociedades y empresas de tipo puramente comercial.

También aboga en favor de nuestra teoría de libertad de las sociedades comerciales, el hecho de que el art. 3 del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959 se refiera, entre

otras, a las empresas de Banca y a las de Seguros - (actividades puramente comerciales), diciendo que se registrarán por su propia legislación especial. En dicha legislación especial no se hace mención alguna a limitaciones de la participación extranjera, y no - creemos, por lo tanto, que la limitación de la aportación del 50% sea aplicable a las mismas.

Crédito nacional y extranjero:

El art. 9 del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959 decía que las empresas con participación de capital - extranjero podrán recurrir al crédito nacional y ex- tranjero en las condiciones que reglamentariamente - señalan. Dichas condiciones han venido a ser expues- tas en el art. 2 del Decreto de 24 de Diciembre de 1959, según el cual las empresas españolas con parti- cipación de capital extranjero podrán recurrir al crédito nacional y extranjero a medio y largo plazo mediante emisión o no de obligaciones, en las si- guientes condiciones:

- a) Si la participación extranjera no excede del 25% del capital social, la empresa podrá recurrir al crédito nacional sin limitación alguna y en igual- dad de condiciones que las empresas españolas, en las que no exista participación de capital extran- jero.
- b) Si la dicha participación extranjera excediese -

del 25% del capital social, la empresa podrá concertar créditos en el interior hasta un 50% de su capital. La utilización del crédito nacional en porcentaje superior podrá ser condicionada por los Ministros de Hacienda y Comercio a la simultánea obtención de créditos en el extranjero.

En rigor no estimamos justa esta disposición restrictiva del crédito a aquellas empresas españolas, cuya participación extranjera sobrepase el 25%, pues, en primer lugar, dichas empresas, con independencia de la constitución de su capital, son empresas españolas, domiciliadas en España y constituidas con arreglo a la legislación española, por lo que, gozando de la nacionalidad española, no deben de tener un trato discriminatorio frente a aquéllas que son españolas en su totalidad o en cuyo capital la participación extranjera es menor. Encontramos francamente este precepto reglamentario en contradicción con el art. 1 del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959, y también con el Decreto de 30 de Septiembre de 1959, conforme a los cuales la inversión extranjera se efectuará en igualdad de condiciones con los nacionales residentes en España.

Por otra parte, dicho precepto supone una nueva limitación frente a la legislación anterior, en la cual no existía prohibición de este tipo de clase alguna, y volvemos a repetir que una legislación que se llama liberalizadora no puede desvirtuarse creando restricciones -



nuevas que antes no existían.

Además, el citado precepto relativo al crédito ha creado dificultades justamente en aquel sector de la inversión extranjera que menos se lo merecía, es decir en las empresas con capital mayoritario extranjero, establecidas desde hace años en nuestra patria. En efecto, las nuevas inversiones de capital extranjero, ante el conocimiento de la restricción crediticia, efectúan sus cálculos y toman sus medidas anticipadamente para que su financiación marche bien, ya sea con capital nacional o extranjero. La sorpresa, sin embargo, se ha producido en aquellas empresas que llevan más de 30 años trabajando en España y adaptadas en un todo a la vida económica de nuestra Nación, y que como tales gozaban de importantes créditos bancarios para su financiación en igualdad que las empresas puramente españolas. Estas sociedades se han visto repentinamente en la situación de tener que reducir sus créditos bancarios a la mitad de su capital social, con gran disgusto asimismo de los propios Bancos, para quienes estas sociedades eran antiguos clientes conocidos y solventes, y con los que no pueden trabajar ahora en la medida deseada en virtud de esta nueva modalidad legislativa.

Pero es que asimismo este precepto del Decreto de 24 de Diciembre de 1959 deja en suspenso la cuestión de qué deberá hacerse cuando el extranjero que acuda al crédito sea un comerciante individual, ya que aplicando estricta

mente el citado precepto, ningún extranjero residente - en España podría acudir al crédito nacional más que hasta la mitad del capital con que operase en su negocio. Confiamos en que todos estos problemas sean resueltos con la promulgación de una adecuada Ley sobre inversiones extranjeras en un futuro próximo.

8ª) Procedimiento para solicitar la calificación de preferente interés económico y social y las autorizaciones administrativas pertinentes: El artículo 3 del tantas veces citado Decreto de 24 de Diciembre de 1959 desarrolla las normas de procedimiento para solicitar la calificación de preferente interés económico y social, así como las autorizaciones administrativas, a que se refieren los arts. 2, apartado 2ª, y 3 del Decreto de 30 de Septiembre de 1959 (autorización de nueva industria, ampliación de industria, etc).

Con sano criterio, el citado art. 3 se inspira en el art. 39 de nuestra Ley de Procedimientos Administrativos que, partiendo del principio de economía administrativa, establece que en las autorizaciones o concesiones, en las - que no obstante referirse a un solo asunto u objeto, hayan de intervenir con facultades decisorias dos o más departamentos ministeriales o varios centros directivos de un Ministerio, se instruirá un solo expediente y se dictará una resolución única.

En el caso concreto que tratamos de las inversiones extranjeras, se tramitarán las solicitudes antes mencionadas en un procedimiento único incoado ante la Comisión Permanente de la Oficina de Coordinación y Programación Económica de la Presidencia del Gobierno.

Dicho procedimiento se iniciará por solicitud a la Presidencia del Gobierno, en la que se expondrán las razones que justifiquen la calificación pretendida y a la - que se acompañará la documentación que exige la vigente legislación para solicitar las correspondientes autorizaciones administrativas. Continúa diciendo el citado - precepto que en la memoria descriptiva de las actividades de la empresa, será obligatorio un estudio económico justificativo de las mismas en relación con el mercado interior y exterior y una descripción técnica del - equipo capital que se aporte como participación extranjera con su valoración.

Este precepto muestra únicamente las normas generales - de la presentación de la solicitud, teniéndose que buscar la documentación necesaria para solicitar las correspondientes autorizaciones administrativas en multitud de preceptos desperdigados en diversas Leyes, Decretos y Ordenes, de los cuales citaremos como más importante la Orden de 12 de Septiembre de 1939 para solicitar la creación de nuevas industrias o la ampliación de

las ya existentes. Con el fin de ahorrar el trabajo a los solicitantes, la Presidencia del Gobierno publicó un índice para la exposición de los datos en las solicitudes que habrían de presentarse para obtener la autorización de calificación de preferente interés económico y social, o las participaciones superiores al 50% del capital social. Transcribiremos, a continuación, este índice verdaderamente exhaustivo y que coloca a la Presidencia del Gobierno así como a los Ministerios interesados en situación de conocer rápidamente todas las ventajas e inconvenientes de la inversión extranjera:

0. Identificación

1. Localización proyectada.
2. Tecnología de los procesos productivos.
3. Aspectos laborales.
4. Estructuración del capital futuro.
5. Suministros necesarios.
6. Estudio económico.
7. Mercados.
8. Necesidades y producción de divisas.
9. Justificación de calificación solicitada.

0. Identificación:

0.0. De la empresa española:

- 0.0.0. Forma jurídica.
- 0.0.1. Denominación.
- 0.0.2. Anagrama o sigla.
- 0.0.3. Domicilio.
- 0.0.4. Objeto social.
- 0.0.5. Capital social y reservas.
- 0.0.6. Memoria y balance, al menos, del último ejercicio económico. (Acompañese como anejo 1.)
- 0.0.7. Número de obreros y empleados.
- 0.0.8. Fábricas en funcionamiento y gama de producciones.

0.0.9. Cantidades y valoración de las producciones.

0.1. Del inversionista extranjero. (Especifíquese el concepto que corresponda, las memorias, balances, etc. se acompañarán como anejo 2.)

0.1.0. Español con residencia habitual en el extranjero; o

0.1.1. Persona física extranjera; o

0.1.2. Persona jurídica extranjera de naturaleza privada. Características.

0.2. Información sucinta y general sobre el negocio que se va a crear, ampliar o modernizar.

### 1. Localización proyectada:

1.0. Especificación.

1.1. Razones de la misma.

### 2. Tecnología de los procesos productivos:

2.0. Características técnicas del proyecto:

2.0.0. Presupuesto.

2.0.1. Planos de anteproyecto. (Acompáñese - como anejo 3.)

2.0.2. Diagrama del proceso de fabricación.

2.0.3. Plazo previsto para la puesta en marcha de las instalaciones.

2.1. Descripción tecnológica de los procesos. (Acompáñese como anejo 4.)

### 3. Aspectos laborales:

3.0. Estimación de los nuevos puestos de trabajo, inmediatos y futuros, a que dará lugar la creación, ampliación o modernización de la empresa española.

3.1. Especificación de los inmediatos (nacionales y extranjeros):

3.1.0. Personal directivo.

3.1.1. Personal administrativo.

3.1.2. Personal técnico titulado.

- 3.1.3. Mano de obra especializada.
- 3.1.4. Mano de obra no especializada.

4. Estructuración del capital futuro:

- 4.0. Capital que se estima necesario para la instalación y funcionamiento de la industria.
- 4.1. Estructuración aproximada:
  - 4.1.0. Capital fijo:
    - 4.1.0.0. Relación de maquinaria y -  
utillaje nacionales: caracte-  
rísticas y valoración.
    - 4.1.0.1. Otras partidas del capital -  
fijo.
  - 4.1.1. Capital circulante
- 4.2. Financiación prevista.
- 4.3. Origen:
  - 4.3.0. Creación de nueva empresa:
    - 4.3.0.0. Porcentaje y cuantía nacio-  
nales.
    - 4.3.0.1. Porcentaje y cuantía extran-  
jeros.
  - 4.3.1. Ampliación o modernización de empresa  
existente:
    - 4.3.1.0. Porcentaje y cuantía nacio-  
nales.
    - 4.3.1.1. Porcentaje y cuantía extran-  
jeros.
- 4.4. Modalidades de la aportación de capital ex-  
tranjero (art. 1 Decreto 2320/1959, de 24 de  
Diciembre:
  - 4.4.0. Divisas.
  - 4.4.1. Equipo capital para el funcionamiento  
de la empresa. Relación de maquinaria  
y utillaje extranjero, característi-  
cas, valoración y procedencia.
  - 4.4.2. Pesetas transferibles.
  - 4.4.3. Pesetas convertibles.
  - 4.4.4. Asistencia técnica, patentes y licen-  
cias de fabricación.

## 5. Suministros necesarios:

### 5.0. Estimación de las necesidades de energía: -

5.0.0. Electricidad.

5.0.1. Combustibles sólidos.

5.0.2. Combustibles líquidos.

### 5.1. Materias primas:

5.1.0. Nacionales: Relación detallada de -  
las necesidades anuales, cantidad  
y valoración. Separando, en caso -  
de ampliación, las que vienen utili-  
zando y las necesarias para la am  
pliación.

5.1.1. Extranjeras: Relación detallada de -  
las necesidades anuales, cantidad  
y valoración. Separando, en caso -  
de ampliación, las que vienen utili-  
zando y las necesarias para la am  
pliación.

### 5.2. Materias auxiliares:

5.2.0. Nacionales: Relación de las necesida-  
des anuales, cuantía y valoración.

5.2.1. Extranjeras: Relación de las necesi-  
dades anuales, cuantía, valoración  
y procedimiento, procedencia.

## 6. Estudio económico:

### 6.0. Producciones:

6.0.0. Creación de empresa. Capacidad de -  
producción de los principales pro-  
ductos, elementos o piezas de la -  
nueva industria:

6.0.0.0. en 300 jornadas de ocho -  
horas

6.0.0.1. en 300 jornadas de dos -  
turnos.

6.0.0.2. en funcionamiento conti-  
nuo.

6.0.1. Ampliación o modernización de empre-  
sa existente. Capacidad de produ-  
cción de los principales productos,  
elementos o piezas, separando la ya  
existente de la que se solicita:

- 6.0.1.0 En 300 jornadas de ocho - horas.
- 6.0.1.1. En 300 jornadas de dos - turnos.
- 6.0.1.2. En funcionamiento continuo.

6.1. Estimación del precio de coste, con especificación porcentual.

Cuando se trate de una gama de producciones, se hará sobre aquéllas que representen, al menos, un 75 por 100 del valor de la producción.

- 6.1.0. Coste de las materias primas.
- 6.1.1. Coste de la mano de obra.
- 6.1.2. Coste de los demás conceptos.

7. Mercados :

7.0. Estimación de la cifra de ventas de la - empresa:

7.0.0. Especificación por destino:

- 7.0.0.0. Nacional.
- 7.0.0.1. Extranjero.

7.1. Comparación de los precios de venta con - los precios internacionales equivalentes.

8. Necesidades y producción de divisas:

8.0. Salidas anuales de divisas:

- 8.0.0. Importaciones .....
- 8.0.1. Intereses y principal  
de créditos .....
- 8.0.2. Royalties .....
- 8.0.3. Asistencia técnica .....
- 8.0.4. Dividendos previstos .....

Total de pagos anuales pre-  
vistas

.....



**8.1. Entradas anuales en divisas:**

8.1.0. Exportaciones	.....
8.1.1. Otros conceptos	.....

Total de ingresos anuales previstos	<hr/> ..... <hr/>
--	-------------------

8.2. Saldo positivo o negativo	..... <hr/>
--------------------------------	-------------

**9. Justificación de la calificación solicitada:**

De especial importancia nos parece en este índice el número 8, equivalente a un presupuesto en divisas de la empresa, con el fin de comparar sus necesidades - en moneda extranjera y las cantidades de moneda extranjera que la misma proporcione, con el fin de estudiar la repercusión de la nueva empresa en nuestra Balanza de Pagos.

De esta solicitud y de la documentación que la misma exige se presentarán cinco ejemplares. La Comisión - Permanente de la Oficina de Coordinación y Programación Económica remitirá uno de dichos ejemplares a cada uno de los Ministerios competentes, quienes, en el plazo de dos meses, resolverán lo que proceda sobre las autorizaciones administrativas solicitadas. En el caso de denegación de la autorización administrativa, el Ministerio competente notificará directamente a los interesados la resolución adoptada, dando cuenta de la misma a la Oficina de Coordinación y -

Programación Económica. En caso contrario remitirá el expediente a la citada Oficina para su posterior tramitación y devolución, en su día, y a sus efectos al Ministerio interesado.

Vamos a resumir, a continuación, los diversos supuestos de la participación extranjera en las empresas nacionales y la tramitación a seguir para conseguir la misma:

1ª) Aportación en divisas en cuantía no superior al 50% del capital de la empresa:

Basta para ello la transferencia de estas divisas a España, su cesión al Instituto Español de Moneda Extranjera o su venta en Bolsa, y el ingreso del contravalor en pesetas en la empresa española. Puede otorgarse sin necesidad alguna de otro requisito la escritura notarial de constitución de sociedad y la inscripción en el Registro Mercantil.

2ª) Aportación de capital extranjero en divisas en cuantía superior al 50% del capital de la empresa:

Es necesario para ello efectuar una solicitud a través de la Presidencia del Gobierno, quien la elevará, una vez obtenido el informe de los Ministerios competentes, al Consejo de Ministros para su ulterior resolución.

3ª) Aportación en pesetas convertibles o transferibles en cuantía no superior al 50% del capital social:

Es necesario previamente obtener un certificado del - Instituto Español de Moneda Extranjera del que se - desprenda que dichas pesetas tienen la condición de - transferibles o de convertibles. Posteriormente, dichas pesetas son ingresadas sin necesidad de ninguna otra autorización en la empresa española, procediéndose - como en el caso del número 1º).

4º) Aportación de pesetas convertibles o transferibles en cuantía superior al 50% del capital social:

Después de haber obtenido el certificado del Instituto Español de Moneda Extranjera, a que hace referencia el número anterior, deberá presentarse la solicitud correspondiente en la Presidencia del Gobierno, - quien la elevará al Consejo de Ministros para su posterior resolución.

5º) Aportación a la empresa española del equipo capital de origen extranjero, así como de licencias de fabricación, asistencia técnica y patentes en cuantía no superior al 50% del capital social :

Debe presentarse para ello la oportuna solicitud con arreglo al formulario anterior en la Presidencia del Gobierno, la cual, después de haber dado traslado a - los Ministerios competentes para obtener las correspondientes autorizaciones administrativas, resolverá en el plazo de dos meses.

6ª) Aportación a la empresa española de equipo capital de origen extranjero, así como de licencias de fabricación, asistencia técnica y patentes en cuantía superior al 50% del capital social:

El peticionario deberá presentar la misma solicitud, a que se refiere el apartado anterior, ante la Presidencia del Gobierno quien, una vez obtenidas las autorizaciones administrativas competentes, remitirá el expediente para su resolución al Consejo de Ministros, efectuándose la notificación de la resolución que recaiga a los interesados a través del Consejo de Ministros.

7ª) Establecimiento del extranjero en España como comerciante individual:

A nuestro entender, este establecimiento no plantea problema alguno, pues el mismo debe efectuarse de conformidad con el art. 15 de nuestro Código de Comercio, Existe la obligación del extranjero de transferir el capital que vaya a invertir en su negocio en divisas libres cotizadas en España y, obtenida su autorización de trabajo de la Sección competente del Ministerio de Trabajo, matricularse en el epígrafe correspondiente de la Licencia Fiscal.

8a) Establecimiento del extranjero como industrial individual en España :

Este supuesto ya plantea algunas dudas por el hecho de hallarse limitada en principio la participación extranjera en empresas españolas a un 50% del capital social. Es lógico, pues, que intentando un industrial extranjero establecer por su propia cuenta en España una industria, deba solicitar la pertinente autorización del Consejo de Ministros, puesto - que el capital de la nueva industria se encontraría en un 100% en manos de extranjeros. A nuestro entender, aunque la legislación vigente no regula concretamente este caso, el extranjero debería presentar la correspondiente solicitud con arreglo al modelo anteriormente expuesto a la Presidencia del Gobierno para que ésta, una vez recabadas las autorizaciones administrativas de los Ministerios competentes (autorización para instalación de nueva industria, etc.) la elevase con su dictamen a la resolución superior del Consejo de Ministros. Huelga decir que el establecimiento de dicho industrial extranjero - en España podría efectuarse en cualquiera de las modalidades previstas por el art. 1 del Decreto de 24 de Diciembre de 1959, es decir divisas, pesetas transferibles o convertibles, equipo capital, asistencia técnica, patentes y licencias de fabricación.

Esta es la única solución que vemos viable a este punto que ha sido omitido por el legislador, pero que indudablemente puede presentarse.

No obstante, este supuesto crea un segundo problema. Por Decreto de 5 de Junio de 1960 las industrias inferiores en capital a Ptas. 2.000.000,-- no necesitan ya obtener la previa autorización administrativa del Ministerio de Industria de creación de nueva industria, bastando para ello que presenten en la Delegación de Industria los datos necesarios para su inscripción en el censo indus--  
trial. De este precepto se desprende que en el momento actual nuestra legislación considera a las industrias,-- cuyo capital sea inferior a Ptas. 2.000.000,--, como -- de pequeña importancia y que no necesitan, por lo tanto, una previa autorización administrativa. Interpretando ámpliamente este precepto, que en nada se refiere a la inversión extranjera, podría llegarse a la conclusión de que un industrial extranjero individual, con el fin de erigir una nueva industria en España, le bastaría -- simplemente aportar a la Delegación de Industria correspondiente los datos necesarios para su inscripción en el censo industrial, hallándose, de esta manera, automáticamente en posesión de la autorizavión correspondiente. Este es otro de los problemas que el actual conjunto de Decretos ha pasado por alto. A nuestro entender, -- puede que el pensamiento del legislador, aunque no lo haya visto claramente, haya sido éste de autorizar al

industrial individual extranjero a poseer estas pequeñas industrias, pues efectivamente no pueden tratarse igualmente a un taller de reparación de bicicletas y a una industria de laminación de acero. Problema es éste que deberá ser recogido en una futura Ley de inversiones de capital extranjero.

9ª) Sociedades extranjeras que establecen una delegación o sucursal en España:

Intimamente ligado con el caso anterior del industrial individual es el de la sociedad extranjera que establece una delegación o sucursal en España, posibilidad - prevista en el art. 21, párrafo último, de nuestro Código de Comercio y en el art. 88 del Reglamento vigente del Registro Mercantil de 14 de Diciembre de 1956.

Por motivos fiscales, esta forma de establecerse el extranjero en España había caído en desuso, pero no hay duda de que ello es posible y que incluso esta forma de establecimiento ha encontrado una nueva oportunidad en la actual Ley de Hidrocarburos,

Conforme al art. 88 del Reglamento del Registro Mercantil, las sociedades extranjeras que establezcan sucursales en territorio español, se inscribirán en el Registro Mercantil correspondiente, presentando a tales efectos, debidamente legalizados, además de sus Estatutos, las escrituras o actos de constitución de la sociedad y el certificado expedido por el Consul Español

de estar constituidas y autorizadas con arreglo a las Leyes de su país respectivo. Continua diciendo el citado artículo que en la inscripción primera de estas sociedades se harán constar las circunstancias exigidas para las españolas, según su clase que resulten de los documentos presentados, así como el nombre y apellidos de las personas que ejerzan la administración en España, las facultades que se les haya conferido y el capital que destinen a las operaciones que realicen en esta Nación en la moneda nacional de su país respectivo y su equivalencia en pesetas al tipo de cotización oficial.

No creemos que en la actualidad las empresas extranjeras, por los motivos fiscales del sistema de la cifra relativa de negocios, hecha excepción de las compañías dedicadas a la investigación de hidrocarburos (por gozar de un trato fiscal independiente), vayan a utilizar esta forma de establecimiento. Pero en el supuesto de que alguna empresa lo deseara así, somos de la opinión de que se dedica a una actividad industrial y, en todo caso, si el capital que emplea en sus operaciones es superior a Ptas. 2.000.000,--, deberá solicitar la oportuna autorización del Consejo de Ministros a través de la Oficina de Coordinación y Programación de la Presidencia del Gobierno.

Creemos haber expuesto las diversas modalidades, bajo las



que se puede plantear la inversión extranjera en las -  
empresas españolas con las soluciones que considera-  
mos viables para las mismas. No obstante, de lo expues-  
to se infiere la insuficiencia legislativa de que ado-  
lecemos aún para regular estas inversiones en una for-  
ma que resuelva todos los problemas planteados con el  
espíritu amplio y liberal que debe presidir el mundo -  
mercantil y de la industria.

## VII

### ADQUISICION POR EXTRANJEROS DE VALORES MOBILIARIOS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS.

Como consecuencia de la liberalización de las inversiones extranjeras en España por causa del Certeo-Ley de 27 de Julio de 1959, era lógico que el legislador pensase asimismo en una regulación de la adquisición por extranjeros de los títulos valores (títulos mobiliarios, como los llama la Ley) de empresas españolas, ya que la inversión generalmente se concreta en el acto jurídico de la suscripción o adquisición de un número determinado de acciones de una empresa española.

En la legislación antigua, y en virtud del art. 6 de la Ley de 24 de Noviembre de 1939, todos los títulos o acciones de empresas industriales españolas debían quedar divididos en dos grupos: uno, representando el 75% del capital social, iría estampillado con la inscripción "intransferible a extranjeros", mientras que el restante 25% de las acciones carecería de tal inscripción y podría ser, por tanto, vendida libremente a extranjeros.

Para estas adquisiciones era necesaria al mismo tiempo la autorización del Instituto Español de Moneda Extranjera, en virtud del art. 5, apartado m), del Decreto - de 24 de Noviembre de 1939, en relación con el art. 3 de la Ley Fundacional del Instituto Español de Moneda Extranjera de 25 de Agosto de 1939.

Por Orden de 24 de Diciembre de 1959, hoy derogada, se dió nueva regulación a la adquisición por parte de extranjeros de los valores mobiliarios de las sociedades españolas, basándose para ello la citada Orden en la conveniencia de extender el espíritu del Decreto-Ley - de 27 de Julio de 1959 a las inversiones que el capital extranjero pueda hacer para complementar el ahorro nacional mediante la adquisición de valores mobiliarios de sociedades españolas, concediendo una autorización general hasta el límite previsto del 50% del capital social, sin perjuicio de que el Consejo de Ministros pueda autorizar en casos concretos adquisiciones que rebasen dicho límite,

El citado Decreto, siguiendo la pauta de sus antecesores, a partir del 27 de Julio de 1959, equipara a los españoles con residencia habitual en el extranjero con los extranjeros y las personas jurídicas extranjeras - de naturaleza privada. Estableció en su art. 1 el derecho de dichas personas para adquirir libremente y -

mediante pesetas que procedan de la conversión de divisas extranjeras negociables en el mercado español o pesetas que tengan la consideración de convertibles, - cualesquiera acciones de sociedades españolas, con la única excepción de las sociedades de inversión mobiliaria que aún se encuentran pendientes de regulación y las relacionadas con la defensa nacional y la información pública, así como de prestación de servicios - públicos.

En este punto, la Orden de 24 de Diciembre de 1959 no hizo más que seguir la pauta de los arts. 2 y 10 del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959, así como de su - art. 3, al que también se refiere al tratar de las - empresas que continúan sometidas a su legislación especial, cuales son las de seguros, banca, hidrocarburos y navieras.

Como vemos, la Orden centró en su art. 1 el ámbito de la adquisición de valores mobiliarios, ateniéndose en un todo al texto fundamental de las inversiones extranjeras constituido por el Decreto-Ley tantas veces citado de 27 de Julio de 1959.

Lo mismo vino a hacer el art. 2 de la citada Orden que ratificó el límite general señalado para la inversión extranjera, que es principio el 50% del capital de - cada empresa española. El citado artículo estableció que para las acciones que en poder de un extranjero, de

una persona jurídica extranjera de naturaleza privada o de un español residente en el extranjero excedan del 50% del capital de las sociedades españolas, sería necesaria la previa autorización del Consejo de Ministros que habría de solicitarse de la Presidencia del Gobierno. La falta de dicha autorización comportaría, según dice el art. 2, la nulidad de las transmisiones efectuadas. Sobre este particular consideramos que la Orden Ministerial se ha excedido si comparamos su contenido con el art. 4 del Código Civil, según dijimos anteriormente. En efecto, es mucho más problemático si una Orden Ministerial puede declarar la nulidad de un acto perfectamente válido por sus requisitos en la esfera civil, simplemente, porque se haya omitido el trámite burocrático de la solicitud administrativa al Consejo de Ministros. A nuestro entender, se habría cometido una falta administrativa, pero la nulidad civil del acto no podría ser declarada por este motivo.

A continuación, el citado Decreto constituyó el sistema de estampillado de acciones o de títulos mobiliarios que había quedado suprimido al derogar el Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959 el art. 6 de la Ley de 24 de Noviembre de 1939. En lugar del estampillado se creó un registro especial de las acciones en poder de las personas naturales y jurídicas extranjeras, así como de las españolas que tuviesen en

el extranjero su residencia habitual. Dicho registro dependería conjuntamente del Instituto Español de Moneda Extranjera y de la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones. Los Notarios, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores de Comercio, estaban obligados a dar cuenta a dicho registro de las correspondientes operaciones que interviniesen, pudiendo el registro recabar cuanta información precisase de las sociedades españolas que tuviesen participación de capital extranjero de las entidades bancarias y, en general, de cualquier Organismo público y privado.

Con respecto al citado Registro, se dictó la Orden de 10 de Febrero de 1960, desarrollando el art. 2 de la Orden de 24 de Diciembre de 1959. Dicha Orden, así como el Registro, han sido derogados por la Orden de 15 de Marzo de 1962.

La citada Orden denominó al Registro que se creaba - "Registro Especial de Valores y Participaciones Industriales en poder de extranjeros", estableciendo - que se encontraría bajo la dependencia conjunta del Instituto Español de Moneda Extranjera y de la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones.

Ya sólo el título que se daba al citado Registro vuelve a suscitar la duda que nos planteamos en otra parte de esta obra, respecto a si la nueva legislación -

limita la inversión extranjera en toda clase de empresas o únicamente en las empresas de carácter industrial. La Orden que comentamos designaba al Registro como de valores y participaciones industriales, de lo que se infiere que las participaciones comerciales estaban exentas de dicho Registro, por hallarse en posesión y tenencia permitida libremente a los extranjeros sin limitación de cuantía. No obstante, el mismo texto del art. 1 de la Orden de 10 de Febrero de 1960 volvió a crear la confusión, al decir que el Registro tendría por misión anotar el movimiento de las acciones, obligaciones, participaciones y demás títulos de renta fija emitidos por sociedades españolas que hubiesen sido adquiridos o se adquiriesen por españoles con residencia habitual en el extranjero, por extranjeros, residiesen o no fuera de España, o por personas jurídicas extranjeras de naturaleza privada, mediante pesetas procedentes de la conversión de divisas extranjeras negociables en el Mercado español, o pesetas que tuviesen la consideración de convertibles. Nos hallamos, pues, nuevamente ante la incógnita, puesto que el texto de la citada Orden se refiere a toda clase de títulos, sin necesidad de que los mismos sean de sociedades industriales o de sociedades comerciales, mientras que el título, denominación del Registro, se refiere únicamente a las sociedades de tipo indus

trial. La duda continua en el aire, si bien creemos que nuestra interpretación de que las sociedades comerciales se encuentran exentas de limitación de participación de capital extranjero, es la justa en virtud de los motivos que ya expusimos en otra parte de este trabajo.

El art 2 de la citada Orden estableció la obligación para las sociedades españolas que tuviesen participación extranjera, al amparo de los arts. 5 y 6 ya derogados de la Ley de 24 de Noviembre de 1939, de enviar al Registro Especial, dentro del plazo de un mes, una relación por duplicado acerca de esta participación. Los plazos a que se refiere la Orden fueron prorrogados hasta el día 15 del mes de Abril de 1960, en cuya fecha todas las comunicaciones tenían que haber tenido entrada en el Registro Especial.

El art. 3 de la Orden que comentamos estableció la obligación de comunicar sus adquisiciones al Registro a las personas interesadas, es decir a las personas naturales y jurídicas extranjeras y a las españolas que tuviesen su residencia habitual en el extranjero.

Conforme al art. 4, los Organismos competentes para admitir inversiones de capital extranjero con destino a la modernización, ampliación o creación de empresas españolas (tales Organismos no pueden ser otros que la Presidencia del Gobierno) vendrían obligados, tan pronto como iniciasen el expediente ante



la Administración pública, a poner en conocimiento de la Oficina del Registro Especial la operación - que se proyectaba, sin perjuicio de que cuando el expediente fuese resuelto, y dentro del plazo de - ocho días a contar del siguiente día de la fecha - en que fuese notificado, se comunicase la concesión o desestimación de la autorización a la Oficina - del Registro.

El art. 5 de la citada Orden Ministerial ordenó - asimismo la inscripción de la concesión de crédi--tos tanto nacionales como extranjeros, a medio o - largo plazo, ya fuese mediante emisión de obliga--ciones o sin ella. Las empresas quedaban obligadas a efectuar la oportuna comunicación al Registro - dentro de los ocho días siguientes a la concesión del crédito o de la autorización para la emisión - de obligaciones. El motivo de este artículo fué - poder ejercer un control real acerca de si en so--ciedades con capital extranjero no se sobrepasaban los límites crediticios señalados por el art. 2 - del Decreto de 24 de Diciembre de 1959, al que ya hicimos referencia anteriormente.

Finalmente, en los arts. 6 y 7 se ordenó la obliga--toriedad, por parte de los Noatrios, Agentes de - Bolsa y Corredores de Comercio de efectuar la comp

nicación al citado Registro de toda transmisión u operación de compra-venta de valores industriales, bien fuesen acciones, participaciones u obligaciones o - cualesquiera otra clase de títulos de renta fija emitidos por sociedades españolas, en la que una o ambas partes fuesen extranjeros o españoles residentes en - el extranjero.

Asimismo se estableció la obligación del Banco de España, la Banca Oficial y la Banca privada de comunic- al Registro los depósitos de valores existentes - en la actualidad en sus cajas a favor de las citadas personas y a comunicar en el futuro al Registro, dentro del plazo de ocho días siguientes a la fecha de - su constitución, de los depósitos de valores que se constituyesen a nombre de las indicadas personas.

Sobre todo esta última obligación provocó duras críticas por parte del sector bancario, partiendo de la base de que tal comunicación constituía una violación del secreto bancario, cuyas consecuencias son muy difíciles de prever, en especial teniendo en cuenta - que el citado Registro, por ser accesible a los Organismos de la Administración, puede tener consecuencias de tipo fiscal y no puramente interno español, - sino también de tipo extranjero.

Finalmente, el art. 8 estableció la necesidad de la inscripción registral para hacer uso de los derechos reconocidos en los arts. 6 y 7 del Decreto-Ley de 27

de Julio de 1959, y en los apartados c) y d) del Decreto de 24 de Diciembre del mismo año, así como los números 3ª, 4ª y 5ª de la Orden de 24 de Diciembre de 1959.

El art. 9 ordenó a la Dirección General de Minas, a la de Cinematografía y Teatro y a la de Navegación que remitiesen en el plazo más breve a la Oficina del Registro Especial detalle de la legislación específica de las sociedades de su ramo, a los efectos del citado Registro.

La opinión que particularmente nos mereció este Registro no podía ser favorable por el hecho de representar una fiscalización completa de las adquisiciones de extranjeros que no estaba en consonancia con los modernos sistemas de inversiones.

Por otro lado, el Registro, en la manera en que quedó instituido, no servía tampoco de garantía para que los extranjeros no adquiriesen en ningún caso más del 50% del capital social de una empresa española, y ello porque era imposible de compaginar con la celeridad y rapidez típica de las operaciones de Bolsa.

Por otro lado, tanto la Orden de 24 de Diciembre de 1959 como la de 10 de Febrero de 1960, reguladora del Registro, no previeron la manera de solucionar los casos en que de buena fé se hubiese superado la

citada cuantía del 50% en la participación del capital social.

Pongamos el caso de que los títulos, concretamente las acciones, de una sociedad española gocen de predilección para el capital extranjero y que diversas personas extranjeras, independientemente y sin conocimiento las unas de las otras, ordenen comprar en Bolsa ciertas cantidades de estas acciones, las cuales consideradas individualmente en sí mismas no sobrepasan al 50% del capital social, pero que sumadas todas ellas sí que sobrepasan este porcentaje. Individualmente todas las adquisiciones en Bolsa serán válidas, siempre que se efectúen en las condiciones que señala la Ley, comprando por medio de divisas o de pesetas convertibles. Las adquisiciones tienen acceso al Registro y en un determinado momento el citado Registro constata que las adquisiciones de los extranjeros sobrepasan al citado 50% del capital social. El Registro únicamente podría tomar nota de esta situación de hecho, pero no podría hacer nada para rectificarla, puesto que las adquisiciones efectuadas por los distintos extranjeros en sí mismas consideradas, son completamente válidas con arreglo a la legislación vigente de inversiones de capital extranjero. Por otra parte el Registro y la legislación vigente carecen del instrumento jurídico a favor de la Administración para evitar que estas situa-

ciones se produzcan. De lo expuesto se desprende - que el Registro no era tampoco el instrumento adecuado para evitar que las adquisiciones extranjeras sobrepasasen el 50% del capital social de las sociedades españolas desde el momento en que sus acciones - puedan adquirirse en Bolsa con entera libertad. Hubiese sido, a estos efectos, bastante más efectivo - haber conservado el antiguo sistema de estampillado de acciones, que fué derogado por el Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959.

Por otro lado, el Registro pudo ocasionar graves perjuicios de tipo fiscal y monetario a los inversores extranjeros, y no precisamente por lo que respecta a nuestra legislación interna, ya que a estos efectos fiscales la simple adquisición de valores mobiliarios trae consigo la liquidación del Impuesto de Derechos Reales, por lo que la Hacienda Pública tiene conocimiento inmediato de la adquisición. El peligro se encontraba más bien en la legislación patria tanto fiscal como monetaria del extranjero adquirente, ya que las autoridades competentes de su país de origen podían, a través del citado Registro, adquirir datos - acerca de las inversiones de sus súbditos en España, de graves consecuencias tanto fiscales como de tipo monetario, en especial si el inversor extranjero había trasladado estos fondos a España para librarlos -

del gravamen fiscal en su país de origen, con omisión de la legislación monetaria de divisas existente en el mismo. La consecuencia es que la existencia del Registro frenada en bastantes casos las inversiones - de determinados extranjeros en nuestro país, provocando lo contrario del fin querido por el Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959. De lo expuesto se deduce que nigun beneficio o ventaja procuró el Registro a nuestra Administración y sí bastantes desventajas y peligros al inversor extranjero, por lo que su creación no pudo considerarse un acierto, sino todo lo contrario. Afortunadamente, dicho Registro fué suprimido por la Orden Ministerial de 15 de Marzo de 1962.

Volviendo a la Orden, ya derogada, que comentábamos - referente a la adquisición de valores mobiliarios españoles por parte de extranjeros y de españoles residentes en el extranjero de 24 de Diciembre de 1959, - el art. 3 de la misma establecía el derecho a la - transferencia al exterior de los dividendos legalmente adquiridos y repartidos por las sociedades, cuyas acciones hubiesen sido adquiridas por el extranjero hasta el total del 6% anual de las divisas utilizadas por el extranjero para la adquisición de los títulos, así como el derecho de transferencia al exterior del producto de las enajenaciones de estos títulos hasta el importe de las divisas utilizadas para la adquisición de los mismos. Estimábamos justo este último precepto, cuyo fin tenía por objeto evitar una posible -

especulación extranjera en nuestras Bolsas al ampa-  
ro de nuestra legislación de inversiones, ocasionán-  
donos con ello una pérdida de divisas, que es lo -  
contrario justamente de lo querido por el legisla-  
dor. El interés de la legislación actual estriba en  
que la inversión extranjera se efectúe a largo pla-  
zo y no con fines de especulación o de agio.

No obstante, el art. 4 establecía que dichos exce-  
sos en pesetas sobre los límites inmediatamente -  
transferibles al exterior en divisas podrían utili-  
zarse libremente en la adquisición de nuevas accio-  
nes, cuyos dividendos, pero únicamente los dividen-  
dos, podrían ser transferidos al exterior en cuan-  
tía del 6% anual.

Conforme al art. 5, el régimen establecido en la -  
Orden se aplicaba igualmente a las acciones adquiri-  
das mediante pesetas transferibles, quedando libre  
de limitación, conforme al art. 6, la participación  
de extranjeros en obligaciones u otros títulos de -  
renta fija que representasen deudas de sociedades -  
españolas.

Con posterioridad a las disposiciones que comentába-  
mos y movido el ánimo del legislador, de un lado -  
por los beneficios obtenidos por el programa espa-  
ñol de liberalización y por el saldo favorable de -  
nuestra Balanza de Pagos, y con el deseo de no fre-

nar en absoluto un proceso que se presentaba bajo tan favorables auspicios, se dictó la Orden de 15 de Marzo de 1962 relativa a la compra por extranjeros de valores mobiliarios españoles, a la derogación de la Orden de 24 de Diciembre de 1959 que comentamos anteriormente, y a la supresión del — también anteriormente comentado Registro Especial de Valores Españoles en poder de extranjeros.

La exposición de motivos de la citada Orden parte de la base de que la liberación económica emprendida por España al incorporarse a diversos organismos internacionales exigía revisar los preceptos en materia de transferencias, asimismo en la necesidad ineludible que tiene el Gobierno de conocer el censo de las inversiones extranjeras existentes en España, previendo, al mismo tiempo, la futura evolución de nuestra Balanza de Pagos, y finalmente en el hecho de que en las disposiciones anteriores, hoy derogadas, no se recogía la inversión del capital extranjero que adoptaba la forma de adquisición de títulos de la Deuda del Estado Español y de otros de carácter público.

Los principios fundamentales de la citada Orden — que comentaremos en detalle son sucintamente los siguientes:



- 1ª) Los extranjeros pueden comprar libremente toda clase de títulos españoles, incluidos los de - la Deuda del Estado o de cualesquiera otras - instituciones de Derecho Público.
- 2ª) La libre transferencia en divisas al exterior de los dividendos y de toda clase de beneficios incluso el producto de la venta de los derechos de suscripción que arrojen los citados títulos valores.
- 3ª) El derecho de transferencia a la vista asimismo en divisas y al exterior del producto de - las enajenaciones de los citados títulos valores.
- 4ª) La sustitución del antiguo Registro Especial de Valores y Participaciones Industriales en Poder de Extranjeros por un censo de carácter general e innominado en la Oficina de Estadística del - Ministerio de Comercio.

La opinión que nos merece la Orden Ministerial tiene que ser forzosamente favorable, pues la misma - representa un paso más en el camino de la liberali- zación de las inversiones extranjeras en España y de nuestra aproximación a las instituciones inter- nacionales, y en especial al Mercado Común Europeo.

Conforme al art. 1 de la citada Orden Ministerial, los españoles con residencia habitual en el extranjero, los extranjeros residan o no fuera de España y las personas jurídicas extranjeras de naturaleza privada, podrán adquirir libremente títulos mobiliarios de renta fija o variable previamente emitidos por empresas españolas, y títulos de la Deuda del Estado Español, de las Corporaciones locales y cualesquiera otros representativos de la deuda de entidades de Derecho Público. El pago del precio de estos valores deberá efectuarse en pesetas procedentes de la conversión de divisas extranjeras negociables en el mercado español o con pesetas convertibles.

Asimismo se establece una salvedad no tenida en cuenta por la legislación anterior relativa a las personas físicas extranjeras residentes en España, las cuales podrán realizar estas adquisiciones con pesetas interiores, pero en tal caso, como es lógico, no gozarán de los derechos de transferencia de beneficios y capitales que establece la citada Orden.

El art. 2 de la misma establece como limitación de la cantidad de títulos adquiridos por las personas antes citadas y con respecto a los de renta variable, el límite de que el porcentaje de adquisición no exceda del 50% del capital social de la empresa

española en que se realice la inversión. Si el inversor extranjero deseara adquirir un porcentaje mayor, - deberá solicitarlo del Consejo de Ministros a través - de la Presidencia del Gobierno en petición por quintuplicado.

Los arts. 3 y 4 de la citada Orden establecen los dos - derechos fundamentales del inversor extranjero en títu los valores españoles que hemos citado anteriormente, - es decir el derecho de transferencia al exterior en divisas y sin limitación cuantitativa alguna de los intereses, dividendos legalmente repartidos y beneficios, - incluso el producto de la venta de derechos de suscripción, y asimismo el derecho fundamental de transferencia a la vista al exterior del total importe de las enajenaciones sin limitación cuantitativa alguna.

No ocultamos que, a nuestro entender, el citado precepto encierra el peligro de que la especulación extranjera - acuda a nuestras Bolsas con estos fines, lo cual, a la larga, podría originar un perjuicio a nuestra Balanza - de Pagos por el hecho de haber adquirido personas residentes en el extranjero, a título especulativo, valores a bajo precio para su posterior venta en alza al cabo - de pocos meses, una vez obtenido un beneficio.

El hecho de que el legislador, que seguramente habrá - previsto esta contingencia y no obstante haya promulgado esta disposición, nos parece fundarse en que nuestra situación económica y comercial, así como la de nuestra -

Balanza de Pagos, es ya tan segura que ningún grave - perjuicio puede ocasionar esta total liberalización - de las transferencias.

O sea que el Gobierno parte de la base que en las actuales circunstancias nuestras reservas de divisas - son ya tan fuertes que pueden resistir sin grave merma incluso la posibilidad de una especulación extranjera en nuestras Bolsas.

Por otra parte, el hecho de esta liberalización de - las transferencias de los beneficios, los cuales, por otra parte, pueden ser muy superiores al 6 % anterior ya que no se trata únicamente de la transferencia al extranjero de los dividendos, por los motivos que exponaremos a continuación, nos hace creer que el legislador desea de esta manera traer con más fuerza al capital extranjero hacia nuestro mercado de títulos, obteniendo de esta manera nuevas inversiones con el consiguiente saldo en divisas. En efecto, este hecho se ha hecho ya sentir, pese al breve tiempo transcurrido desde la publicación de la Orden por medio del alza - inmediata de los valores en general en las Bolsas españolas. Volvemos al punto en que hacíamos hincapié - anteriormente respecto a que las transferencias de los dividendos pueden alcanzar porcentajes elevados. En efecto, normalmente las sociedades españolas no suelen arrojar dividendos superiores a un 6 % de su capital, 6 % del cual se descuenta previamente un 13 % en con-

cepto de Impuesto sobre las Rentas del Capital (antigua Tarifa 2ª de Utilidades). Ahora bien, las sociedades - suelen efectuar, como es de todo el mundo conocido, un reparto encubierto de dividendos por medio de las ampliaciones de capital al ofrecer a sus accionistas la suscripción preferente de las nuevas acciones a la par o gravadas con una prima relativamente pequeña, sabiendo que a los pocos días de la emisión dichas acciones suelen alcanzar en Bolsa poco más o menos el mismo valor que las acciones antiguas. Es decir que suscribiendo las ampliaciones de capital o vendiendo, en su caso, los derechos de suscripción, pueden obtenerse beneficios inmensamente superiores al 6 % oficial que se reparte en concepto de dividendos.

El art. 5 de la citada Orden suprime el antiguo Registro Especial de Valores y Participaciones Industriales en Poder de Extranjeros, cuya crítica efectuamos anteriormente. No podemos hacer otra cosa que felicitarnos de esta disposición, puesto que el Registro tenía varios y graves inconvenientes y, por otra parte, el único beneficio que del mismo obtenía el Gobierno era conocer, en cada momento, el estado de la inversión extranjera. Esto puede hacerlo ahora el Gobierno a través de la Oficina de Estadística del Ministerio de Comercio en una forma bastante más sencilla y guardando, por otra parte, los caracteres esenciales del secreto bancario, sin exponer al inversor extranjero a ninguno

de los riesgos que entrañaba el antiguo sistema.

Exige el art. 5 de la Orden que las adquisiciones de valores, a los que se refiere la Orden Ministerial que comentamos, deberán ser objeto de declaración en forma innombrada ante la Oficina de Estadística del Ministerio de Comercio. De esta manera, el Gobierno podrá conocer, en cada momento, el estado en que se encuentra la inversión extranjera, así como tendrá en manos el instrumento para prever la evolución de signo positivo o negativo de nuestra Balanza de Pagos.

Dado el carácter innominado de esta declaración, quedan exentas de la misma las operaciones de compra-venta entre personas residentes en el extranjero que se liquiden directamente en dichos países en divisas. Ello es lógico, puesto que las divisas para la primera adquisición extranjera ya han entrado en España, y el extranjero ha pagado en divisas el precio de su compra. Al cambiar ahora la titularidad de los valores de un extranjero a otro, ello no afecta en absoluto a la inversión extranjera, dada que la participación extraña en los valores mobiliarios será y continuará siendo exactamente la misma. Una dificultad de tipo jurídico formal se presenta en la venta de dichos títulos, no obstante, en el extranjero. Conforme a nuestra legislación, y en concreto al Decreto de 19 de Septiembre de 1936, dictado con el fin de poner coto a las expoliaciones de títulos efectuados durante nuestra Guerra de Liberación en la zona

marxista, la transmisión de títulos valores españoles - únicamente podrá efectuarse o en escritura pública ante Notario o por medio de póliza intervenida por Agente de Cambio y Bolsa o por Corredor de Comercio.

En la práctica, la transferencia en escritura pública - únicamente existe en las transferencias mortis causa, - debido a que en la venta de acciones ante un Notario en escritura pública se devenga el pago del Impuesto de Derechos Reales, Impuesto que no existe en el caso de la transferencia efectuada en póliza intervenida por Agente de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio. Se nos plantea el problema de si la transferencia de títulos - españoles al portador hecha en el extranjero con arreglo a la legislación formal del país en que la operación se efectúa es válida en España o si, por el contrario, - dichas transmisiones deberán, en todo caso, efectuarse mediante la intervención de un Agente de Cambio y Bolsa o mediador de comercio extranjero, debidamente autorizado para estos actos.

A nuestro entender, y para mayor seguridad, creemos que sería aconsejable en tales operaciones en todo caso la intervención de la correspondiente póliza por un mediador extranjero debidamente autorizado y efectuar la legalización de la operación o, al menos, la firma del Agente mediador por el Cónsul de España correspondiente, con el fin de que surta los efectos necesarios en España.

Conforme al art. 5 de la Orden Ministerial que comentamos, el principal obligado a efectuar la declaración es el propietario de títulos, pero se sobreentiende - que si el mismo los ha depositado en una entidad bancaria, delega la obligación de declaración en dicha entidad, a menos que haga uso de su derecho de formularla directamente.

La Orden Ministerial contiene tres anexos que constituyen los modelos con arreglo a los cuales deberá efectuarse la declaración, ya sea por el propietario de los títulos, por el Banco depositario o por los Notarios, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores colegiados de Comercio, que intervengan la operación, los cuales quedarán obligados a dar cuenta de cualquier operación de las comprendidas en esta Orden Ministerial dentro - del plazo de 48 horas.

Finalmente, el art. 7 de la citada Orden excluye, siguiendo la pauta de la anterior legislación, de su aplicación a los títulos mobiliarios de renta variable de las empresas españolas a que se refieren los arts. 2, 3 y 10 del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959. Dichas empresas son las que ya citamos anteriormente en esta tesis y las cuales continúan rigiéndose por su legislación especial debido a la importancia que tienen para la industria y defensa para la Nación.



Conforme al art. 8, los derechos reconocidos en la presente disposición son aplicables a las adquisiciones - de títulos mobiliarios españoles que previamente estuviesen en circulación, realizadas a partir del 28 de - Julio de 1959.

El art. 9 contiene la cláusula derogatoria de las Ordenes Ministeriales de 24 de Diciembre de 1959 y 10 de - Febrero de 1960.

Finalmente, la Orden Ministerial que comentamos podía plantear el problema de si la libre transferencia de - beneficios, así como del producto de las enajenaciones era aplicable a toda clase de títulos valores españoles en propiedad de extranjeros con independencia de - la manera de adquisición, es decir que estos beneficios existiesen también en el caso de nueva constitución de sociedad o de suscripción directa de las acciones.

Consultada sobre este particular la Presidencia del Gobierno, la misma ha interpretado la Orden Ministerial en el sentido de que sólo es aplicable a la compra mediante divisas o pesetas convertibles de títulos valores ya existentes y que, por lo tanto, no gozarán de - los beneficios de esta Orden las suscripciones o las - adquisiciones de títulos mediante aportaciones en especie, las cuales seguirán rigiéndose por lo dispuesto - en el Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959.

## VIII

### EMPRESAS QUE DISFRUTAN DE UNA LEGISLACION ESPECIAL.

El art. 3 del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959 excluía de su régimen a las empresas mineras extractivas, a las empresas cinematográficas, a las dedicadas a la investigación y explotación de hidrocarburos, a las de banca, las de seguros y las navieras, las cuales únicamente se registrarán por el Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959 en lo no previsto por su legislación especial, a la que continuarán sometidas.

A continuación, estudiaremos por separado la legislación referente a la inversión extranjera en cada uno de estos grupos de empresas que poseen un fuero especial.

#### 1ª) Empresas mineras.

El texto fundamental para las empresas mineras se encuentra contenido en la Ley de Minas de 19 de Julio de 1944 y en el Reglamento General para el Régimen de la Minería de 9 de Agosto de 1948. Conforme a estos cita-

dos textos legales, son objeto de la presente Ley de Minas todas las substancias minerales, orgánicas e inorgánicas, cualesquiera que sea su estado físico, su origen y la forma del yacimiento, cuya explotación requiere la práctica de trabajos con arreglo a la técnica minera. - Continúa diciendo la Ley que dichas substancias son bienes de la Nación que el Estado podrá explotar directamente o ceder su explotación a españoles o sociedades y otras personas jurídicas legalmente constituidas y domiciliadas en España.

Ya se desprende del art. 2 de la Ley que la explotación de las minas únicamente puede ser cedida a españoles, - en el caso de que el Estado no quiera explotarlas por sí mismo. El sistema de la Ley se basa sobre el principio de que todos los yacimientos son propiedad del Estado - (la Nación, como dice la Ley, conteniendo un error de terminología jurídica), y que, por lo tanto, es éste el único que puede ceder su aprovechamiento a los particulares.

El art. 9 de la Ley trata especialmente de la posibilidad de inversión extranjera en las empresas mineras, estableciendo, con arreglo a la mentalidad que regía en - el momento de la promulgación de la Ley, el hecho de - que el permiso únicamente puede concederse a aquellas - personas físicas que justifiquen ser españoles y estar en el pleno uso de sus derechos civiles. Queda, por lo

tanto, automática y totalmente eliminada, en virtud de un precepto legal, cualquiera tenencia por parte de una persona corporal extranjera de una mina o yacimiento - en España.

Continua diciendo el citado artículo que en el caso de tratarse de sociedades, las mismas deberán estar constituidas y domiciliadas en España y ser propiedad de - españoles el 75% de su capital como mínimo, cualquiera que sea la forma jurídica de la entidad peticionaria. El 75 % del capital de las sociedades mineras de toda clase será intransferible a extranjeros, condición que se cumplirá y acreditará mediante el estampillado de - sus acciones cuando aquél esté representado por dicha - clase de títulos.

La Ley base, no obstante, en el mismo artículo la sal-- vedad de que por excepción, cuando lo acuerde el inte-- rés nacional, y mediante acuerdo adoptado por el Conse-- jo de Ministros, podrá autorizarse que pertenezca a ex-- tranjeros el capital de las sociedades mineras en pro-- porción mayor a la señalada, pero en cualquier caso de-- berá pertenecer a españoles, al menos, el 51 % de di-- cho capital.

A continuación, La Ley, siguiendo en todo la pauta - del sistema de los arts. 5 y 6 de la derogada Ley de 24 de Noviembre, establece que los Directores, así -

técnicos como administrativos, Gerentes y, en general, los administradores y apoderados legales, habrán de ser españoles, permitiendo, no obstante, que en las Sociedades Anónimas puedan ser extranjeros, en proporción al capital suscrito, hasta una cuarta parte de los Consejeros, pero la Presidencia del Consejo y los cargos directivos en todo momento han de recaer en quienes tengan la nacionalidad española.

En el caso de minerales de especial interés para la defensa nacional, el Gobierno, mediante acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, podrá exigir de la entidad que solicite un permiso de investigación minera la justificación de que la totalidad de su capital social pertenece a españoles y que tanto el personal directivo como el pleno del Consejo de Administración está integrado por españoles.

En el mismo sentido se produce el art.30 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 9 de Agosto de 1946, que se limita a transcribir el art.9 de la Ley antes citada, estableciendo, como única salvedad reglamentaria, que en las compañías mercantiles, cuyo capital no esté representado por acciones, es decir en todas aquellas que no revistan la forma de Sociedades Anónimas, los Estatutos o escrituras de constitución deberán contener una cláusula que limite la participación extranjera al 25 % citado.

Según se desprende de los preceptos legales anteriormente expuestos, nuestra legislación minera sigue en un todo, y casi textualmente, las directrices de la derogada Ley de 24 de Noviembre de 1939, siendo en algunos puntos incluso más rigurosa que ella. En efecto, - comienza limitando la participación extranjera en las sociedades mineras a un 25% en principio, la cual únicamente, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, - puede ser elevada hasta el 49 %. Se ve claramente que la Ley Minera es más severa que la de Ordenación y Defensa de la Industria, puesto que el art. 7 de esta - última permitía la posibilidad, previo acuerdo del Consejo de Ministros, hasta incluso de una mayoría extranjera, mientras que la Ley de Minas y el Reglamento - fija como último tope el 49 %. Los preceptos relativos a la distribución de asientos de los Consejos de Administración, a los cargos directivos y a aquellas empresas que extraigan minerales de interés para la defensa nacional, son prácticamente una copia de los arts. 5 y 6 de la Ley de 24 de Noviembre de 1939.

Desaparecidas las circunstancias que aconsejaron en - su día la Ley de 24 de Noviembre de 1939, no encontramos acertado el que nuestra actual legislación de inversiones extranjeras haya mantenido en todo su vigor los arts. 9 de la Ley de Minas y 30 de su Reglamento. Es cierto que las empresas extractivas son normalmente de

gran importancia para la Nación, y que por esto, y en especial teniendo en cuenta que son concesiones otorgadas por el Estado, debe el mismo cuidar acerca de si - sus propietarios las explotan de tal manera que redunden en interés común, es decir en beneficio de toda la Nación.

Pero de esto ya se ocupan los demás artículos de la - Ley de Minas y de su Reglamento, obligando a los concesionarios a presentar los planos de labores y a no interrumpir los trabajos de la concesión so pena de caducidad de la misma. Por este motivo, no veríamos inconveniente alguno en que los extranjeros pudiesen ejercer también la industria minera en las condiciones del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959 y disposiciones concordantes, en especial habiéndose publicado entretanto la Ley de 26 de Diciembre de 1958 sobre el Régimen Jurídico de Investigación y Explotación de Hidrocarburos al fin y al cabo hoy en día una de las ramas más importantes de la industria minera, permitiéndose en ella - la libre participación de los extranjeros.

Por otra parte, si alguna industria española está necesitada en mayor grado de inversiones extranjeras para racionalizar la explotación y obtener extracciones rentables, es la industria minera. Además, según los informes geológicos más recientes, una gran parte de la riqueza de nuestro subsuelo se encuentra completamente

sin explotar. La industria minera constituye una de -  
las llamadas industrias básicas, conforme a nuestro -  
Programa de Ordenación de las Inversiones, es decir de  
aquéllas que son fundamentales en el funcionamiento  $\varphi$   
de todas las demás, motivo por el cual debe existir el  
máximo interés en su desarrollo y rendimiento.

Y aquí llegamos al fondo del problema, por el cual -  
nuestras explotaciones mineras se encuentran aún en es-  
tado de atraso. Sabido es que la industria minera encie-  
rra en sí un riesgo grande. Es prácticamente en el mun-  
do industrial un juego de azar, con el que se pueden -  
obtener grandes beneficios, pero que asimismo puede oca-  
sionar grandes pérdidas. Minas que se encontraban en -  
perfecta explotación han quedado repentinamente agota-  
das un día sin producir nada más. Un filón que se creía  
rico y en el cual se efectuaron grandes inversiones -  
puede asimismo desaparecer o agotarse repentinamente.-  
Las fluctuaciones de los precios de los minerales en -  
el mercado internacional influyen también grandemente  
en el proceso. Sabido es que el capitalista español, -  
en especial el pequeño, siente una cierta aversión por  
toda clase de operaciones que envuelven riesgo. Para  
él lo preferible es la hipoteca sobre una finca que -  
tenga un valor muy superior a la cantidad que presta -  
sobre la misma. De allí que sea muchas veces el capi-  
tal extranjero quien acuda, quizás por contar con ma-



yores reservas, a la industria minera, corriendo todos los riesgos que la misma encierra. Otra solución sería la explotación directa por el Estado, pero es sabido - que las empresas estatales nunca son económicamente - rentables, sino que, por el contrario, suelen significar un gravamen anual en el presupuesto, que en definitiva repercute sobre todos los contribuyentes.

Por los motivos expuestos, no creemos acertado el mantener en vigor los anticuados preceptos contenidos en el art.9 de la Ley de Minas y art. 30 de su Reglamento, - y confiamos que al dictarse la esperada Ley de Inversiones Extranjeras se tenga en cuenta este punto, sobre todo partiendo del antecedente de que en el ámbito de los hidrocarburos se permite una libre participación extranjera.

2ª) Empresas dedicadas a la investigación y explotación de hidrocarburos.

Con fecha 26 de Diciembre de 1958, y como primera excepción en la moderna legislación española a las restricciones frente al capital extranjero, se promulgó - la actual Ley de Régimen Jurídico de Investigación y - Explotación de Hidrocarburos. Posteriormente, con fecha 12 de Junio de 1959 se promulgó el Reglamento para la ejecución de la citada Ley. El objeto de la misma - es, según dice su art. 1, la investigación y explota-

ción de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, contando, a continuación, el antiguo principio de la vigencia en nuestro Derecho de que dichos yacimientos constituyen patrimonio inalienable e imprescriptible de la Nación. Una de las novedades más importantes de la presente Ley, aparte de la de separar el Régimen Jurídico de los Hidrocarburos del Derecho Minero en general, es de admitir la aportación de capitales extranjeros sin limitación alguna, para lo cual hay que tener en cuenta que en la fecha de su promulgación aún se encontraba vigente la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria de 24 de Noviembre de 1939.

La justificación de esta libertad de aportación de capitales extranjeros, como dice la exposición de motivos, es el asegurar la importación de equipos y elementos especiales, aprovechando la experiencia y organizaciones técnicas de entidades solventes extranjeras dedicadas a la investigación y explotación de los hidrocarburos, regulando asimismo todo lo referente a la disponibilidad, transferencia y convertibilidad de divisas.

a) Hay que tener en cuenta que la Ley de Hidrocarburos que nos ocupa debe ser considerada como una Ley en la que se han tenido en cuenta los más modernos principios relativos a la inversión extranjera, con el fin de aprovechar la misma hasta el máximo y hacer -

asimismo apetecible el trabajo en España a las sociedades extranjeras dedicadas a estas actividades. La Ley establece la posibilidad de participación extranjera - en su art. 3, similar, en su principio, con el 9 de la Ley de Minas, si bien sin limitación alguna frente a la inversión extranjera. Dice dicho artículo que el Estado español podrá realizar por sí mismo todas las actividades de prospección, investigación, explotación, almacenamiento y refino de hidrocarburos y su transporte por oleoductos y otras vías especiales, y podrá también otorgar concesiones o autorizaciones para estos fines a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en las condiciones que se establecen en esta Ley. Queda, pues, sentado el principio de igualdad entre empresas nacionales y extranjeras a los efectos de la prospección y explotación de los hidrocarburos.

El art. 7, y teniendo en cuenta que la Ley de Hidrocarburos fué promulgada en plena vigencia de la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria, plantea algunos problemas en relación con la situación legislativa actualmente vigente a partir de la promulgación del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959. En efecto, el art. 7 de la Ley de Régimen Jurídico de Investigación y Explotación de los Hidrocarburos libera a las sociedades o personas jurídicas de las licitaciones que establecen

los apartados a), b) y c) del art. 5 y el art. 6 de la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria de 24 de -  
Noviembre de 1939, así como de las restricciones de -  
los arts. 9 y 53 de la Ley de Minas de 19 de Julio de  
1944, salvo la obligación de efectuar la aportación de  
capital extranjero en divisas o maquinaria y equipos -  
que precisen para su actividad y no sea posible obte-  
ner en España en condiciones satisfactorias.

El problema que se nos plantea es que la Ley ha libera-  
do a las sociedades de las restricciones de los aparta-  
dos a), b) y c) del art. 5 de la Ley de 24 de Noviem-  
bre de 1939, pero no, en cambio, de las restricciones  
del apartado d) del mismo art. 5, conforme al cual los  
Directores, así técnicos como administrativos, Geren-  
tes y, en general, los administradores o apoderados le-  
gales habrán de ser españoles, admitiéndose en las So-  
ciedades Anónimas hasta una cuarta parte de los Conseje-  
ros extranjeros en proporción al capital suscrito, -  
siempre que la Presidencia del Consejo y los cargos di-  
rectivos, en todo momento, recaigan en quienes tengan -  
la nacionalidad española.

O sea que el inversor extranjero puede aportar libre-  
mente su capital para la investigación y explotación  
de hidrocarburos y, sin embargo, no puede ocupar car-  
gos directivos, ni más de una cuarta parte de los Con-

sejeros que integren los Consejos de Administración de las Sociedades Anónimas. En primer lugar, el permitir en una Sociedad Anónima una libre aportación de capital extranjero y posteriormente limitar el número de los Consejeros, significa una contradicción con el art. 71 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas de 17 de Julio de 1951, que parte del principio de elección del Consejo por la Junta General y de representación proporcional en el Consejo del capital representado en la Junta General. No otra cosa significa la agrupación de acciones para el nombramiento del Consejo de Administración.

Por otra parte, es lógico que la sociedad extranjera - que aporte capitales y equipo en cifras de la elevación necesaria para desarrollar un programa de investigación de hidrocarburos, quiera estar lógicamente representada en la Dirección de la misma, pues, en definitiva, son muy grandes los intereses económicos que ventila. La práctica nos ha enseñado, incluso durante el tiempo de vigencia de la Ley de 24 de Noviembre de 1939, por lo que respecta al régimen de los hidrocarburos, que las empresas concesionarias de permisos de investigación han hecho caso omiso del apartado d) del art. 5 de la Ley de 24 de Noviembre de 1939, no habiéndoles sido puestas dificultades algunas por parte de las Autoridades competentes, en su caso el Servicio -

de Hidrocarburos del Ministerio de Industria, por el nombramiento de personal directivo tanto de carácter técnico como administrativo. Se plantea el problema, que asimismo se nos presentará en otras especialidades posteriores, de si al derogarse los arts. 5 y 6 de la Ley de 24 de Noviembre de 1939 quedan automáticamente derogados también, a efectos de la Ley de Hidrocarburos. Nosotros creemos que sí, pues una vez derogado el citado artículo, es lógico que ya no pueda tener aplicación a ninguna otra clase de actividades, ni tan siquiera a aquéllas que se rigen por leyes especiales, y creemos, por lo tanto, que en virtud de la promulgación del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959 automáticamente los cargos directivos de las empresas dedicadas a la investigación de hidrocarburos pueden hallarse ocupados por extranjeros.

En cambio, sí que debe considerarse en vigor el art.10 del Reglamento para aplicación de la Ley del Régimen Jurídico de Investigación y Explotación de los Hidrocarburos de 12 de Junio de 1959, conforme al cual las solicitudes que se presenten en el Servicio de Hidrocarburos del Ministerio de Industria de permisos de investigación deberán ir firmadas por el interesado en extranjero o por un representante suyo de nacionalidad española.

Asimismo, el último párrafo del art. 9 habla en el mismo sentido de un apoderado español legalmente autorizado, o sea que con independencia de los cargos directivos de las sociedades con capital extranjero, destinadas a la investigación y explotación de hidrocarburos, para todos los contactos con la Administración española, y en especial para las solicitudes de permisos de investigación o concesiones de explotación, así como - para todas las notificaciones y actos administrativos referentes a los mismos, será necesaria la intervención de un Apoderado de nacionalidad española. Consideramos que la necesidad del nombramiento de este apoderado no es otra que el deseo de la Administración de poder entenderse con un connacional en todos los asuntos relacionados con la tramitación de los permisos, pero sin que el nombramiento de este apoderado obstaculice, en absoluto, la gestión directiva de la empresa.

El art. 8 de la Ley establece el principio de que las personas naturales o jurídicas extranjeras que deseen acogerse a la Ley, vendrán obligadas, antes de solicitar un permiso de investigación, a constituir una sociedad española o domiciliada en España que podrá ser también de nacionalidad extranjera. Este precepto ha sido ampliado por el art. 16 del Reglamento de 12 de Junio de 1959, conforme al cual, cuando se trate de personas naturales o jurídicas extranjeras, deberán -

justificar que han constituido previamente una sociedad española o una sociedad extranjera con domicilio en territorio español para los efectos de la Ley de Hidrocarburos, cuyo objeto será precisamente el desarrollo de las actividades resultantes de los permisos que eventualmente pueda obtener.

El último párrafo del art. 8 de la Ley suscitaba la duda de qué se entendía por una sociedad domiciliada en España de nacionalidad extranjera, duda que viene a resolver el segundo párrafo del art. 16 del Reglamento, al exponer que en el caso de que la sociedad a que se hace referencia esté constituida en el extranjero, deberá establecer una sucursal en España para los fines de la Ley de Hidrocarburos, la cual se inscribirá en el Registro Mercantil, según lo dispuesto en el art. 21 del Código de Comercio y art. 84 y 88 del Reglamento del Registro Mercantil.

En los citados preceptos se fija la documentación que deben presentar las sociedades extranjeras que quieren establecer sucursales en territorio español para su inscripción en el Registro Mercantil, la cual es la siguiente: Estatutos, escritura o actos de constitución social, y el certificado expedido por el Consulado Español de estar constituidas y autorizadas con arreglo a las Leyes del país respectivo.



En la inscripción de dichas sociedades, el Registrador deberá hacer constar, aparte de las circunstancias exigidas para las sociedades españolas (art. 86 del Reglamento del Registro Mercantil) el nombre y apellidos de las personas que ejerzan la administración en España, las facultades que se les haya conferido y el capital que destinen a las operaciones que realicen en esta Nación en la moneda nacional de su país respectivo y su equivalencia en pesetas al tipo de cotización oficial.

Los preceptos anteriores han venido a revivir la forma que tratamos en otro capítulo del establecimiento del extranjero en España por medio de la apertura de una sucursal o delegación inscribible en el Registro Mercantil. Estas sucursales tenían un gran inconveniente a efectos fiscales en virtud del principio de la cifra relativa de negocios, seguido por nuestro Derecho Fiscal con respecto a la tributación de las sociedades extranjeras, las cuales venían obligadas a tributar incluso si en España no habían obtenido beneficios, siempre que los hubiesen obtenido en su casa matriz o en alguna otra delegación.

Por ello, esta forma de establecimiento del extranjero en España había sido abandonada a lo largo del tiempo, no haciéndose uso apenas de la misma. No obstante, como la Ley de Hidrocarburos establece un sistema especial de tributación de las sociedades dedicadas a es-

tas actividades, que únicamente entra en vigor en caso de descubrimiento de hidrocarburos en cantidades comerciales, varias sociedades dedicadas a este ramo de actividades se han establecido en España, utilizando esta forma.

En cuenta a las restantes limitaciones de la Ley con respecto al capital extranjero, es interesante su art. 9, al que consideramos completamente justo en toda su extensión. El mismo prohíbe a los Estados o Gobiernos extranjeros, así como a las sociedades o entidades que dependan financieramente de ellos en tal proporción - que posean más del tercio de los votos efectivos del Consejo de Administración y Junta General de Accionistas, el solicitar, poseer ni adquirir los permisos y concesiones de hidrocarburos, sea directa o indirectamente o por persona natural o jurídica interpuesta.

El precepto es justo y necesario, pues así como no consideramos de gran importancia que las concesiones de hidrocarburos se encuentren en manos de extranjeros particulares, el problema puede resultar peligroso si es un Gobierno extranjero el titular de las concesiones, por el roce inevitable de dos soberanías en una esfera económica de tamaño importancia.

b) Régimen monetario del concesionario extranjero en el ámbito de la Ley de Hidrocarburos.

Habiendo permitido la Ley la aportación de capital extranjero sin limitación alguna para la investigación y explotación de hidrocarburos, resultaba lógico que la misma regulase con toda pulcritud el tratamiento monetario de estos capitales, ya que el extranjero desea normalmente poder repatriar los beneficios que obtiene en su explotación o, al menos, una parte de ellos. Se trata, pues, en la Ley de hacer apetecible al extranjero la inversión de su capital en España para la investigación y explotación de los hidrocarburos líquidos y gaseosos.

La Ley establece para ello, en primer lugar, en su art. 49 que el concesionario extranjero deberá convertir en moneda nacional las divisas necesarias para cubrir los gastos en pesetas resultantes del ejercicio de sus actividades en España. De este precepto se desprende que el concesionario extranjero no podrá, en principio, acudir al crédito nacional. El fin de la Ley es que el extranjero, al recibir una concesión para la explotación de hidrocarburos en España la financie con sus propios medios traídos del extranjero y no con medios nacionales que harían ilusoria la ventaja de la aportación del capital extranjero.

El mismo artículo de la Ley hace, no obstante, la salvedad que en el caso de sociedades con participación de capital extranjero, esta obligación se limitará a -

las divisas necesarias para complementar las disponibilidades en moneda nacional. En realidad, esta segunda parte del art. 49 de la Ley sobra, pues lo normal, tratándose de la investigación y explotación de hidrocarburos en el caso de una sociedad mixta entre extranjeros y españoles, y lo lógico es que el extranjero aporte las instalaciones de sondeo, equipos geológicos y demás utillaje que no pueda obtenerse en la producción española, así como su asistencia y experiencia técnica, mientras que los socios españoles aporten el capital - en pesetas para cubrir los gastos continuos de la investigación o explotación.

El mismo artículo continua diciendo que las conversiones de las divisas del concesionario extranjero en pesetas se efectuarán por medio de las instituciones bancarias autorizadas al efecto y a los tipos de cambio oficialmente vigentes (art. 49 en relación con el 53 de la Ley).

Para el caso del descubrimiento de un yacimiento de hidrocarburos en cantidades comerciales, la Ley prevé el destino que el concesionario extranjero puede dar a sus beneficios obtenidos en pesetas de la concesión. - Conforme al art. 50, podrá dedicar la cantidad necesaria de los fondos en moneda nacional procedente de las ventas de sus productos (hidrocarburos líquidos y gaseos) a cubrir la totalidad de sus gastos en esta mo-

nada. O sea que en el caso de una explotación, el concesionario extranjero podrá satisfacer todas sus obligaciones en España en pesetas obtenidas de la venta de los hidrocarburos que haya descubierto, y únicamente en el caso de que dichos beneficios en pesetas que obtenga no sean suficientes, se verá obligado a aportar nuevas cantidades de divisas, conforme al art. 49 de la Ley.

En el caso de que, por el contrario, sus ingresos en moneda nacional como consecuencia de la venta de los hidrocarburos excedan del importe total de sus gastos, incluidos los impuestos, tendrá derecho a retransferir el exceso o diferencia a su país de origen o a convertirlo en moneda extranjera en la forma que se regula en el art. 51 de la Ley para el concesionario totalmente extranjero y en el art. 52 para las sociedades con capital mixto nacional y extranjero.

En el caso de un concesionario totalmente extranjero, la conversión en divisas de la diferencia entre sus gastos en España y el producto obtenido de la venta de los hidrocarburos de su concesión, se efectuará en la siguiente forma:

- 1º) En primer lugar, dicho concesionario tendrá derecho a convertir la cantidad equivalente a las divisas extranjeras para el pago de los equipos, mate-

riales y suministros que, sin tener el carácter de bienes de capital, haya tenido que importar por no ser posible obtenerlos en España en condiciones satisfactorias, así como las divisas necesarias para el pago de salarios extranjeros, servicios técnicos, licencias, regalías y otras obligaciones que tengan el carácter de gastos de explotación y de**ba**nan ser satisfechos en moneda extranjera. El deseo de la Ley es, pues, que el concesionario extranjero pueda, en primer lugar, satisfacer aquellas -- obligaciones pagaderas en divisas que deban considerarse como gastos de explotación y que, por lo tanto, hayan constituido la base para el alumbramiento y aprovechamiento de los hidrocarburos.

2<sup>a</sup>) El exceso de fondos del concesionario en moneda nacional, una vez cubiertas las atenciones anteriormente expuestas, consistentes en los gastos de explotación, podrá ser convertido en divisas en las siguientes condiciones:

a) Durante los 10 primeros años este derecho de - convertibilidad de los excesos quedará limitado, como máximo, al 20 % del valor de la producción bruta, debiendo ser destinado por el concesionario, en primer término, a amortizar las inversiones en moneda extranjera distintas a las anteriormente citadas, o sea a la amortización de

los bienes de capital que haya aportado. En segundo lugar, podrá utilizar esta conversión para transferir sus beneficios, en el caso de -- que los hubiese obtenido.

- b) Después del transcurso de estos 10 años, podrá convertir el concesionario extranjero la totalidad de su exceso de fondos en moneda nacional, hasta completar todas las amortizaciones y la transferencia de beneficios que le hayan quedado pendientes hasta esta fecha.
- c) En el momento en que no queden pendientes ni - amortizaciones ni beneficios sin convertir de ejercicios anteriores, la convertibilidad quedará limitada a la parte de utilidad líquida - correspondiente al concesionario extranjero en el ejercicio económico de que se trate.

La Ley en su art, 42, al tratar de la tributación de las empresas dedicadas a la investigación y explotación de hidrocarburos, considera deducibles, entre - otros, de los ingresos brutos para la obtención de - los netos una deducción en concepto de factor de agotamiento con respecto a las áreas de explotación, cuya cuantía para el respectivo ejercicio será la más - reducida de las dos siguientes:

- a) El 25 % de la cifra obtenida al deducir del valor

en el capital petrolífero de los hidrocarburos producidos y vendidos o entregados al Gobierno el importe del anticipo que corresponde a los mismos en concepto de cuota mínima.

- b) El 40 % del beneficio neto obtenido por la empresa, antes de deducir el concepto de factor de agotamiento presente.

Estas cantidades procedentes del factor de agotamiento únicamente podrán ser convertidas de acuerdo con el apartado d) del art. 43 de la Ley en la forma anteriormente expuesta, ya que estos fondos deberán ser llevados a una cuenta especial para su inversión en las actividades que el concesionario extranjero desarrolle en España. En el momento en que dicho importe no fuese necesario para el desarrollo de las actividades del concesionario en España, su saldo será transferido a la cuenta de resultados del respectivo ejercicio económico, tributando como beneficios, en cuyo caso podrá ser transferible, de acuerdo con el art. 51 que comentamos.

El art. 52 regula la conversión en divisas en el caso de sociedades con capital mixto nacional y extranjero, las cuales podrán efectuarlo en la misma forma y cuantía que los concesionarios totalmente extranjeros, -



siempre y cuando sea necesario para cubrir las atenciones de que hablábamos anteriormente, pero con la limitación de que la conversión de los fondos destinados a la transferencia de beneficios sólo se autorizará hasta el porcentaje con que el capital extranjero participe en la empresa de carácter mixto. Vemos, pues, que la Ley sigue un criterio de igualdad entre las sociedades mixtas y aquéllas de capital totalmente extranjero, con la salvedad lógica de que los beneficios del capital nacional no son convertibles, ya que tienen su origen en pesetas, mientras que los beneficios, es decir los dividendos que correspondan a las acciones representativas del capital extranjero sí lo son.

Interesante es también en la Ley de Hidrocarburos el art. 57 que establece la sujeción sin restricción de ninguna clase de los titulares de permisos o concesiones a las Leyes y Tribunales españoles, siendo los Tribunales de Madrid los únicos competentes para conocer de todos los asuntos entre los titulares y el Estado - que tengan relación con la Ley para la Investigación y Explotación de los Hidrocarburos. Esta norma es de carácter preceptivo, por lo cual no puede ser variada - por un pacto en contrario entre las partes, es decir - que cual uier cláusula contractual de sumisión a una legislación o Tribunal extranjeros carecería completamente de valor, ya que el Estado se reserva la sobera-

nía jurisdiccional para h entender de todos los problemas que pueda plantear la investigación y explotación de los hidrocarburos en España.

Particularmente, y después del esbozo que hemos hecho de las disposiciones de la Ley relativas a los extranjeros, consideramos que la misma constituye el intento legislativo más avanzado español con respecto a la participación extranjera. Sus normas son amplias y liberales y directamente favorecedoras de la inversión extranjera en una actividad en la que con los propios medios nacionales sería muy difícil obtener un resultado rentable. Por otra parte, se hace agradable la inversión al capital extranjero al gozar el mismo de las más amplias posibilidades de transferir en su día los beneficios obtenidos al extranjero, con el fin de utilizarlos en nuevas inversiones. La Ley ha tenido para ello especialmente en cuenta que la prospección de hidrocarburos constituye una actividad completamente distinta de todas las demás de tipo industrial, - pues en el fondo no es otra cosa que un juego de azar con mínimas posibilidades de obtener un beneficio. El sistema de trabajo y contable es el de invertir grandes cantidades en la búsqueda de yacimientos, cantidades que se invierten a fondo perdido. La probabilidad de encontrar un yacimiento, previos los necesarios estudios geológicos, es de un 6 %. En el caso de descu-

brimiento de hidrocarburos en cantidades comerciales, se procede, en primer lugar, sin reparto alguno de beneficios, a la amortización de la totalidad de los gastos efectuados para el alumbramiento y, una vez amortizados los mismos, es cuando se obtiene un beneficio, pero al mismo tiempo se destina una gran parte de él a crear fondos de reserva, como el factor de agotamiento y otros destinados a efectuar inversiones para nuevos alumbramientos.

Por otra parte, interesa hacer constar que no sólo la Ley y su Reglamento son altamente prometedores, sino que, por otra parte, son interpretados en un sentido amplio y liberal por las Autoridades competentes españolas, en especial por el Servicio de Hidrocarburos del Ministerio de Industria, partiendo de la base de que el objetivo primordial de la Ley es el alumbramiento de los citados hidrocarburos en territorio nacional, procurando, por lo tanto, suprimir en la mayor medida posible cualesquiera trabas de tipo administrativo que pudieran entorpecer la labor del concesionario, tanto nacional como extranjero, dando al mismo todas las facilidades que precise.

3ª) Empresas cinematográficas.

Durante la vigencia de la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional de 24 de Noviembre de 1939 se suscitaba la duda de si la producción cinematográfica debía considerarse como incluida en la misma, ya que - de su art. 1 no se deducía expresamente tal inclusión. Por otra parte, el capital extranjero se había introducido en tal forma en la industria cinematográfica española que amenazaba con el control de la misma en breve plazo.

Con motivo de ello se publicó el Decreto-Ley de 25 de Enero de 1946 que fué ratificado con fuerza de Ley con fecha 27 de Abril del mismo año, en el cual se consideraron aplicables a las industrias de la producción cinematográfica nacional los preceptos de la Ley de 24 - de Noviembre de 1939 como incluidas en el apartado d) del art. 3 de la misma, es decir como industrias diversas. El fundamento para ello eran los aspectos educativos intrínsecamente unidos a la exhibición de las películas que concurrían en la producción cinematográfica, pero el mismo Decreto-Ley que citamos fué aún más lejos que la Ley de 24 de Noviembre de 1939 en su art. 2, al exigir que a partir de su vigencia el capital social de las empresas que posean o exploten estudios, laboratorios o, en general, establecimientos para la produ--

cción cinematográfica en España, así como él de las - dedicadas a estas producciones, doblaje o actividades asimilables, sería íntegramente español, es decir no se permitía participación extranjera alguna, lo cual era establecer para la industria cinematográfica unas restricciones frente al capital extranjero de la misma cuantía que las industrias para la defensa nacional. Continuaba estableciendo el citado Decret-Ley - que las acciones de dichas empresas serán precisamente nominativas, intransferibles a extranjeros y quedarán registradas en libros llevados al efecto por las empresas, en los que se anotarán detalladamente las - transmisiones que entre españoles puedan efectuarse.

El art. 3 del citado Decreto-Ley obligaba a todas las empresas cinematográficas a convertir en un plazo de 60 días a partir de su publicación sus acciones al - portador en nominativas y a comunicar al Ministerio - de Industria y Comercio en los 30 días siguientes qué acciones de empresas cinematográficas se encontraban en poder de extranjeros.

Esta comunicación al Ministerio de Industria y Comercio debía ser efectuada asimismo por las sociedades - colectivas y las comanditarias simples, así como por las personas individuales extranjeras que en el momento de publicación del Decreto-Ley explotasen una empresa cinematográfica.

El Decreto-Ley que tratamos prohibió asimismo en su art. 4 la inoperancia de sus finalidades por medio de contratos de arrendamiento, cesión o cualesquiera similares, obligando asimismo a presentar los posibles contratos que estuviesen en vigor al Ministerio de Industria y Comercio en plazo no superior a treinta días.

Finalmente, el art. 5 del Decreto-Ley prevé la posibilidad concordante con el art. 7 de la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria de variar las restricciones del Decreto-Ley por razones de reciprocidad o de alta conveniencia nacional.

La vigencia del Decreto-Ley que comentamos de 25 de Enero de 1946 fué declarada subsistente y en pleno vigor por Decreto de 14 de Diciembre de 1951.

Resumiendo lo anteriormente expuesto, la industria o cinematográfica, excepción hecha de las industrias o dedicadas a la defensa nacional, es la que más restricciones impone aún al capital extranjero, puesto que en principio existe la prohibición de invertir el mismo en empresas cinematográficas, aunque sea en cuantía mínima, y únicamente, previo acuerdo del Consejo de Ministros, con motivos de reciprocidad o de alta conveniencia nacional puede admitirse una participación extranjera en estas empresas.

Consideramos exagerados los motivos de la finalidad educativa del cine para imponer esta restricción, ya que el Estado, a través del Ministerio de Información y Turismo, goza del medio adecuado para que las empresas cinematográficas españolas sigan las directrices que les sean marcadas, a través de la institución de la censura. Sabido es que todo comerciante o industrial se mueve únicamente y crea industrias o empresas, con el fin de ganar dinero y obtener un beneficio lo más grande posible, quedando relegados a segundo plano cualesquiera otros intereses. Por este motivo, podemos tener la seguridad absoluta de que cualquier empresa cinematográfica extranjera establecida en España únicamente produciría películas de acuerdo con las normas que le dictase el Gobierno español, ya que en caso contrario la censura prohibiría la proyección de las mismas, haciendo no sólo irrisorios los beneficios de la producción, sino originando al productor una grave pérdida. No podemos, por este motivo, comprender como el art. 3 del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959 ha excluído a las empresas cinematográficas de su regulación general, permitiendo la aportación de capital extranjero en las mismas condiciones que en otras que pueden ser de mucha mayor importancia para la Nación. Es casi seguro que toda esta legislación necesita de una nueva regulación que abra las puertas a la inversión extranjera con arreglo a las nuevas -

tendencias seguidas en esta materia de inversiones.

#### 4ª) Empresas bancarias.

Conforme a la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de Diciembre de 1946, cuyo título segundo regula la banca privada, se entiende que ejercen el comercio de banca las personas naturales o jurídicas que con habitualidad y ánimo de lucro reciben del público en forma de depósito irregular, o en otras análogas, fondos que aplican por cuenta propia a operaciones activas de crédito y a otras inversiones, con arreglo a las Leyes y a los usos mercantiles, prestando, además, por regla general, a su clientela servicios de giro, transferencia, custodia, mediación y otros, en relación con los anteriores propios de la comisión mercantil.

El art. 40 de la citada Ley de Ordenación Bancaria trata del régimen de los bancos extranjeros en España y puede calificarse, pese a la época en que fué promulgada, como una Ley liberal y concedora de la actividad bancaria y, por lo tanto, sin prejuicios frente a las actividades de extranjeros en esta clase de negocios. Se condiciona en él el ejercicio de las actividades bancarias al principio de reciprocidad a los países de origen de los bancos respectivos, no limitándose en absoluto la participación de capital extranjero en los mismos. El principio de que parte el art. 40 que comen



tamos es él de que la disciplina bancaria que establecen las Leyes españolas se aplicará asimismo a las oficinas bancarias extranjeras establecidas en territorio español. Ello es lógico, aunque sólo sea por razón de garantía y seguridad a los particulares que llevan su dinero a estos bancos, amparados en la confianza que los mismos les merecen y en la regulación legislativa que el Gobierno les ha dado. Además, constituiría un contrasentido que un banco extranjero operase en España rigiéndose por normas distintas que los bancos nacionales.

Sentado asimismo el principio de reciprocidad, el Gobierno podrá exigir, además, del banco extranjero que quiere establecerse en España la prestación de una garantía constituida en depósitos en efectivo o en efectos públicos, la cual fijará discrecionalmente. La razón de esta medida no es otra que la garantía de los depositarios españoles que acudan con sus fondos a los citados bancos extranjeros.

El art. 40 que comentamos establece asimismo el principio de la previa autorización del Gobierno para la cesión o traspaso a bancos o banqueros españoles de negocios bancarios extranjeros, estableciendo finalmente una sección especial en el Registro de Bancos y Banqueros, llevado por la Dirección General de Banca

y Bolsa con el fin de inscribir en él a los bancos y -  
banqueros extranjeros que operen en España.

Como vemos, la Ley de Ordenación Bancaria permite al -  
extranjero el ejercicio libre de esta actividad en te-  
rritorio español, sin sometimiento a ninguna clase de  
limitaciones de capital o de gerencia, si bien su esta-  
blecimiento puede quedar condicionado al principio de  
reciprocidad con su país respectivo y <sup>a</sup>la prestación -  
de una garantía, cuya cuantía será fijada discrecional-  
mente por el Gobierno.

Por otra parte, el banquero extranjero queda sometido  
a las mismas normas que el banquero español, es decir  
a obtener del Gobierno la autorización para ejercer el  
comercio de banca previo informe del Consejo Superior  
Bancario, conforme ordena el art. 38 de la misma Ley.

#### 5º) Compañías de Seguros.

Nuestra actual legislación fundamental en materia de -  
seguros se encuentra contenida en la Ley de 16 de Di-  
ciembre de 1954, la cual también ha sido de gran libe-  
ralidad para con la inversión extranjera, siguiendo -  
las normas tradicionales de nuestro Derecho en esta ma-  
teria. Para comprender esta postura, hay que partir de  
la base de la relación tan inmensa existente entre las  
compañías de seguros nacionales y extranjeras, en vir-

tud del principio del reparto del riesgo que obliga a las compañías a reasegurarse unas en otras y a solicitar finalmente la ayuda del Lloyd de Londres en los casos de seguros cuyo riesgo no están en condiciones de soportar por sí solas.

A la citada Ley quedan sometidas todas las entidades que practiquen operaciones de seguro y reaseguro privados en sus distintas modalidades.

Nuestra legislación excluye en el ramo del seguro al asegurador individual por el riesgo que una sola persona significaría para los asegurados, ordenando el art. 1 de la Ley de 16 de Diciembre de 1954 que las operaciones de seguro y reaseguro privados únicamente podrán realizarse por Sociedades Anónimas o asociaciones mutuas que se hallen constituidas legalmente, sean españolas o extranjeras. Vemos que el art. 1 sienta prácticamente el antiguo principio de nuestro Derecho de igualdad en esta materia entre nacionales y extranjeros, si bien posteriormente exige a estos últimos la prestación de ciertas garantías.

El art. 5 de la Ley que comentamos establece la documentación que deben presentar las sociedades extranjeras que deseen ser autorizadas e inscritas en España para ejercer actividades aseguradoras con independencia de los que tienen que presentar las españolas. Esta documentación es la siguiente:

- 1.º) Una declaración de sometimiento a las Leyes españolas. Consideramos esta declaración como una redundancia, ya que conforme al art. 15 de nuestro Código de Comercio por el hecho de trabajar en España estas compañías aseguradoras extranjeras quedaban automáticamente sometidas a nuestras Leyes y a la jurisdicción de nuestros Tribunales.
- 2.º) Certificación oficial acreditativa de hallarse funcionando legalmente en el país de origen y de los ramos en que operan, únicos en los que pueden ser autorizados en España.
- 3.º) Balances y cuentas de pérdidas y ganancias de los cinco últimos ejercicios sociales.
- 4.º) Designación de la persona que con plenos poderes - ha de representar en España a la entidad de que se trata y del domicilio en que la delegación centralizará sus obligaciones.
- 5.º) Cuando en los países de origen de las entidades extranjeras solicitantes se exija a las españolas mayor depósito que el establecido para los nacionales, el Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Dirección General de Seguros, podrá elevar los depósitos que las referidas entidades deben constituir en España en cuantía proporcional a la que a las entidades españolas se les exige en el país respectivo.

Todos los documentos que presenten estas entidades de  
berán estar redactados en lengua española o debidamente  
traducidos por la Oficina de Interpretación de Lengu  
as del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El art. 8 de la Ley vuelve a fijar el principio de -  
igualdad de las sociedades aseguradoras extranjeras -  
con las nacionales, estableciendo que deberán tener -  
en su país capitales equivalentes, como mínimo, a los  
exigidos a los españoles en esta Ley, constituir igual  
les depósitos y además justificar haber situado también  
en España la cantidad de pts. 2.000.000,--, des-  
tinadas a las atenciones de carácter general.

Unicamente el art. 10 deja libre la discrecionalidad  
administrativa en su número 6 al establecer que podrá  
ser denegada la autorización para operar y subsiguiente  
inscripción en el Registro a las compañías extran-  
jeras, cuando así lo aconsejen las circunstancias del  
caso, previos los informes de los Organismos competentes  
tes.

No obstante, de este artículo no puede derivarse una  
negativa arbitraria al establecimiento de una compa-  
ñía de seguros extranjera en España, puesto que las -  
circunstancias a que el mismo se refiere y los infor-  
mes de los Organismos competentes deberían tener su -  
fundamento en alguna causa legal, por lo que, a nues-

tro entender, una resolución denegatoria de este tipo sería recurrible en la vía contencioso-administrativa ante las Salas Tercera y Cuarta del Tribunal Supremo.

Vemos, pues, que nuestra legislación en materia de seguros tiene inspiraciones de tipo moderno y es comparable con las más liberales de esta materia en otros países extranjeros. Al igual que el negocio de banca, el negocio de seguros privados exige una confianza - por parte del asegurado en el asegurador, con el fin de que en el desgraciado momento que llegue el siniestro pueda aquél verdaderamente cubrirle el daño acaecido. De ahí que las medidas adoptadas frente a los - establecimientos extranjeros sean únicamente de carácter cautelar, exigiendo ciertas garantías y depósitos en España que puedan responder con rapidez de los resultados de la actividad aseguradora.

Por otra parte, una limitación de esta actividad frente a los extranjeros sería prácticamente imposible - por la tupida red de relaciones contractuales destinadas a dividir el riesgo que existe entre las compa--ñías aseguradoras de todos los países del mundo. Creemos, pues, que esta Ley no exige retoque alguno, pues desde siempre ha estado inspirada en las más modernas tendencias en esta actividad.

6º) Empresas Navieras.

Las empresas navieras, por dedicarse al transporte marítimo, han sido consideradas como industria al amparo de la Ley de 24 de Noviembre de 1939. No obstante, la prohibición de adquisición de buques por extranjeros es más antigua y data del Decreto de 22 de Agosto de 1931, actualmente en vigor. Conforme al citado Decreto, está prohibida la venta a toda clase de personas, tanto naturales como jurídicas extranjeras, de los buques mercantes nacionales de todas clases, así como su abanderamiento en cualquier país extranjero, prohibiéndose la constitución de hipotecas sobre buques nacionales a favor de personas naturales o jurídicas extranjeras y, en general, toda operación o contrato que tienda a mermar el pleno dominio del armador nacional o las facultades del Estado sobre el buque nacional.

El art. 3 del citado Decreto declara que adolecerán de nulidad las transmisiones de propiedad de buques nacionales, así como los gravámenes que sobre ellos se establezcan a favor de personas naturales o jurídicas extranjeras.

Esta disposición tan drástica que prohibía totalmente el acceso del extranjero a la propiedad del buque nacional ha sido suavizada por la Ley de 27 de Febrero

de 1939, así como por la Ley de 5 de Abril de 1930, - conforme a las cuales se autorizan los gravámenes hipotecarios, es decir la hipoteca naval sobre buques - españoles, con el fin de facilitar la compra por parte española de buques de bandera extranjera.

Consideramos, igual que en otros casos anteriores, la legislación relativa a nuestros buques mercantes como anticuada y creemos que justamente la inversión extranjera podría ser una de las formas de rejuvenecer y vigorizar nuestra flota mercante, especialmente desde el punto de vista de nuestras exportaciones al extranjero, al poder el exportador pagar los fletes en pesetas y en condiciones más ventajosas que cuando se ve obligado al fletamiento en buques extranjeros.

7º) Sociedades españolas dedicadas a la construcción, conservación y explotación de carreteras y caminos.

Ante la situación que atravesaban nuestras carreteras y caminos, se dictó la Ley de 22 de Diciembre de 1960, por la cual se autoriza al Gobierno para conceder en las condiciones que la misma regula y por tiempo determinado no superior a 99 años a particulares, sociedades, corporaciones públicas, organismos autónomos - o empresas nacionales la construcción, conservación y explotación de carreteras y de sus instalaciones complementarias.



El art. 8 de la citada Ley establece que la concesión recaerá precisamente en personas naturales o jurídicas de nacionalidad española sometidas a la jurisdicción de los Tribunales españoles sin perjuicio de la participación de capital extranjero que expresamente autorice la Presidencia del Gobierno, en aplicación de la legislación vigente en cada caso.

El citado art. 8 de la Ley nos parece incongruente y haber sido redactado por quien no conocía más que someramente la legislación vigente en nuestra Patria en materia de inversiones extranjeras. En efecto, si la concesión recae en una persona jurídica de nacionalidad española, podemos encontrarnos ante el caso de una sociedad cuyo capital sea en gran parte extranjero, mientras que la misma goza de la nacionalidad española conforme al art. 27 del Código Civil por hallarse domiciliada en España y constituida conforme ordenan las Leyes españolas.

Por otra parte, la Presidencia del Gobierno no es el Organismo cualificado para conceder porcentajes de capital extranjero, ya que los inferiores al 50 % se obtienen sin autorización alguna y para los superiores la competencia es del Consejo de Ministros, o sea que debemos interpretar rectamente el art. 8 de la citada Ley en el sentido de que si se trata de una persona física, el concesionario de la carretera deberá tener

la nacionalidad española, y si se trata de una persona jurídica, la participación del capital extranjero en la misma será la autorizada por la Ley o, en caso de una inversión superior al 50 %, por el Consejo de Ministros.

Por otra parte, no se han dictado las disposiciones complementarias por los Ministerios de Hacienda y Obras Públicas previstas en el art. 9 para el desarrollo de la Ley, por lo cual creemos que en la práctica, transcurrido ya año y medio desde la fecha de su promulgación, la misma no se llevará a efecto.

IX

ADQUISICION DE INMUEBLES POR PARTE DE EXTRANJEROS EN -  
ESPAÑA.

Hasta la fecha hemos tratado en esta tesis las inversiones de extranjeros en España de carácter más bien industrial o comercial, pero consideraríamos incompleto este trabajo si no tratásemos también, aunque sólo sea de pasada, el problema de la adquisición de inmuebles por súbditos extranjeros y las restricciones que aún existen en nuestro Derecho en esta materia, las cuales podemos clasificar en los tres grupos siguientes:

- 1º) Por motivos de defensa de la agricultura española.
- 2º) Por motivos de la legislación monetaria.
- 3º) Por motivos de seguridad nacional.

Examinaremos seguidamente cada una de estas tres restricciones:

1º) Defensa de la agricultura:

Existe en la actualidad la duda de si se encuentra en vigor el Decreto de la República de 16 de Febrero de -

1932, prohibiendo la adquisición de fincas rústicas - de cualquier clase que sea por personas jurídicas extranjeras sin la autorización del Gobierno español. - La realidad es que en la práctica de los últimos años se ha venido haciendo caso omiso de esta disposición. Conforme a la misma las personas jurídicas extranjeras de cualquier clase que sean necesitarán la autorización previa del Gobierno para adquirir por compra, permuta, donación intervivos, licitación pública o privada y, en general, cesión por cualquier título, bienes inmuebles de carácter rústico, sitos en territorio español o derechos reales constituidos sobre los mis-mos.

La citada autorización deberá concederse por Decreto acordado en Consejo de Ministros, previo informe del Ministerio de Hacienda, en todo caso, y de los de - Agricultura y Obras Públicas cuando proceda. La autorización de que tratamos, únicamente será concedida - cuando los bienes que se traten de adquirir sean necesarios para la implantación, ampliación o modificación de un establecimiento, explotación o negocio - agrícola, industrial, comercial o minero.

Como ya expusimos antes, existen dudas acerca de si - este Decreto se encuentra actualmente en vigor y no - ha sido derogado implícitamente por la legislación - posterior. A nuestro entender, el citado Decreto care

ce de razón de ser, pues los motivos que en su día lo inspiraron, están recogidos en parte en la legislación posterior de inversiones de capital extranjero en España.

2º) Por motivos de política monetaria:

El número 18 del art. 1 de la Ley de Delitos Monetarios de 24 de Noviembre de 1938 considera delito monetario la venta de inmuebles sitos en España a favor - de residentes en el extranjero mediante precio en pesetas y sin autorización del Instituto Español de Moneda Extranjera. Por lo tanto, lo primero que debe hacer un extranjero cuando desea adquirir un inmueble - sito en España, es solicitar el oportuno permiso mediante escrito dirigido al Instituto Español de Moneda Extranjera, expresando el nombre del vendedor, precio y demás condiciones de la adquisición. El Instituto Español de Moneda Extranjera, para resolver el expediente, suele pedir la aportación de un certificado del catastro o Registro Fiscal correspondiente, del - que se deduzca el líquido imponible de la finca, para, por medio de una capitalización, poder calcular su - verdadero valor, el cual es tomado por el Instituto - como base para autorizar la transacción. Esta cifra - suele autorizarse en estas condiciones, pero el precio debe ser satisfecho en divisas libres admitidas -

a cotización en España.

Asímismo se impone la restricción de que, en el caso - de venta de la finca, su importe deberá ser ingresado en una cuenta corriente bloqueada, sometida al Decreto 313 del Instituto Español de Moneda Extranjera, de la cual sólo podrá disponerse mediante la autorización - del citado Organismo. Está claro que esta restricción únicamente afecta a los extranjeros no residentes en - España, pudiendo, por el contrario, los que residan en nuestro país, adquirir inmuebles libremente mediante - pago en pesetas. Asímismo afecta a súbditos españoles residentes en el extranjero.

3ª) Por motivos de seguridad nacional:

El origen de esta legislación se basa en consideraciones de tipo marítimo-militar ante el peligro de que - ciertos territorios de la nación necesarios para instalaciones militares o marítimas puedan ser adquiridos - por extranjeros. Tiene su origen en la Ley de 23 de Octubre de 1935, y su Reglamento de 28 de Febrero de - 1936, que han sido declarados vigentes por Decreto de 21 de Marzo de 1958 y 12 de Mayo de 1960.

Conforme a la citada legislación, en todas las islas - del territorio nacional la extensión total de las propiedades pertenecientes a entidades o individuos de -

nacionalidad extranjera no podrá exceder del 25 % de su superficie. Asimismo se prohíbe la adquisición por parte de las citadas entidades o individuos de nacionalidad extranjera de obras de cualquier clase, fincas o terrenos enclavados en las zonas que los citados Decretos detallan, siempre que estén situados fuera de poblado y no incluidas en sus ensanches y zonas urbanizadas, sin previa autorización del Ministerio del Ejército. Esta autorización se obtiene mediante instancia dirigida al Ministro del Ejército, la cual será cursada por conducto de las Autoridades Militares correspondientes, que la remitirán al Estado Mayor Central, acompañada de su informe y del de la Comandancia de Obras de Ingenieros, haciendo constar los antecedentes del interesado, su nacionalidad, la extensión de las propiedades extranjeras en la zona correspondiente, especificando nacionalidades, la proximidad de la finca a terrenos y obras pertenecientes al ramo de guerra y otras que pudieran tener importancia desde el punto de vista de la defensa nacional. Dichas zonas son las siguientes:

Zona de Baleares.- La totalidad del archipiélago.

Zona del Estrecho de Gibraltar.- Limitada: al Sur, por la costa del Estrecho; al Este, por el curso del río Guadiaro; al Oeste, por una línea recta que - una la punta de Camariñal con el extremo Sureste

de la Laguna de La Janda; y al Norte, por una línea sensiblemente paralela a la costa y situada a 20 kilómetros de la misma.

Zona de Galicia.- Comprende la totalidad de las costas gallegas e islas del litoral correspondiente, estando limitada hacia el interior por una línea recta que, partiendo del punto en que el río Miño deja de ser frontera con Portugal, sigue por la línea férrea de Vigo a Orense hasta Ribadavia, y desde aquí por las carreteras de Ribadavia a Carballino, Carballino a La Estrada, La Estrada a Santiago, Santiago a Lugo, Lugo a Fonsagrada y Fonsagrada a la Garganta hasta el límite con la Provincia de Oviedo.

Zona de Canarias.- La totalidad del archipiélago.

Plazas de Soberanía del Norte de Marruecos.- Hasta los límites del campo exterior.

Posesiones españolas de África Occidental.- La totalidad de los territorios que de dominio español o derecho de ocupación asignan los Tratados.

La realidad es que el Ministerio del Ejército ha sido siempre muy riguroso en la concesión de estas autorizaciones, lo cual ha motivado que las mismas se efectuen por medio de personas interpuestas, con todas las se-



cuelas que trae el empleo de fiduciarios en las adquisiciones de inmuebles. Por esto, la Ley de 12 de Mayo de 1960 ha establecido so pena de nulidad y con penas fiscales la obligación de inscribir en el Registro de la Propiedad las adquisiciones de inmuebles efectuadas por extranjeros.

Decreto-Ley de la Jefatura del Estado de 22 de Marzo de 1962 sobre la adquisición de fincas rústicas por - extranjeros.

Terminado este trabajo, ha venido a promulgarse el Decreto-Ley citado en el encabezamiento, con el fin de evitar que la especulación con los inmuebles españoles se realice por extranjeros y que sean los nacionales españoles quienes obtengan los beneficios de esta especulación.

En efecto, y coincidente con la liberalización económica española, el turismo extranjero se ha desbordado en forma de verdaderas migraciones anuales de masas humanas hacia España y en especial hacia los centros de atracción turística, como son nuestras islas, la Costa Brava, el Levante y la Costa del Sol.

Generalmente, el extranjero desea adquirir un terreno propio en España, construir sobre el mismo un chalet, con el fin de tener un lugar de descanso seguro duran

te sus vacaciones y lo que no debe olvidarse especialmente por parte del comprador centroeuropeo, un refugio al que pueda hñr en el caso de una nueva conflagración mundial.

Esta situación psicológica fué captada por diversas - empresas extranjeras quienes han procedido a adquirir extensas zonas españolas de fincas rústicas a precios normales, con el fin de urbanizar las mismas, parcelarlas y venderlas posteriormente en forma de parcelas a los turistas y compradores extranjeros. Dichas empresas han obtenido y de hecho obtienen un beneficio que no puede calificarse en absoluto de exorbitante, si se tienen en cuenta los cuantiosos gastos - que en publicidad y en transportes turísticos tienen en el extranjero para la atracción de la clientela.

No obstante, el Gobierno debió de pensar que al mismo tiempo tales empresas obtenían un beneficio especulativo, y posiblemente por el hecho de que nuestro Juzgado Especial de Delitos Monetarios instruída un procedimiento contra una empresa extranjera, se creyó en - la obligación de dictar con la mayor urgencia posible un Decreto-Ley que regulase y limitase la adquisición por los extranjeros de fincas en España superiores a 4 hectáreas de regadío o a 20 hectáreas de secano.

La prisa con que fué redactado el presente Decreto-

Ley se deduce ya de su art. 1, en el cual se hablaba - de "personas naturales, jurídicas o de cualquier otra clase", siendo así que desde los primeros albores del Derecho sólo han sido posibles dos clases de personas, las naturales y las jurídicas, ignorando todos los lectores a qué otra clase de personas podía referirse el Decreto-Ley. Efectivamente, pocos días después de su - publicación, el Boletín Oficial del Estado publicó la oportuna corrección, suprimiendo "las de cualquier otra clase".

Conforme al art. 1 del Decreto-Ley que comentamos, la adquisición en general por personas extranjeras, naturales o jurídicas, de 4 hectáreas de regadío o 20 hectáreas de secano queda supeditado a la autorización - del Consejo de Ministros en solicitud tramitada por la Presidencia del Gobierno y previos informes de los Ministerios de Justicia, Agricultura y Comercio.

En la práctica no creemos que el citado Decreto-Ley - tenga gran efecto, ni sea aplicable a muchas de las sociedades extranjeras que trabajan en esta actividad - mercantil en nuestro país. En primer lugar, porque las mismas suelen constituir para ello Sociedades Anónimas españolas, domiciliadas en España, en las cuales participan con el 50 % del capital autorizado por la Ley, - haciendo partícipes del restante 50 % a socios españoles de la misma actividad.

A través de su organización comercial en el extranjero la parte extranjera de la sociedad española se dedica a la venta, cobrando en el extranjero en este sentido la correspondiente comisión. O sea que prácticamente — el Decreto-Ley apenas si tendrá efectividad, puesto — que raras veces se dará el caso de que una persona física o jurídica extranjera compre directamente en España tales cantidades de terreno como se prevé en el Decreto-Ley.

Por otra parte, asimismo encontramos criticalbe el — art. 3 de la citada disposición, según el cual la inscripción en el Registro de la Propiedad será constitutiva para cuantos actos y contratos se prevén en el — art. 1 del Decreto-Ley, reputándose los mismos nulos — de pleno derecho, mientras no se inscriban en el Registro de la Propiedad.

Y aquí nos encontramos ante el caso de que un precepto puramente oportunista venga a derrumbar completamente el sistema inmobiliario e hipotecario español. Tanto — nuestra doctrina como la jurisprudencia del Tribunal — Supremo y la práctica jurídica han estimado siempre — que la transmisión de inmuebles se rige en España por la llamada teoría del título y del modo, en cuyo contenido no entramos por no ser objeto de esta tesis, siendo la inscripción en España puramente declarativa, con excepción de la hipoteca, a diferencia del Derecho —

germánico en el cual la inscripción es constitutiva.

Pues bien, nos encontramos en el caso de que no sólo - el Derecho material, sino prácticamente el Derecho ad-  
jetivo se transforma completamente en España, haciendo  
constitutiva la inscripción cuando quien adquiere es -  
un extranjero, y, en cambio meramente declarativa, -  
cuando él que adquiere es un español.

Por otra parte, la expresión de que los actos y contra-  
tos se reputen nulos de pleno derecho antes de la ins-  
cripción, la encontramos francamente desgraciada. Di-  
chos actos no serán nulos. En todo caso, no habrán lle-  
gado a realizarse, puesto que la nulidad requiere un -  
acto previo, pero con un defecto sea de fondo o de for-  
ma, que lo vicie e invalide, es decir que lo haga nulo  
de pleno derecho o inexistente, que es la expresión ju-  
rídica aplicable al caso.

Creemos que el Decreto-Ley hubiese quedado bastante me-  
jor redactado si en lugar de utilizar la expresión "nu-  
los de pleno derecho" hubiese dicho "dichos actos o -  
contratos no tendrán efectividad jurídica" o alguna -  
otra expresión similar.

El art. 4 da instrucciones a los Registradores de la -  
Propiedad y a los Notarios, y el art. 5 mantiene en vi-  
gor la legislación marítimo-militar a que hemos hecho  
mención en los apartados anteriores de este capítulo.

Creemos que la promulgación del citado Decreto-Ley no ha sido oportuna y, por el contrario, la estimamos ca si improcedente en estos momentos, pues viene a impo ner una restricción a la inversión extranjera no exis tente anteriormente y que además en la práctica obten drá muy poca aplicación.

Por otra parte, siendo el interés del Gobierno el fo- mentar el turismo que representa un asiento de cua- trocientos millones de dólares en nuestra Balanza de Pagos, no comprendemos la publicación del Decreto que viene, aunque de buena fe, a poner limitaciones a - aquellas personas que más hacen para el fomento y di- rección del turismo hacia España.

X

RESUMEN.

Hemos intentado exponer en esta tesis la legislación - vigente en España sobre inversiones extranjeras, así co- mo un bosquejo de su evolución durante los últimos - treinta años. La conclusión que se saca de ella es que nuestro Derecho, siguiendo en este punto la pauta de - bastantes otras legislaciones extranjeras, fué en un - principio de gran liberalidad frente al establecimien- to del extranjero en nuestro país y a la inversión de su capital en el mismo, como lo prueban los arts. 27 - del Código Civil y 15 del Código de Comercio. La in- fluencia del nacionalismo, que como un vendaval ha azo- tado a todos los países de Europa, tuvo también su ré- plica en el ámbito económico y en nuestra legislación propia, en especial en la Ley de 24 de Noviembre de - 1939. Desaparecidas estas circunstancias y abierto de nuevo el camino para una amplia comprensión y colabo- ración entre las diversas naciones, como los muestran la constitución del Mercado Común Europeo y de la Zona Europea de Libre Cambio, y coincidiendo con la entra-

de España en la O.E.C.E. y la solicitud de ingreso de España en el Mercado Común, nuestra legislación cambió de rumbo, dirigiéndose, si bien tímidamente en un principio, de nuevo hacia el sistema de igualdad de trato de las inversiones y establecimientos extranjeros con las nacionales propias, que debe ser en última instancia la meta deseada por todas las legislaciones.

Muchos son los argumentos que se han esgrimido en contra de las inversiones extranjeras, siendo los dos más fundamentales el del supuesto colonialismo económico y el de que las empresas extranjeras actúan en beneficio de sus propios países y no en interés nacional. El primero de ambos argumentos cae por su base, pues en primer lugar el capital extranjero normalmente ha creado nuevas fuentes de riqueza, allí donde no las había, y con el fin de poder obtener beneficios, su interés ha de ser coincidente con el de la nación en que trabaja, siendo, por lo tanto, muy difícil que pueda actuar en contra de los intereses de la misma, ya que le coarta la legislación interna.

Por otra parte, el colonialismo económico es hoy poco menos que imposible, pues el Estado moderno goza de medios suficientes para poder cortar por su raíz cualquier intento de este tipo, llegando incluso a la expropiación forzosa de la empresa en cuestión de acuerdo con la legislación vigente. En un tiempo como el -



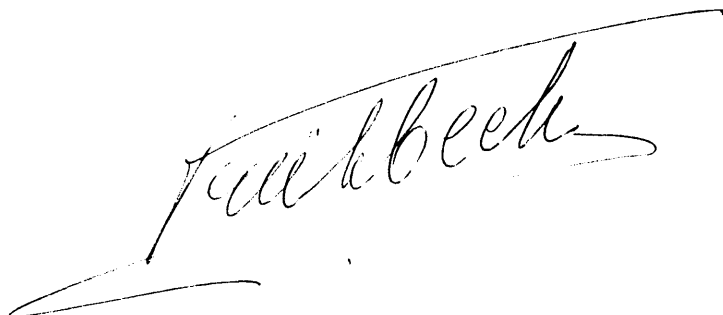
actual, en que se habla de la unión del occidente y - se piensa incluso seriamente en una futura fusión política de las naciones de Europa occidental, como consecuencia del Mercado Común Europeo, las limitaciones a la libre inversión de los extranjeros quedan ya anticuadas y simplemente como recuerdo de otros tiempos.

Por ello es merecedor de alabanzas el nuevo sistema - seguido por nuestra legislación a partir del Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959, si bien sería de desear - una recopilación de las diversas disposiciones dictadas en una sola Ley que rigiese para toda clase de inversiones extranjeras, incluso las que hoy en día se encuentren desperdigadas en disposiciones especiales, con el fin de tener un solo cuerpo legal, en él que - todas estas cuestiones estén reguladas.

En segundo lugar deberían aclararse asimismo las dudas que actualmente suscita nuestra vigente legislación acerca de sociedades comerciales e industriales, y, finalmente, tender a una liberalización total de - las inversiones extranjeras sin limitación de clase - alguna, salvo en aquellas ramas que afecten de una manera decisiva a la defensa de la Nación.

Creemos que éstos han sido los objetivos del legislador y que andando el tiempo las últimas restricciones que existen en nuestro Derecho interno desaparecerán.

Las ventajas de la libre inversión extranjera serían, sin lugar a dudas, la creación de nuevas industrias y fuentes de riqueza que darían trabajo y colocación a mucha gente, produciendo mercancías que en la actualidad tenemos que importar del extranjero, y repercutiendo favorablemente en nuestra Balanza de Pagos. No debemos olvidar que los resultados obtenidos en la primera etapa de nuestro plan de estabilización, con la consiguiente liberalización de las inversiones extranjeras, han arrojado un saldo positivo en divisas desconocido en los últimos veinte años y superior al oro de las reservas del Banco de España que, en su día, fué trasladado por el Gobierno de la República a México y a la Unión Soviética. Debe, pues, crearse un clima, y ésta será la tendencia del legislador, de mutua libertad en materia de inversiones extranjeras, sin perjuicio del control que el Estado se reserva en casos de excepcional importancia. No debemos olvidar que el mejor medio de unión de los pueblos son las relaciones económicas que como secuela de las mismas traen las culturales y las de amistad.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Juan B. Béch", with a long horizontal flourish extending to the left.

INDICE.

I.- Antecedentes históricos .....	Página	1
II.- La actual condición del individuo en el Derecho Internacional moderno .....	"	5
III.- La situación jurídica del extranjero frente a otro Estado .....	"	17
IV.- El artículo 27 del Código Civil y el artículo 15 del Código de Comercio ...	"	29
V.- Restricciones a las inversiones extran- jeras en el Derecho español .....	"	34
VI.- Legislación actual: El Decreto-Ley de 27 de Julio de 1959 y disposiciones - complementarias del mismo .....	"	63
VII.- Adquisición por extranjeros de valo- res mobiliarios de sociedades españo- las .....	"	112
VIII.- Empresas que disfrutaban de una legis- lación especial .....	"	136

IX.- Adquisición de inmuebles por parte de extranjeros en España .....	Página 177
X.- Resumen .....	" 189
Indice .....	" 193

BIBLIOGRAFIA.

KARL JOSEF PARTSCH: INDIVIDUUM IM VÖLKERRECHT. (Wörterbuch des Völkerrechtes, 2<sup>a</sup> tomo, Berlín, 1961.)

CHARLES ROUSSEAU: DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. (Madrid, 1961.)

ALFRED VERDROSS: DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. (Madrid, 1961.)

GEORG DAHM: DIE STELLUNG DES MENSCHEN IM VÖLKERRECHT - UNSERER ZEIT. (Tübingen, 1961.)

DR. PAUL GUGGENHEIM: VÖLKERRECHTLICHE SCHRANKEN IM LANDESrecht. (Karlsruhe, 1955.)

JOSE MARIA MAURETA GONZALEZ; LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA (en VIII Semana de Estudios de Derecho Financiero. Madrid, 1960.)

RAFAEL ACOSTA ESPAÑA: INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LA INVERSION EXTRANJERA (en VI Semana de Estudios de Derecho Financiero. Madrid, 1958.)